

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCION
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Vigésima Primera Reunión del Comité de Expertos
Del 18 al 22 de marzo de 2013
Washington, DC

OEA/Ser.L.
SG/MESICIC/doc.361/12 rev. 4
22 marzo 2013
Original: inglés

REPUBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO

INFORME FINAL

(Aprobado en la sesión plenaria del 22 de marzo de 2013)

SUMARIO

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en la República de Trinidad y Tobago del artículo III, párrafo 9, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda; las buenas prácticas informadas por dichos órganos; y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a la República de Trinidad y Tobago en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité, y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas *in situ* y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de la República de Trinidad y Tobago al cuestionario; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita *in situ* realizada entre el 2 y el 4 de octubre de 2012 por los miembros del subgrupo de análisis de la República de Trinidad y Tobago, integrado por Antigua y Barbuda y Brasil, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por la República de Trinidad y Tobago y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil sobre temas útiles para el análisis, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas, facilitó la obtención de información sobre buenas prácticas

El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, a determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si éste es adecuado, para los propósitos de la Convención, y si existen resultados objetivos; y teniendo en cuenta lo observado se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.

Los órganos de control superior de la República de Trinidad y Tobago analizados en este informe son: la Comisión de Integridad, la Auditoría General, las Comisiones de Servicio, en especial la Comisión del Servicio Público y la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, el Ministerio de la Procuraduría General, específicamente la Dirección de la Fiscalía y la Oficina de Investigaciones Anticorrupción (ACIB), y la Defensoría del Pueblo.

Algunas de las recomendaciones formuladas a la República de Trinidad y Tobago para su consideración en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

Suministrarles a la Comisión de Integridad, a las Comisiones de Servicios, a la Dirección de la Fiscalía, la Oficina de Investigaciones Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo los recursos financieros y humanos necesarios para que cumplan cabalmente con sus atribuciones y funciones, dentro de los recursos disponibles.

En cuanto a la Comisión de Integridad, otorgarle competencia para imponer sanciones administrativas; implementar un marco legislativo para el examen de los órganos públicos a fin de facilitar la identificación de prácticas corruptas; y realizar programas de capacitación para las personas que ejercen funciones públicas sobre sus responsabilidades según el Código de Conducta en la Ley sobre la Integridad en la Función Pública así como sobre las protecciones existentes en el lugar de trabajo para quienes denuncian actos de corrupción.

En lo que respecta a la Auditoría General, otorgarle competencia para imponer sanciones administrativas a las dependencias gubernamentales y organismos públicos que no entreguen sus estados financieros, así como publicar una lista de las instituciones estatutarias que en el año no hayan presentado estos estados financieros; y mantener estadísticas sobre los montos devueltos al Estado en casos de robos o pérdidas detectados.

En lo atinente a la Comisión de Servicio, implementar mecanismos para modernizar el proceso de reclutamiento y selección para que opere de manera eficiente y ágil y hacer frente a las prolongadas demoras en el proceso disciplinario; así como publicar todos los informes anuales de la Comisión del Servicio Público y la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos en el sitio web del Departamento de la Comisión de Servicio.

Con respecto al Ministerio de la Procuraduría General, en especial la Dirección de la Fiscalía y la Oficina de Investigaciones Anticorrupción (ACIB), considerar establecer medidas o mecanismos que aseguren la independencia de la Dirección de la Fiscalía en asuntos administrativos, establecer un mecanismo a través del cual la Dirección de la Fiscalía envíe comunicaciones de seguimiento a los órganos gubernamentales que le remita conductas irregulares, y hacer frente a la baja tasa de condenas por delitos de corrupción en comparación con el número de investigaciones efectuadas por la ACIB. En lo que toca a la ACIB, establecer un programa formal de capacitación, y difundir su trabajo anualmente de manera fácil y rápidamente disponible al público.

En cuanto a la Defensoría del Pueblo, establecer plazos, con mecanismos de aplicación adecuados, para que los departamentos o autoridades del gobierno le respondan al Defensor del Pueblo con respecto a la implementación de las recomendaciones, publicar una lista de las instituciones gubernamentales que no han cumplido alguna recomendación del Defensor del Pueblo e implementar medidas o mecanismos para establecer un presupuesto para la Defensoría que asegure un cierto grado de autonomía financiera.

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a la República de Trinidad y Tobago en la Primera Ronda, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, con base en la metodología de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por la República de Trinidad y Tobago en su respuesta al cuestionario y en la visita *in situ*, se definieron cuáles de dichas recomendaciones habían sido implementadas satisfactoriamente, cuáles requerían atención adicional y cuáles precisaban ser replanteadas y se hizo un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como Anexo I del informe.

Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones se destacan el establecimiento de un Registro en la Comisión de Integridad y poner a disposición del público la respuesta del Grupo de Líderes de Opinión.

Algunas de las recomendaciones formuladas a la República de Trinidad y Tobago en la Primera Ronda que quedan vigentes o que han sido replanteadas apuntan a propósitos tales como: establecer códigos de conducta para funcionarios judiciales, así como para el Poder Judicial; sujetar a los empleados por contrato al Código de Conducta de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública; obligar a todos los servidores públicos a denunciar actos de corrupción de los que tengan conocimiento durante el ejercicio de sus funciones públicas; ampliar el Anexo de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública para incluir otros cargos públicos con responsabilidades de alto nivel en la implementación de la política pública; y asegurar que las autoridades públicas cumplan con su deber estatutario de responder dentro de los 30 días siguientes a una solicitud con base en la Ley de Libertad de Información.

**COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCIÓN**

**INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA DE TRINIDAD Y
TOBAGO DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER
ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES FORMULADAS A DICHO PAÍS EN LA PRIMERA RONDA ¹**

INTRODUCCIÓN

1. Contenido del informe

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis integral de la implementación en la República de Trinidad y Tobago de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción que fue seleccionada por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la Cuarta Ronda de Análisis. Dicha disposición es la prevista en el artículo III, párrafo 9, de la Convención, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.²

[2] En segundo lugar, aludirá a las buenas prácticas que en relación con los órganos de control superior objeto de análisis en el presente informe, el Estado analizado ha deseado voluntariamente compartir.

[3] En tercer lugar, de conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos del MESICIC en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República de Trinidad y Tobago por el Comité de Expertos del MESICIC en el informe que adoptó para este país en la Primera Ronda, y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes que adoptó para el mismo en la Segunda y Tercera Rondas, los cuales se encuentran publicados en: www.oas.org/juridico/spanish/tto.htm

2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República de Trinidad y Tobago ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 15 de abril de 1998 y depositó el respectivo instrumento de ratificación el día 18 de marzo de 1999.

[5] Asimismo, la República de Trinidad y Tobago suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el día 4 de junio de 2001.

1. El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 22 de marzo de 2013, en el marco de su Vigésima Primera Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 18 al 22 de marzo de 2013.

2. Un resumen del marco jurídico e institucional de la República de Trinidad y Tobago está disponible en: www.oas.org/juridico/english/tto.htm.

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

1. Respuesta de la República de Trinidad y Tobago

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República de Trinidad y Tobago en todo el proceso de análisis y, en especial, del Ministerio de la Procuraduría General, la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. La República de Trinidad y Tobago envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos pueden consultarse en: www.oas.org/juridico/english/mesicic4_tto.htm

[7] Asimismo, el Comité deja constancia que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*,³ la cual se realizó durante los días del 2 al 4 de octubre de 2012, por parte de los representantes de Antigua y Barbuda y Brasil, en su calidad de integrantes del subgrupo de análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*.

[8] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República de Trinidad y Tobago hasta el día 4 de octubre de 2012, fecha de culminación de la visita antes aludida y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría y por los integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el *Reglamento y Normas de Procedimiento*; la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda*; y la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*.

2. Documentos y opiniones recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros, de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores

[9] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, documentos de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 34 b) del Reglamento del Comité.

[10] No obstante, con ocasión de la práctica de la visita *in situ* realizada al Estado analizado, se recabó información de la sociedad civil que fueron invitados a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la Realización de las Visitas in Situ*, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita *in situ* que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos.

3. Documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2, disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf

II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)

[11] La República de Trinidad y Tobago cuenta con un conjunto de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, entre los que cabe destacar los siguientes: la Comisión de Integridad, la Auditoría General, la Dirección de la Fiscalía, las Comisiones de Servicio y el Defensor del Pueblo (“Ombudsman”).

[12] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cinco órganos seleccionados por la República de Trinidad y Tobago que serán analizados en el presente informe:

[13] La Comisión de Integridad es responsable de promover la integridad como elemento fundamental de la sociedad de Trinidad y Tobago. Tiene el mandato constitucional de cerciorarse que de las personas del servicio público y que ejercen funciones públicas cumplan las leyes que rigen la integridad en el desempeño de sus responsabilidades hacia las personas a las que sirven. La Comisión también emprende iniciativas dirigidas a facilitar la participación de los ciudadanos en la dinámica evolución del sistema.

[14] La Auditoría General es responsable de auditar los estados financieros de los ministerios y departamentos gubernamentales, órganos oficiales y otras agencias similares.

[15] El Ministerio de la Procuraduría General es responsable de verificar que exista en Trinidad y Tobago la estructura legislativa y administrativa necesaria para controlar, combatir y erradicar la corrupción. En este sentido, dispone de la Dirección de la Fiscalía, que tiene la responsabilidad completa por todos los procesos penales del país, y de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción, encargada de investigar los delitos de corrupción.

[16] Las Comisiones de Servicio —la Comisión del Servicio Público, la Comisión del Servicio de Policía, la Comisión del Servicio de Docencia y la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos— tienen a su cargo nombrar, promover, transferir, confirmar y destituir a los funcionarios públicos bajo su esfera de competencia, así como ejercer control disciplinario sobre ellos.

[17] La Defensoría del Pueblo, cuya misión es velar por la protección de los ciudadanos y no ciudadanos contra la injusticia burocrática investigando eficazmente las quejas de manera imparcial y expedita, educar al público con respecto a sus derechos y abogar por el mejoramiento de la calidad y de los estándares de la administración pública en Trinidad y Tobago.

1. COMISIÓN DE INTEGRIDAD

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[18] La Comisión de Integridad cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[19] Con respecto a sus objetivos y funciones, la sección 138 de la Constitución de la República de Trinidad y Tobago especifica que la Comisión de Integridad es responsable de recibir las declaraciones por escrito de los ingresos, activos y pasivos de los miembros de la Cámara de Representantes, ministros del gobierno, secretarios parlamentarios, senadores, jueces, magistrados, secretarios permanentes, funcionarios técnicos principales, miembros de la Asamblea de Tobago, miembros de los municipios, miembros de las autoridades gubernamentales locales, miembros de las juntas de todas las dependencias estatutarias, empresas estatales y funcionarios que ocupen los otros cargos prescritos.⁴ También es responsable de la supervisión de todos los asuntos relacionados con estas declaraciones, así como de la supervisión y el seguimiento de las normas de conducta ética que deben observar estas dependencias, así como los miembros del servicio diplomático, los asesores del gobierno y cualquier persona nombrada por una Comisión de Servicio o por la Comisión de Servicio de los organismos públicos. Además, tiene bajo su responsabilidad la supervisión y la investigación de conductas, prácticas y procedimientos deshonestos o corruptos.

[20] Asimismo, la Parte II de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública de 2000 determina las atribuciones y funciones de la Comisión de Integridad.⁵ Por ejemplo, la sección 5 de esta Ley establece que las funciones de esta Comisión incluirán, entre otras cosas, recibir, examinar y conservar todas las declaraciones presentadas con base en la Ley; recibir e investigar quejas relacionadas con cualquier violación de la Ley o con la comisión de cualquier delito según la Ley para la Prevención de la Corrupción; investigar el comportamiento de cualquier persona bajo su esfera de competencia que pudiera considerarse deshonesto o conducente a actos de corrupción; examinar las prácticas y procedimientos de los órganos públicos a fin de facilitar la identificación de prácticas corruptas; instruir, asesorar y asistir a los titulares de los órganos públicos sobre cambios en las prácticas o procedimientos que pudieran requerirse para reducir la ocurrencia de prácticas corruptas; y llevar a cabo programas de educación pública para promover y comprender las normas de integridad.⁶

[21] La sección 5 también establece que en el ejercicio de sus facultades y en el desempeño de sus funciones, la Comisión no está sujeta a la dirección ni al control de ninguna otra persona o autoridad. Puede hacer uso de servicios o recurrir a la experiencia de cualquier agencia policial o del servicio público y está facultada para autorizar investigaciones, citar testigos, solicitar la presentación de informes, documentos o cualquier otra información relevante, además de hacer todo lo que considere necesario o conveniente para llevar a cabo sus funciones.⁷

[22] La Comisión de Integridad consta de un Presidente, un Vicepresidente y otros tres miembros, que el Presidente nombra tras consultar con el Primer Ministro y con el Líder de la Oposición. Por lo menos uno de los miembros tiene que ser un abogado con diez años de experiencia y un miembro tiene que ser contador certificado o colegiado. Una persona del servicio público, que ejerce una función pública o que no sea ciudadano de Trinidad y Tobago no puede ser miembro de la Comisión. Se crea una vacante en la Comisión cuando uno de sus miembros fallece, renuncia o se revoca su nombramiento; cuando un miembro está ausente en tres reuniones consecutivas de la Comisión; o al

4. Constitución de la República de Trinidad y Tobago,

www.ag.gov.tt/LinkClick.aspx?fileticket=%2fhxUNqk9AMg%3d&tabid=163.

5. Ley sobre la Integridad en el Servicio Público, 2000,

www.integritycommission.org.tt/PDF/integrity_act/Integrity%20in%20Public%20Life%20Act%202000.pdf.

6. Ver también la sección 3 de la (Enmienda a la) Ley sobre la Integridad en la Función Pública, 2010,

www.ttparliament.org/legislations/a2010-01.pdf.

7. Ver la sección 4 de la (Enmienda a la) Ley sobre la Integridad en la Función Pública, 2010, *Ibid*, y también la Parte V de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, 2000, *supra* nota 5.

vencerse el plazo especificado en el documento de nombramiento de un miembro. El Presidente puede destituir a un miembro cuando se determina que tiene perturbadas sus facultades mentales y es incapaz de cumplir con sus responsabilidades; se declara en quiebra o celebra a un compromiso con sus acreedores; es declarado culpable de cualquier delito que desprestigia su cargo; es culpable de mala conducta en relación con sus responsabilidades; exhibe mal comportamiento en su cargo; omite cualquiera de sus responsabilidades o funciones; o es incapaz de desempeñar sus responsabilidades y funciones por cualquier motivo.⁸

[23] La sección 9 de la Ley establece además el personal y las remuneraciones para la Comisión. De acuerdo con esta sección, la Comisión debe contar con el cuadro de personal adecuado para el cumplimiento ágil y eficiente de sus funciones. Debe estar integrado por funcionarios públicos nombrados de conformidad con la sección 121 de la Constitución, que señala que la Comisión del Servicio Público es responsable de los nombramientos, ascensos, transferencias y confirmación de los nombramientos, así como de la destitución y el ejercicio del control disciplinario sobre estos funcionarios públicos. La Comisión también está facultada para nombrar o emplear, bajo los términos y condiciones que considere adecuados, a cualquier funcionario o empleado según lo estime necesario para el desempeño correcto de sus funciones.

[24] En la información adicional suministrada en la respuesta al cuestionario, el Estado analizado observó que la Comisión está integrada tanto por empleados contratados como por empleados del servicio público, y que son 21 y 10 respectivamente.⁹ Los altos mandos de la Comisión son el Secretario y el Subsecretario, cuya selección depende de su antigüedad y su desempeño en servicio público, sujeta a la facultad de veto del Primer Ministro. Estos cargos son pensionables y con titularidad hasta que se abandone el servicio público por baja normal o voluntariamente. Puesto que se trata de funcionarios públicos, estos cargos se rigen por el Reglamento del Servicio Público, que contiene las sanciones por mala conducta de los funcionarios del servicio público.

[25] El Estado analizado observa también en la información adicional suministrada que al nombramiento de los altos mandos empleados por contrato se llevó a cabo *“como resultado de un proceso de reclutamiento y selección transparente. Todos los contratos de empleo fueron aprobados en última instancia por los Comisionados. Sus contratos de empleo son a tres (3) años y estos empleados se rigen por los lineamientos del Jefe de Personal [CPO] para empleos por contrato, que indican que pueden ser destituidos de su puesto como resultado de ‘negligencia o negativa o si por cualquier causa (excepto por problemas de salud) son incapaces de desempeñar cualquiera de sus responsabilidades o de cumplir cualquier orden, incluyendo cualquier orden emitida por el Secretario Permanente, el Jefe de Departamento [HOD], el Jefe de Autoridad Oficial o por cualquier funcionario debidamente autorizado por él, o por mala conducta de cualquier índole, el gobierno puede destituirlo.”*¹⁰

[26] Además, el Estado analizado observa que todos los cargos en la Comisión cuentan con las correspondientes descripciones de puesto, en las que se resumen las expectativas de cada puesto, así como sus deberes y responsabilidades. Los empleados están sujetos a un informe de evaluación anual para asegurar que están cumpliendo con estas expectativas. También se emplean evaluaciones para

8. Ver la sección 8 de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, *supra* nota 5.

9. Información adicional suministrada por el país analizado en la respuesta al cuestionario, págs. 5-6, www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_tto_add.pdf.

10. *Ibid.*, pág. 6.

identificar deficiencias con fines de mejorar el desempeño de sus responsabilidades. El Estado analizado también observa que la Comisión tiene un plan anual de capacitación.¹¹

[27] Con respecto a su presupuesto, la sección 9(4) de la Ley especifica que todos los gastos en que incurra la Comisión para los fines de la Ley se cargarán al Fondo Consolidado. Como se explica en su Informe Anual de 2011, esto significa que:

[28] *“Esta disposición estatutaria coloca a la Comisión bajo la operación del Capítulo 69:01 de la Ley de Tesorería y Auditorías y el Reglamento Financiero creado en virtud de la misma. Dentro de este marco jurídico, la Comisión recibe su financiamiento a través de cargos directos al Fondo Consolidado, además de asignaciones del Parlamento a través de la ley de asignaciones anuales. Durante el ejercicio financiero 2011, la Comisión ha cumplido todas las directrices del Ministerio de Finanzas, el Director de Presupuesto y el Contralor Contable y con las recomendaciones del Auditor General. El Secretario de la Comisión es el Funcionario Contable, nombrado por el Ministro de Finanzas y por ende dependiente del mismo y responsable ante el Comité de Contabilidad Pública del Parlamento.”*¹²

[29] Además, la sección 10 de dicha Ley establece que la Comisión debe remitir un informe al Parlamento a más tardar el 31 de marzo de cada año sobre sus actividades en el año anterior y que este se debe examinar en el Senado y en la Cámara de Representantes a más tardar el 31 de mayo de cada año.¹³ Este informe, disponible en el sitio web de la Comisión de Integridad, suministra información sobre las actividades realizadas en cuatro áreas: cumplimiento, investigaciones, educación pública y comunicaciones y administración institucional. Se exponen detalles sobre el trabajo en estas cuatro áreas, así como un desglose sencillo con respecto a la asignación de gastos del año. También se hace referencia a asuntos legales asumidos por la Comisión de Integridad, por ejemplo, solicitudes ex parte sobre personas que no han cumplido con su obligación de presentar declaraciones de acuerdo con la Ley.

[30] Por último, el Comité observa que la importante institución del Defensor del Pueblo recibe quejas y presta asistencia a quienes consideran que han sufrido injusticias administrativas por parte de funcionarios públicos empleados por dependencias y departamentos gubernamentales— como la Comisión de Integridad— y formula recomendaciones para abordar estas injusticias.¹⁴

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[31] La Comisión de Integridad cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas.

[32] La Comisión de Integridad está analizando actualmente la forma en que opera, lo cual se refleja en el Plan Estratégico 2012-2015, incluido en su Informe Anual 2011.¹⁵ Los objetivos estratégicos de este plan son: promulgar un reglamento de apoyo para todas las operaciones de la Comisión de Integridad; mejorar la comunicación con todo el público de la Comisión; instrumentar políticas y

11. *Ibid.*, pág. 8.

12. Ver el 24 Informe Anual al Parlamento, 2011, pág. 18, www.integritycommission.org.tt/documents/ANNUALREPORT.pdf.

13. Estos Informes Anuales están disponibles en el siguiente sitio web: www.integritycommission.org.tt/reports.html.

14. Defensoría del Pueblo, www.ombudsman.gov.tt/.

15. Informe Anual 2011 de la Comisión de Integridad, *supra* nota 12.

procedimientos sobre el personal y poner en marcha plenamente el sistema de Gestión del Desempeño para los funcionarios empleados por contrato; una revisión a fondo del sistema para procesar las declaraciones, que incluya recomendaciones sobre nuevos formatos para las mismas; iniciar el análisis de los órganos públicos para facilitar la identificación de prácticas corruptas y una revisión de la estructura orgánica de la Comisión para remitir al Gabinete. Durante la visita *in situ*, los representantes de la Comisión de Integridad también presentaron una lista significativa de cambios propuestos a la Ley sobre la Integridad en la la Función Pública, que han estado publicando en su página web.¹⁶

[33] En este sentido, durante su visita *in situ* se le comunicaron al equipo ciertos problemas que obstaculizan la labor de la Comisión de Integridad para ejercer eficazmente su cometido de promover la integridad y prevenir la corrupción. En primer lugar, la Comisión no tiene competencia para imponer sanciones administrativas por incumplimiento de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública por personas que ejercen funciones públicas o por personas del del servicio público.¹⁷

[34] Por ejemplo, con respecto a las violaciones del Código de Conducta, la sección 31 de la Ley prevé que la Comisión de Integridad deberá informar sobre cualquier infracción del Código de Conducta a la Cámara del Parlamento, Comisión de Servicio, Directorio u otra autoridad que corresponda y al Director de la Fiscalía, y que corresponde a estos órganos gubernamentales adoptar las medidas disciplinarias que consideren pertinentes. Así pues, la Comisión se limita a investigar las infracciones al Código y a remitir los resultados de las investigaciones a la autoridad correspondiente, pero no tiene facultad para imponer sanciones.

[35] Asimismo, un mecanismo útil existente para evitar conflictos de intereses es el uso de fideicomisos ciegos. Según la sección 22 de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, cuando la Comisión de Integridad considera que puede haberse cometido una infracción de la Ley o que puede surgir un conflicto de intereses, le ordena a la persona del servicio público que coloque los activos en un fideicomiso ciego bajo los términos y condiciones que la Comisión considere pertinentes y que le entregue una copia del instrumento de fideicomiso a la Comisión. No obstante, la Ley no prevé la imposición de sanciones administrativas si una persona del servicio público no coloca los activos en un fideicomiso ciego para hacer frente a la infracción la Ley o a un conflicto de intereses.

[36] Por último, aunque existen sanciones penales para declarantes que no presentan su declaración o que no incluyen sus datos en su declaración o no entregan la declaración de intereses registrables, la Comisión de Integridad no tiene autoridad para imponer multas administrativas y sanciones por ello. Actualmente, dicha Ley establece que cuando una persona no ha presentado una declaración o no entrega la declaración de intereses registrables, la Comisión solamente está facultada para publicar el hecho en la Gaceta y por lo menos un diario de circulación en Trinidad y Tobago, y puede presentar

16. Ver, por ejemplo, Solicitud de Revisión del Papel de la Comisión de Integridad, de septiembre de 2012, www.integritycommission.org.tt/documents/ArequestforreviewoftheRoleoftheIntegrityCommission-final.pdf.

17. La Ley sobre la Integridad en el Servicio Público señala que las ‘personas que ejercen funciones públicas’ incluyen a todas las personas que ocupan cargos del Servicio Público, el Servicio Judicial y Jurídico, el Servicio de Policía, el Servicio de Docencia y la Comisión de Servicio de las Autoridades Estatutarias, además de los miembros del Servicio Diplomático y los asesores del gobierno. Las ‘personas de del servicio público’ son los ocupantes de los cargos que se relacionan en el Primer Anexo de dicha Ley: Miembros de la Cámara de Representantes; Ministros del gobierno; Secretarios Parlamentarios; Miembros de la Asamblea de Tobago; Miembros de los Municipios; Miembros de las autoridades gubernamentales locales; Senadores; Jueces y Magistrados nombrados por la Comisión del Servicio Judicial y Jurídico; Miembros de las Juntas de todas las dependencias estatutarias y empresas estatales, incluidas las entidades de control estatal; y Secretarios Permanentes y Funcionarios Técnicos Principales.

una solicitud *ex parte* ante la Corte Superior para que se ordene a dicha persona que dé cumplimiento a la Ley. El Comité observa que se hace referencia a las publicaciones de estos nombres por primera vez en el Informe Anual 2006 de la Comisión de Integridad, en tanto que en los años 2003, 2004, 2005 y 2006, se publicaron 37, 27, 10 y 74 nombres, respectivamente.¹⁸ En el Informe Anual 2011, durante el período de 2002 a 2009, la Comisión informa que publicó los nombres de 255 personas y que remitió 41 nombres al asesor jurídico externo de la Comisión de Integridad para el procesamiento de las solicitudes *ex parte* ante la Corte Superior.¹⁹ El Comité observa que esta forma de persuasión no parece ser eficaz, pues en la lista aparecen nombres desde hace 9 años.²⁰ El Comité estima que el uso de sanciones administrativas sería una herramienta útil que ayudaría a asegurar el cumplimiento de la Ley por las personas del servicio público y las que ejercen funciones públicas. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.4.1 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe).

[37] El Comité observa también que se podría fortalecer el trabajo de la Comisión de Integridad si se implementa un sistema electrónico para la presentación y recepción de las declaraciones de las personas del servicio público. En este sentido, también facilitaría la verificación de estas declaraciones. La Comisión observó durante la visita *in situ* que un número considerable de declaraciones todavía requieren certificación, que de acuerdo con el Informe Anual 2011, suman 3.352 declaraciones.²¹ Actualmente se requieren 3 meses a nivel interno para revisar y certificar una declaración. Además, esta situación se exagera por el aumento importante en el número de personas del servicio público que tienen la obligación de presentar su declaración, lo que, por consiguiente, requiere más certificaciones. Por ejemplo, en 2010, este número era 1.289, mientras que en 2011, fue de 1.775, un incremento del 38%.²² Independientemente que el punto sobre los sistemas de declaración de ingresos, activos y pasivos fue analizado en la Primera Ronda y se formularon recomendaciones, el Estado analizado debería considerar la implementación de un sistema electrónico para las declaraciones, de tal manera que se facilite la comunicación y se agilicen el proceso y la revisión de la información suministrada para la certificación. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.4.2 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe).²³

[38] Otra función importante de la Comisión es su facultad de investigación. Según la sección 33 de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, la Comisión puede, por iniciativa propia o a partir de una denuncia de cualquier miembro del público, considerar e indagar sobre cualquier presunta infracción de la Ley o cualquier denuncia de conducta corrupta o deshonestas. Dispone de atribuciones de investigación especiales, como pedir a cualquier persona que presente, dentro de un plazo específico, todos los libros, registros, cuentas, informes, datos almacenados en forma

18. Informe Anual 2006 de la Comisión de Integridad, pág. 10, www.integritycommission.org.tt/reports.html.

19. Informe Anual 2011, pág. 9, *supra* nota 12.

20. Los representantes del Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago, en sus reuniones con el equipo durante la visita *in situ*, declararon que debido a que el proceso de publicación es tan lento, hay personas en la lista que ya no ocupan puestos públicos.

21. Informe Anual 2011, pág. 7, *supra* nota 12. La certificación ocurre cuando la Comisión de Integridad confirma, a través de su análisis, que una declaración se ha hecho cabalmente. Una vez que se satisface este requisito, la persona del servicio público recibe un certificado de cumplimiento; ver la sección 13 de la Ley sobre la Integridad en el Servicio Público, *supra* nota 4. Durante la visita *in situ*, la organización de sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señaló que solamente una cuarta parte de todas las declaraciones han sido certificadas.

22. Informe Anual 2011, pág. 6, *supra* nota 12.

23. A este respecto el Estado analizado, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, señaló que han habido nuevos acontecimientos desde la más reciente comunicación de la Comisión con los funcionarios del MESICIC. La Comisión está en proceso de implementar un sistema para el procesamiento electrónico de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos.

electrónica o no, cualquier otro documento relacionado con las funciones de cualquier entidad pública o privada, además de requerir a cualquier persona que suministre información o responda a cualquier pregunta que la Comisión considere necesaria. No obstante, en la información adicional suministrada por el Estado analizado al cuestionario, la Comisión indicó que aunque tiene estas atribuciones, ha sido difícil llevar a cabo investigaciones debido a la poca disposición de los testigos a cooperar, a las dificultades que enfrentan los investigadores para obtener documentos e información o a la incapacidad de los investigadores de buscar, incautar y verificar documentos, detener e interrogar a los sospechosos y determinar si un testimonio es verídico o no. La Comisión alega que la incapacidad de los investigadores de llevar a cabo investigaciones eficientes y eficaces es resultado de legislación inadecuada.

[39] El Comité observa que la legislación existente dispone sanciones para personas e instituciones por no cumplir con las investigaciones de la Comisión, pese a tener un alcance limitado. El Comité estima que el Estado analizado debe revisar las sanciones y los mecanismos existentes para considerar si son suficientes para fomentar el cumplimiento a fin de permitir una investigación minuciosa de las denuncias de corrupción. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.3 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe).

[40] El Comité observa también que, según se prevé en la sección 1.1, el Secretario de la Comisión es responsable de asegurar que la Comisión de Integridad cumpla con todas las directrices del Ministerio de Finanzas, el Director de Presupuestos y el Contralor Contable y las recomendaciones del Auditor General. Puesto que el Secretario actúa como Funcionario Contable, es dependiente del Ministro de Finanzas y responsable ante el Comité de Contabilidad Pública del Parlamento. Como auxiliar del trabajo del Funcionario Contable está el auditor interno, que suministra análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y observaciones pertinentes, como: evaluar la solidez y la aplicación de los controles contables, financieros y operativos; cerciorarse de la confiabilidad de los datos contables y de otros tipos que se generan dentro de la organización; verificar el grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos establecidos; y evaluar la calidad del desempeño en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas.²⁴ Además, de acuerdo con el Reglamento Financiero de la Ley de Tesorería y Auditorías, capítulo 69:01, sección 13(4), el auditor interno debe formar parte de una unidad independiente de auditoría interna dentro de la Unidad Contable de los órganos gubernamentales.²⁵ El Comité observa que según el Plan Estratégico 2012-2015, parece que la Comisión de Integridad no tiene un auditor interno trabajando en la Comisión, ni una unidad de auditoría interna ni una unidad contable siquiera. De acuerdo con este plan, se contempla que estas unidades se crearán en 2013 y 2014. La Comisión debería poner el ejemplo para otras dependencias gubernamentales en su conducción y operaciones, considerando las responsabilidades que le atañen en la prevención de la corrupción y, por lo tanto, el Comité considera que el establecimiento de estas unidades para fiscalización interna debe llevarse a cabo a la mayor brevedad. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.4.4 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe).²⁶

24. Ver el Manual de Auditoría Interna elaborado por la Unidad de Gestión Financiera, División de Tesorería, Ministerio de Finanzas de Trinidad y Tobago, pág. iv, www.finance.gov.tt/content/pub104.pdf.

25. Reglamento Financiero de la Ley de Tesorería y Auditorías, Capítulo 69:01, rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/69.01.pdf.

26. A este respecto, el Estado analizado, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, señaló que la Comisión de Integridad quiso aclarar que aunque no tiene su propia unidad contable debido a su tamaño reducido, comparte con la Presidencia los servicios de una unidad contable y una auditoría interna. En 2012, la Comisión de Integridad intentó que se estableciera su propia unidad contable, pero tras un análisis por parte de la división de Tesorería del Ministerio de Finanzas,

[41] Un punto que señaló la Comisión de Integridad en su Plan Estratégico 2012-2015 y en las reuniones durante la visita *in situ* es la ausencia de un reglamento de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública. Durante estas reuniones, los representantes señalaron que nunca se ha promulgado el reglamento de esta Ley y expresaron que se necesita una revisión completa de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública antes que entre en vigor cualquier reglamento al respecto. No obstante, el Comité observa que el Presidente de la Comisión de Integridad afirmó en una conferencia de prensa en marzo de 2012 que una de las propuestas más urgentes para implementar este año es la promulgación del reglamento:

[42] *“Erramos en no haberlo hecho antes, pues con él se enumerarán las reglas que orientarán a la Comisión en un formato que reducirá las posibilidades de malos entendidos. No hay ningún atajo para hacerlo correctamente, y este proceso tendrá que ser aprobado por resolución afirmativa del Parlamento. Este proceso será encabezado por nuestro abogado de planta y se prevé completarlo para diciembre de 2012.”*²⁷

[43] En vista de la importancia del reglamento para la operación de la Comisión, que ayudaría definir mejor sus deberes y responsabilidades, el Estado analizado debería considerar la emisión del reglamento de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública a la brevedad posible. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.4.5 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe).

[44] Otro aspecto importante que observó el equipo durante la visita *in situ* es la falta de coordinación entre las dependencias gubernamentales y la Comisión de Integridad. Como ya se dijo antes, la Ley prevé que cualquier infracción del Código de Conducta debe remitirse a la Cámara del Parlamento, Comisión de Servicio, Directorio u otra autoridad, según corresponda, y al Director de la Fiscalía, y que corresponde a estos órganos gubernamentales adoptar las medidas disciplinarias que consideren pertinentes. Durante la visita, los representantes de la Comisión afirmaron que la comunicación con estas agencias gubernamentales es limitada. Por ejemplo, declararon que nunca han recibido comunicaciones de seguimiento de la Comisión del Servicio Público y, si hay indicios de culpabilidad penal, se le refiere al Director de la Fiscalía, quien solicita una investigación al departamento de policía. Además, los representantes de la Comisión indicaron que también están restringidos para compartir información con otras importantes agencias gubernamentales, como la Autoridad de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera. A este respecto, el Estado analizado observó, además, que la sección 35 de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública señala que los registros de la Comisión y cualquier información revelada por un testigo o mediante la entrega de documentos no deberá divulgarse a terceros excepto en lo que sea necesario para fines de proceder en cualquier tribunal en relación con un cargo basado en esta Ley o en alguna otra ley escrita. En vista de la importancia de la coordinación entre estas agencias para asegurar que se observen las importantes disposiciones de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública y que existan consecuencias reales en caso de su incumplimiento, el Estado analizado debería considerar establecer un mecanismo o acuerdo formal que facilite el intercambio sistemático de información y comunicaciones de seguimiento de estas instituciones involucradas en la lucha contra la corrupción. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.4.6 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe).

se le informó que el volumen de transacciones procesadas era demasiado pequeño todavía para justificar una unidad contable independiente.

27. Declaración del Sr. Kenneth Gordon, Presidente de la Comisión, Conferencia de Prensa del 16 de marzo de 2012, www.integritycommission.org.tt/documents/StatementbyChairmanatNewsConferenceMarch162012.pdf.

[45] Como ya se señaló, el Comité observa que en varios casos, la Comisión no ha podido cumplir su trabajo con agilidad. Por ejemplo, asegurar que todas las personas que deben declarar sus ingresos, activos y pasivos lo hagan, verificar el contenido de las declaraciones y publicar los nombres de quienes no han cumplido lo dispuesto en la Ley. En la reunión con el equipo de la visita *in situ*, la Comisión señaló que requiere 3 meses a nivel interno para revisar una declaración. Además, se dijo que la publicación de los nombres de las personas que no han cumplido las disposiciones de la Ley no parece ser una herramienta útil para fomentar el cumplimiento. Asimismo, la organización de la sociedad civil que se reunió con el equipo, el Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago, señaló que para cuando se publica la lista, hay personas en la lista que ya no son funcionarios públicos.

[46] Otra parte importante de la labor de la Comisión que no se está realizando como se espera es su facultad para examinar las prácticas y procedimientos de los órganos públicos a fin de facilitar la identificación de prácticas corruptas, e instruir, asesorar y auxiliar a los titulares de los órganos públicos sobre cambios en las prácticas o procedimientos que podrían ser necesarios para reducir la ocurrencia de prácticas corruptas.²⁸ Al respecto, los representantes de la Comisión declararon durante la visita *in situ* que estos exámenes se iniciaron en 2012 para un órgano público. El Comité felicita a la Comisión por iniciar esta importante tarea. Sin embargo, los representantes observaron ciertas limitaciones en su trabajo en este sentido. Por ejemplo, hay necesidad de más personal para efectuar los exámenes, especialmente con antecedentes contables o expertos en adquisiciones, lo que parece indicar la necesidad de más recursos financieros y humanos.

[47] Al respecto, los representantes de la Comisión de Integridad indicaron que los recursos financieros son más que adecuados, pues recibe 25 millones de dólares de Trinidad y Tobago. No obstante, en lo que respecta a recursos humanos, afirmaron que tienen una estructura orgánica temporal y que la mayoría de los funcionarios públicos empleados son por contrato, y que se conseguiría a un consultor para que llevara a cabo un estudio y formulara propuestas para una estructura orgánica permanente. Los representantes también señalaron que sus áreas de trabajo no son adecuadas, y hay un proceso en curso para retirarlos de sus instalaciones actuales.²⁹ el Comité observa que aunque durante la visita *in situ* los representantes indicaron que el presupuesto puede ser adecuado, en su Informe Anual 2011, la Comisión de Integridad observó que:

[48] *“La provisión de 1,2 millones de dólares para pagar los actuales contratos de mantenimiento y la contratación de servicios de investigación forense fue insuficiente. Esto afecta gravemente la labor de la Comisión con respecto a la realización de investigaciones. La Comisión intentó inicialmente reducir los gastos en otras áreas para canalizar recursos financieros a esta área crítica. Se hicieron gestiones ante el Ministerio de Finanzas para hacer frente a este asunto y se explicó su efecto en la capacidad de la Comisión para contratar servicios forenses del extranjero. La asignación para la Comisión bajo este rubro se aumentó \$4.500.000 en el transcurso del ejercicio fiscal 2011; sin embargo, el financiamiento se le entregó apenas en julio de 2011. En vista de este retraso, no se dispuso del tiempo necesario para contratar en su totalidad los servicios forenses requeridos y*

28. Ver las secciones 5(g) y (h) de la Ley sobre la Integridad en el Servicio Público, *supra* nota 5.

29. En su Informe Anual 2011, la Comisión de Integridad observa lo siguiente: *“La Comisión sigue enfrentando graves desafíos con respecto a las instalaciones para su personal y para facilitar su expansión. En septiembre de 2010, el arrendador, Unit Trust Corporation, le informó a la Comisión su intención de renovar el contrato de arrendamiento solamente de uno (1) de los dos (2) pisos que ocupaba la Comisión. Todo el personal está trabajando actualmente en un solo piso. La Comisión también ha llevado a cabo ciertos trabajos de renovación y rediseño del piso para mejorar la eficiencia de sus operaciones y mejorar el entorno físico. La Comisión de Integridad se comunicó con el Ministerio de Administración Pública y posteriormente con el Ministerio de Vivienda y Medio ambiente bajo cuya cartera la División de Gestión de Propiedades del gobierno no le ha proporcionado instalaciones alternativas, que se requieren urgentemente,”* *supra* nota 12, pág. 21.

completar los contratos para poder hacer los pagos antes del final del ejercicio fiscal el 30 de septiembre de 2011.”³⁰

[49] En vista de lo anterior, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar una revisión del presupuesto asignado a la Comisión de Integridad y asegurarse que disponga de los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su importante trabajo. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.4.7 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe).

[50] Como se dijo antes, la Comisión está empezando a examinar las prácticas y procedimientos de los órganos públicos a fin de facilitar la identificación de prácticas corruptas, e instruir, asesorar y auxiliar a los titulares de los órganos públicos sobre cambios en las prácticas o procedimientos que podrían ser necesarios para reducir la ocurrencia de prácticas corruptas. Al respecto, durante la visita *in situ*, los representantes de la Comisión observaron que la Ley no contiene disposiciones específicas respecto a estos exámenes de los órganos públicos. Como resultado, no existen disposiciones legales que detallen la intención de la Ley, las que podrían adoptar la forma de una auditoría de ética orgánica o una revisión de buena gobernabilidad.³¹

[51] Además, en la información adicional suministrada por el Estado analizado en el Cuestionario, Trinidad y Tobago observa que:

[52] *“La legislación actual no ordena a los órganos públicos que faciliten el examen de sus procedimientos por la Comisión de Integridad, ni están obligados legalmente a aceptar las recomendaciones que se les formulan. Cualquier examen de los órganos públicos se logra gracias a la buena voluntad del órgano público de que se trata. Si un órgano público se niega a proporcionar facilidades a la Comisión de Integridad, su negativa no constituye una infracción de ninguna ley.”*³²

[53] En vista de lo anterior, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar, cuando corresponda, suministrar suficientes recursos para llevar a cabo estos exámenes y que se instituya un marco legislativo para la realización de estos importantes exámenes, así como que sea obligatorio para los órganos públicos participar en ellos. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones 1.4.8 y 1.4.9 en la sección 1.4 del Capítulo II del presente informe).

[54] Durante su visita, la Comisión también presentó información relacionada con los programas de difusión pública de su trabajo, en especial con respecto a la sensibilización de niños en edad escolar y la capacitación de personas de la función pública con respecto a su obligación de presentar sus declaraciones.³³ Estas iniciativas se emprendieron para cumplir con el mandato de la Comisión de llevar a cabo programas de sensibilización del público para promover la comprensión de las normas de integridad existentes. No obstante, la Comisión indicó que aunque sí efectúa estos tipos de programas de sensibilización, solamente lleva a cabo seminarios relacionados con los requisitos de la Ley de presentar declaraciones, pero no tiene capacitación para los servidores públicos en general con respecto a sus responsabilidades de respetar el Código de Conducta en la Ley, ni sobre las protecciones para los servidores públicos en el lugar de trabajo cuando denuncian actos de

30. Informe Anual 2011, pág. 19, *supra* nota 12. Además, según lo indicado en la reunión con el equipo durante la visita *in situ*, la organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago considera que la Comisión de Integridad no tiene suficientes recursos para llevar a cabo su trabajo.

31. Ver, por ejemplo, una Solicitud de Revisión del Papel de la Comisión de Integridad de septiembre de 2012, *supra* nota 16.

32. Información adicional a la Respuesta, pág. 14, *supra* nota 9.

33. Informe Anual 2011, págs. 14-17, *supra* nota 12.

corrupción. Además, los representantes de la Comisión también solicitaron cooperación en forma de asistencia técnica para difundir su trabajo entre el público en general y consultaron sobre los programas existentes en otros países. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones 1.4.10 y 1.4.11 en la sección 1.4 del Capítulo II del presente informe).³⁴

[55] En este sentido, el Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago, en su reunión con el equipo durante la visita *in situ*, declaró que la Comisión de Integridad recientemente ha emprendido vigorosas actividades de difusión y sensibilización. No obstante, estima que la Comisión no ha estado difundiendo entre las personas las protecciones existentes contra represalias en el lugar de trabajo dispuestas en la (Enmienda a la) Ley sobre la Integridad en la Función Pública, 2010.³⁵ Así pues, los funcionarios públicos desconocen estas disposiciones y no se sienten seguros denunciando actos de corrupción.

[56] En cuanto a la difusión pública, el Comité toma nota que la Comisión tiene un sitio web que contiene los programas que ha llevado a cabo y publicaciones relevantes, como sus informes anuales.³⁶ También permite que el público presente una queja si una persona del servicio público o una persona que ejerce una función pública viola la Ley sobre la Integridad en la Función Pública; o si en relación con el Registro de Intereses una persona tiene un conflicto de intereses o si está cometiendo o ha cometido alguna infracción según la Ley para la Prevención de la Corrupción o cualquier otra ley. No obstante, el Comité observa que la Comisión no publica todos sus informes anuales, ya que destaca la ausencia de los informes de 2008 y 2009, sin explicación alguna, ya que los informes anuales de todos los otros años en que la Comisión ha estado operando están disponibles. En vista del importante cometido de la Comisión de promover la integridad y la transparencia, así como de prevenir la corrupción, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.12 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe).

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[57] En la información adicional suministrada por el Estado analizado en la respuesta al cuestionario, la Comisión de Integridad entregó los siguientes cuadros con respecto a las investigaciones de conductas que, en opinión de la Comisión, podrían considerarse deshonestas o conducentes a actos de corrupción:

Cuadro 1:³⁷

Año	Investigaciones iniciadas	Investigaciones en curso	Investigaciones suspendidas
2007	17	0	0
2008	18	1	0
2009	23	0	0
2010	37	8	0
2011	49	10	0

34. A este respecto, el Estado analizado, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, señaló que a partir de 2012, los seminarios para los declarantes impartidos por la Comisión incluyen una presentación sobre el código de conducta que figura en la Ley sobre la Integridad en la Función Pública. Estas presentaciones se les imparten a las personas en la función pública, así como a las que ejercen funciones públicas.

35. (Enmienda a la) Ley sobre la Integridad en el Servicio Público, 2010, *supra* nota 5.

36. Comisión de Integridad de Trinidad y Tobago, www.integritycommission.org.tt/index.html.

³⁷ El país analizado señaló que sería un desafío suministrar esta información en este momento con respecto al número de investigaciones concluidas en un año dado, así como sobre el número de investigaciones que se han trasladado al año siguiente.

Cuadro 2:

Año	Investigaciones			
	Archivadas por prescripción	Archivadas sin decisión por causas de fondo	Abiertas	Remitidas a autoridad competente
2007	0	0	0	0
2008	0	0	0	0
2009	0	0	0	0
2010	0	0	8	4
2011	0	0	10	1

[58] En los informes anuales de la Comisión de Integridad se presenta mayor información sobre estas investigaciones. Por ejemplo, el Informe Anual 2011 contiene lo siguiente con respecto al estado de las denuncias: 24 están pendientes de años anteriores; 43 se recibieron ese año de ciudadanos; y 6 fueron iniciadas por la Comisión para el año 2011. La Comisión también observó que durante el curso del año llevó a cabo más de 150 entrevistas, obtuvo y registró 220 declaraciones y obtuvo y examinó volúmenes de documentos. Además, concluyó 42 investigaciones, mientras que, a fines de 2011, 31 no se habían concluido.

[59] El Comité observa que en el cuadro suministrado y en la información contenida en los informes anuales de la Comisión de Integridad se detecta un volumen considerable de casos atrasados con respecto a investigaciones por efectuar. La Comisión de Integridad observa que ha fortalecido su capacidad de investigación con el reclutamiento de un Director de Investigaciones, dos investigadores Financieros, dos Investigadores Penales, un Investigador de Averiguaciones y un Secretario Administrativo, y que eso ha ayudado a agilizar varias investigaciones. Sin embargo, el Comité reitera la recomendación que formuló bajo la sección 1.2 con respecto a suministrar a la Comisión recursos humanos y financieros adecuados para que cumpla eficazmente su mandato.³⁸

[60] Además, la Ley sobre la Integridad en la Función Pública prevé numerosos casos en los que la Comisión debe remitir irregularidades detectadas a otras agencias gubernamentales para que puedan tomar las medidas pertinentes. Por ejemplo, si la Comisión determina que una persona del servicio público ha violado la Ley al no incluir información completa en su declaración o si, tras una investigación, la Comisión concluye que se ha cometido un delito, debe remitir el asunto al Director de la Fiscalía. Asimismo, la Comisión de Integridad debe informar sobre cualquier infracción del Código de Conducta a la Cámara del Parlamento, Comisión de Servicio, Directorio u otra autoridad, según corresponda, y al Director de la Fiscalía, para que estos órganos gubernamentales adopten las medidas disciplinarias que consideren pertinentes. El Comité observa, sin embargo, que la Comisión no lleva un registro de las remisiones efectuadas o de sus resultados una vez que las ha transmitido a otros órganos gubernamentales. El Comité estima que la Comisión de Integridad debería llevar un registro de los resultados del número de remisiones efectuadas y que el Estado analizado debería considerar implementar un mecanismo mediante el cual la Comisión reciba comunicaciones de seguimiento de los órganos gubernamentales sobre el resultado de estas remisiones, por ejemplo, en el caso del Director de la Fiscalía, si se determinó que las conclusiones de las investigaciones ameritaban medidas adicionales. Esta información también debe ponerse a disposición del público en

38. A este respecto, el Estado analizado, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, señaló que las quejas recibidas e investigaciones iniciadas por ésta se están atendiendo. Sin embargo, varias investigaciones no se han completado debido a factores fuera del control de la Comisión, por ejemplo, por no recibirse respuesta a las solicitudes de información, o si la respuesta se efectuó fuera de tiempo.

sus informes anuales así como en el sitio web de la Comisión de Integridad. El Comité formulará recomendaciones al respecto (véanse las recomendaciones 1.4.13 y 1.4.14 en la sección 1.4 del Capítulo II del presente informe).

[61] El Comité observa también, en la sección 1.2, que existe el requisito que las personas del servicio público que presentan declaraciones también presenten una declaración de intereses registrables. En los informes anuales a disposición del Comité, a diferencia del número de declaraciones presentadas en un año, no parece haber estadísticas sobre el número de estas declaraciones recibidas. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.4.15 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe).

1.4. Conclusiones y recomendaciones

[62] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Comisión de Integridad en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[63] La República de Trinidad y Tobago ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer la Comisión de Integridad, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.

[64] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 1.4.1. Con base en su constitución y en los principios fundamentales de su sistema jurídico, considerar otorgar a la Comisión de Integridad la competencia para imponer sanciones administrativas por infracciones a la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, y mantener registros sobre los resultados de esas sanciones que permitan una evaluación exhaustiva de su eficacia (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.2. Instrumentar un sistema electrónico para la comunicación, recepción y certificación de las declaraciones de las personas del servicio público (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.3. Considerar examinar la idoneidad de las sanciones existentes por incumplimiento de una investigación efectuada por la Comisión de Integridad y, en caso necesario, adoptar las medidas necesarias para corregir cualquier deficiencia (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.4. Establecer la unidad de auditoría interna dentro de la Comisión de Integridad, de acuerdo con su Plan Estratégico 2012-2015 (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.5. Considerar promulgar el reglamento de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, de acuerdo con el Plan Estratégico 2012-2015 de la Comisión de Integridad (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.6. Establecer, cuando corresponda, un intercambio formal de información y un mecanismo o acuerdo de coordinación entre la Comisión de Integridad y otros

órganos gubernamentales pertinentes (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).

- 1.4.7. Suministrar a la Comisión de Integridad los recursos presupuestales y humanos que necesita para el desempeño adecuado de sus funciones, dentro de los recursos disponibles (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.8. Considerar implementar un marco legislativo para consolidar los exámenes de las prácticas y procedimientos de los órganos públicos a fin de facilitar la identificación de prácticas corruptas (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.9. Adoptar las medidas para fortalecer la participación de los órganos públicos en los exámenes de sus prácticas y procedimientos a fin de facilitar la identificación de prácticas corruptas (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.10. Cuando corresponda, obtener la cooperación técnica necesaria de otros Estados y organismos de cooperación para permitir que la Comisión de Integridad desempeñe sus funciones con mayor eficacia en la difusión pública de su trabajo (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.11. Llevar a cabo programas de capacitación para las personas que ejercen funciones públicas sobre sus responsabilidades según el Código de Conducta en la Ley sobre la Integridad en la Función Pública así como sobre las protecciones existentes en el lugar de trabajo para quienes denuncian actos de corrupción (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.12. Cerciorar que todos los informes anuales con respecto al trabajo de la Comisión de Integridad están disponibles fácil y rápidamente para el público en su sitio web (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.13. Mantener registros de resultados sobre el número de remisiones que ha efectuado a órganos gubernamentales cuando detecta una irregularidad, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas (ver sección 1.3 del capítulo II de este informe).
- 1.4.14. Establecer un mecanismo a través del cual la Comisión reciba comunicaciones de seguimiento de los órganos gubernamentales con respecto al resultado de las remisiones de irregularidades (ver sección 1.3 del capítulo II de este informe).
- 1.4.15. Mantener un registro de los resultados sobre el número de declaraciones de intereses registrables recibidas en un año, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas (ver sección 1.3 del capítulo II de este informe).

2. AUDITORÍA GENERAL

2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[65] La Auditoría General cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[66] Con respecto a sus objetivos y funciones, la sección 116 de la Constitución de la República de Trinidad y Tobago establece que el Auditor General debe anualmente auditar y presentar un informe sobre las cuentas públicas de Trinidad y Tobago y todos los funcionarios, tribunales y autoridades del Estado analizado. También está facultado para llevar a cabo auditorías de la contabilidad, los balances generales y otros estados financieros de todas las empresas propiedad o bajo el control del Estado o a su nombre.³⁹

[67] El capítulo 69:01 de la Ley de Tesorería y Auditorías señala en su sección 9 que el Auditor General analizará y llevará a cabo averiguaciones y auditorías sobre la contabilidad de todos los funcionarios contables⁴⁰ y receptores de ingresos,⁴¹ y de todas las personas encargadas de la tasación, recaudación, recepción, custodia, emisión o pago de fondos públicos o de la recepción, custodia, emisión, venta, transferencia o entrega de sellos, valores, suministros u otros bienes del erario.⁴² En este sentido, el Auditor General debe comprobar que se hayan adoptado todas las precauciones necesarias para salvaguardar la recaudación de fondos públicos y que se hayan observado debidamente las leyes, directivas e instrucciones al respecto. Además, debe comprobar que todas las emisiones y pagos se hayan efectuado de acuerdo con las atribuciones correctas y que todos los pagos hayan sido correctamente cobrables y cuenten con suficientes justificantes o comprobantes de pago. El Auditor General también se debe cerciorar que todo el dinero gastado se haya aplicado a los fines para los cuales lo asignó el Parlamento, y que los gastos sean acordes con la autoridad que los rige y que se han hayan incurrido prestando la debida atención a evitar excesos o despilfarros. También debe asegurarse que se estén manteniendo registros esenciales y que las reglas y procedimientos formulados y aplicados son suficientes para salvaguardar el control de los suministros y otros bienes públicos.

[68] Según la sección 116(6) de la Constitución, el Auditor General, en el ejercicio de sus funciones, no está sujeto a la dirección ni al control de ninguna otra persona o autoridad.

[69] El Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, señaló que el Auditor General es responsable de tomar decisiones que afectan al Departamento, aunque en ciertos casos se requiere la aprobación del Gabinete, por ejemplo, para viajes al extranjero.⁴³

[70] La Sección 116 establece además que en el desempeño de su trabajo, el Auditor General tendrá acceso a todos los libros, anotaciones, declaraciones y otros documentos relacionados con la contabilidad. La sección 10 de la Ley de Tesorería y Auditorías, en su capítulo 69:01 detalla las atribuciones del Auditor General a este respecto. Por ejemplo, en el ejercicio de sus responsabilidades, el Auditor General está facultado para solicitar explicaciones e información de cualquier funcionario; para autorizar a cualquier funcionario para que realice a su nombre cualquier requerimiento, examen o auditoría; enviar y recibir en custodia libros, cuentas, justificantes o documentos bajo el control de cualquier funcionario en relación con las cuentas públicas. La sección 10(2) reitera que el Auditor General tendrá acceso todos los registros, libros, justificantes,

39. Constitución de la República de Trinidad y Tobago, *supra* nota 4.

40. La Ley de Tesorería y Auditorías define en su capítulo 69:01 a un ‘funcionario contable’ como “cualquier persona nombrada por el Tesoro y responsable de rendir cuentas de cualquier servicio con respecto al cual se hayan designado fondos pecuniarios por la Constitución o por el Parlamento, o cualquier persona se le entreguen fondos de la Cuenta de Tesorería”, rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/69.01.pdf.

41. La Ley define a los ‘receptores de ingresos’ como los “funcionarios nombrados por Hacienda para la cobranza de los rubros de ingresos que Hacienda especifique, así como para rendir cuentas al respecto”.

42. Ley de Tesorería y Auditorías, capítulo 69:01, rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/69.01.pdf.

43. Respuesta de Trinidad y Tobago al cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 3, www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_tto_resp.pdf.

documentos, efectivo, estampillas, valores, suministros u otros bienes del Estado en manos de cualquier funcionario.

[71] La sección 41 de la Ley de Tesorería y Auditorías, prevé en su capítulo 69:01 que la Tesorería auditará y presentará informes sobre la contabilidad de la Auditoría General.

[72] La sección 117 prevé que el Auditor General deberá ser nombrado por el Presidente, tras consultar con el Primer Ministro y el Líder de la Oposición.⁴⁴ La sección 136(7) de la Constitución establece además que el Auditor General solamente puede ser destituido de su puesto por incapacidad para desempeñar las funciones del cargo, ya sea por enfermedad física o mental o por cualquier otra causa, o por mala conducta. La sección 8(2) de la Ley de Tesorería y Auditorías, prevé en su capítulo 69:10 que si un Auditor General es destituido, el Ministro de Finanzas deberá presentar ante el Parlamento tan pronto sea posible una declaración cabal de los motivos. Las leyes y disposiciones reglamentarias vigentes en relación con el servicio público también son aplicables al Auditor General.⁴⁵

[73] Con respecto al personal del Auditor General, la sección 117(5) de la Constitución prevé que se le deberá suministrar el cuadro de personal adecuado para cumplir suficientemente las funciones del cargo.⁴⁶ Adicionalmente, estos deben ser funcionarios públicos nombrados de conformidad con la Sección 121 de la Constitución, que estipula que la Comisión del Servicio Público es responsable de los nombramientos, ascensos, transferencias y confirmación de los nombramientos, así como de la destitución y el ejercicio del control disciplinario de estos funcionarios públicos. La sección 121(8) establece además que antes que la Comisión del Servicio Público nombre o transfiera a un miembro del personal del Auditor General, deberá consultar previamente al Auditor General. Además, el Jefe de Personal es responsable de establecer los términos y condiciones de empleo.⁴⁷

[74] En la respuesta al cuestionario, el Estado analizado suministró mayores detalles sobre el reclutamiento de personal.⁴⁸

[75] *“El personal de auditoría en el primer nivel de reclutamiento se ha seleccionado a través de un proceso que implica la publicación del puesto, la selección de las solicitudes con base en criterios previamente establecidos, una prueba por escrito y entrevistas. El personal de auditoría de alto nivel se selecciona con base en que sea plenamente calificado profesionalmente y a través de entrevistas. El personal de oficinas o administrativo y de recursos humanos se selecciona a través de respuestas a anuncios de la Comisión del Servicio Público y entrevistas... Cada cargo, ya sea específicamente para la Auditoría General o en el servicio público en general, tiene ciertos requisitos para calificar. Se nombraría a las personas si cumplen con los requisitos necesarios para calificar.”*

44. Esta sección establece además que el Auditor General ocupará su puesto de conformidad con la sección 136 de la Constitución, que estipula que al llegar a los sesenta y cinco años, el Auditor General deberá dejar el puesto. Asimismo, la sección 7 de la Ley de Tesorería y Auditorías prevé en su capítulo 69:01 que el Auditor General no puede ocupar ningún otro puesto o cargo remunerado en servicio del Estado.

45. Sección 8(1) de la Ley de Tesorería y Auditorías, capítulo 69:01, *supra* nota 40.

46. Ver también la sección 11 de la Ley de Tesorería y Auditorías, capítulo 69:01, *Ibid.*, que señala que ocasionalmente se deberá nombrar para la Auditoría General al número de funcionarios y servidores que sean necesarios para los fines de la Ley.

47. Respuesta al cuestionario, pág. 4, *supra* nota 43. En las páginas 5-6 de la respuesta, el país analizado detalla la manera en que se determinan los recursos humanos para su operación.

48. *Ibid.*, págs. 5-6.

[76] Con respecto a la existencia de procedimientos documentados para el desempeño de sus tareas, en su respuesta al cuestionario el Estado analizado afirma que el personal de auditoría utiliza programas de trabajo aprobados para desempeñar sus tareas.⁴⁹ Otro personal tiene manuales o guías producidos por el Departamento de Personal y la Comisión del Servicio Público así como diversas circulares, instrucciones financieras, reglamentos financieros y otros procedimientos documentados elaborados por el Ministerio de Finanzas. Durante la visita *in situ*, los representantes también indicaron que se aseguran que los manuales de auditoría sean compatibles con las normas internacionales, como las que promueven la Organización de Instituciones Supremas de Auditoría del Caribe y la Organización Internacional de Instituciones Supremas de Auditoría, y que estas normas deben ser acatadas.

[77] Con respecto a la manera en que se necesitan recursos presupuestales para sus operaciones, el Estado analizado, en su respuesta al cuestionario, señala que: “*Se hacen provisiones en las Estimación de Gastos para los fondos que utilizará el Departamento para sus operaciones. El Departamento está sujeto al reglamento financiero y a otras directivas financieras para su acceso a los fondos y sus informes sobre gastos.*”⁵⁰

[78] Por último, el Comité observa que la importante institución del Defensor del Pueblo recibe quejas y presta asistencia a quienes consideran que han sufrido injusticias administrativas por parte de funcionarios públicos empleados por dependencias y departamentos gubernamentales— como la Auditoría General— y formula recomendaciones para abordar estas injusticias.⁵¹

2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[79] La Auditoría General cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas.

[80] Durante la visita *in situ*, los representantes de la Auditoría General señalaron que no tienen independencia con respecto a la contratación de personal, pues dependen de la Comisión del Servicio Público para su reclutamiento, aunque no puede contratarse a nadie para la Auditoría General sin consultar con el Auditor General. Asimismo, los representantes declararon que opinan que la Comisión del Servicio Público toma demasiado tiempo para el proceso de reclutamiento: aproximadamente de 2 a 4 años. Esta situación resulta frustrante para la Auditoría General, pues para cuando un puesto está listo para ser ocupado, la persona ya encontró otro empleo. Como resultado, su personal es insuficiente, lo que afecta su trabajo, en especial para la realización de las auditorías de desempeño. Por ejemplo, se citó que había 180 personas trabajando, aunque hay 299 puestos. En consecuencia, por carecer de personal suficiente, a fin de cumplir con la realización de las auditorías contables, tiene que utilizar a los funcionarios encargados de realizar las auditorías de desempeño, distrayéndolos de esas funciones.

[81] El Comité observa que el tema de la contratación es un asunto constitucional, pues la Comisión del Servicio Público tiene la responsabilidad constitucional de la contratación en el servicio

49. *Ibid.*, pág. 7.

50. *Ibid.*, pág. 8. Ver también páginas 1-5 del Manual de Contabilidad elaborado por la Unidad de Gestión Financiera, División de Tesorería, Ministerio de Finanzas de Trinidad y Tobago, www.finance.gov.tt/content/Accounting%20Manual%202011.pdf.

51. Defensoría del Pueblo, *supra* nota 14.

público, del cual forma parte la Auditoría General. El Comité observa también que el Estado analizado ha considerado en el pasado establecer una auditoría nacional, responsable de su propio reclutamiento, para que la Auditoría General sea independiente y funcione adecuadamente, dos elementos que el Estado analizado identifica como esenciales para la buena gobernabilidad.⁵² Además, la Comisión del Servicio Público ha estado examinando la posibilidad de delegar la función de la publicación, la selección preliminar y las entrevistas para los puestos a oficinas específicas de un Ministerio o Departamento, siempre que tales funciones se lleven a cabo dentro de lineamientos claros y que un representante de la Comisión o del Departamento de las Comisiones de Servicio forme parte del panel de entrevistas.⁵³ En vista de lo anterior, el Estado analizado debería considerar permitir que la Auditoría General lleve a cabo su propio reclutamiento, con la participación de la Comisión del Servicio Público, para que se cubran mejor las necesidades de recursos humanos de esta dependencia. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.1 en la sección 2.4 del capítulo II de este informe).

[82] Con respecto a la capacitación, durante la visita *in situ*, los representantes expresaron que, en general, el programa de capacitación vigente es bueno y que la Auditoría General recurre a agencias contables locales, como el Instituto de Contadores Certificados de Trinidad y Tobago y la Asociación de Contadores Certificados Colegiados para impartir esta capacitación. Los auditores también reciben capacitación interna, así como por la Auditoría del Reino Unido, por ejemplo, sobre el valor en las auditorías pecuniarias. Existe un programa anual de capacitación, basado en una evaluación anual. Sin embargo, los representantes señalaron que durante los últimos dos años, este programa no se ha operado correctamente, y que existe una deficiencia de capacitación con respecto a las habilidades y competencias requeridas para cumplir las responsabilidades en la Auditoría General. Así pues, la capacitación se ha hecho *ad hoc*, en lugar de planeada como se hacía en el pasado. El Estado analizado debería considerar fortalecer el programa de capacitación vigente para la Auditoría General, asegurando que se ponga en práctica de tal manera que no solamente haya desarrollo de personal, sino que el personal también tenga las competencias para cumplir las importantes responsabilidades de esa dependencia. Esto también debería incluir capacitación introductoria para funcionarios nuevos, pues los representantes también indicaron que la capacitación para personal nuevo es difícil y puede ser rudimentaria, ya que el personal existente no tiene tiempo para llevar a cabo esta importante capacitación debido a sus responsabilidades de trabajo.⁵⁴ El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.2 en la sección 2.4 del capítulo II de este informe).

[83] El Comité observa que las secciones 26-30 de la Ley de Tesorería y Auditorías establecen, en su capítulo 69:01, el procedimiento para la notificación de irregularidades por el Auditor General, la imposición de recargos para la recuperación de pagos no recaudados o la deficiencia o pérdida o el valor de bienes destruidos, así como el procedimiento para el cobro del recargo mediante demanda del Procurador General o por aprobación, por parte de la Comisión de Servicio que corresponda, de deducciones al salario del funcionario por el monto del recargo. Asimismo, la Regla 131(3) del Reglamento Financiero prevé que cuando un funcionario contable o receptor de pagos sospecha con bases razonables que un déficit o pérdida de dinero público es resultado de cualquier irregularidad,

52. Proyecto de ley de la Auditoría Nacional de Trinidad y Tobago, 2006, preámbulo,

www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_tto_office_2006.pdf

53. Informe Anual 2008 de la Comisión del Servicio Público, pág. 24,

www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_tto_psc_2008.pdf, e Informe Anual 2009 de la Comisión del Servicio Público, pág. 23,

www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_tto_psc_2009.pdf, e Informe Anual 2010 de la Comisión del Servicio Público, pág. 12,

www.scd.org.tt/attachments/article/112/Public%20SC%20Annual%20Report%202010.pdf

54. Los representantes de la Auditoría General también indicaron que es difícil capacitar al personal nuevo conforme va llegando a lo largo del año, en lugar de hacerlo en forma grupal.

debe informarlo a la policía. En este respecto, los representantes indicaron durante la visita *in situ* que no reciben comunicaciones de seguimiento del Director de la Fiscalía sobre la recuperación de fondos y que convendría recibir este tipo de comunicaciones del departamento de policía respecto a las irregularidades detectadas. Cualquier recuperación depende de la policía; sin embargo nunca se hace seguimiento: Solamente si un caso pasa a los tribunales y solamente por cortesía se les informa el resultado. El Estado analizado debería considerar establecer un mecanismo para que la Auditoría General reciba comunicaciones formales de seguimiento sobre el resultado de los informes enviados al Procurador General, a la Comisión de Servicio o al departamento de policía para la recuperación de un recargo o cuando se detecta una irregularidad. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.3 en la sección 2.4 del capítulo II de este informe).

[84] El Comité observa que durante la visita *in situ*, los representantes apuntaron a la necesidad de un asesor jurídico de planta para que realice tareas legales rutinarias. A este respecto, ayudaría a desempeñar las funciones de la Auditoría General. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.4 en la sección 2.4 del capítulo II de este informe).

[85] El Comité también observa que, como establece la sección 1.2 en relación con la Comisión de Integridad, la unidad de auditoría interna de la unidad contable de un órgano gubernamental debe incluir un auditor interno.⁵⁵ La importancia y la función de la auditoría interna en el servicio público fueron analizadas en el Informe sobre las Cuentas Públicas de la República de Trinidad y Tobago 2011 del Auditor General y se incluyeron observaciones para mejorar su desempeño.⁵⁶ No obstante, el Comité no ha identificado la existencia de una unidad de auditoría interna dentro de la Auditoría General. Al buscar en el sitio Web de esta dependencia y en el organigrama disponible en línea, no hay indicios que un auditor interno trabaje dentro de la Auditoría General, ni que exista una auditoría interna.⁵⁷ Puesto que la Comisión debería poner el ejemplo para otras dependencias gubernamentales en su conducción y operaciones, considerando las responsabilidades que le atañen en la prevención de la corrupción, el Comité estima que el establecimiento de estas unidades para fiscalización interna debe llevarse a cabo a la mayor brevedad. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.5 en la sección 2.4 del capítulo II de este informe).

[86] Como señala la sección 2.1, una de las funciones más importantes que desempeña la Auditoría General es la auditoría de los estados financieros de las cuentas públicas de Trinidad y Tobago. El Comité observa, sin embargo, que no todas las dependencias gubernamentales entregan sus estados financieros para auditoría, como se puede ver en el Informe del Auditor General 2011.⁵⁸ Por ejemplo, 13 receptores de ingresos, que tienen la obligación de preparar y remitir al Auditor General estados de sus ingresos y desembolsos no suministraron estos estados.⁵⁹ Además, 8 Funcionarios Administrativos encargados de gestionar un fondo y que tienen la obligación de firmar y remitir al Auditor General un estado financiero de dicho fondo, no cumplieron esta obligación.⁶⁰ La lista de dependencias gubernamentales que no presentaron sus estados financieros incluye al Secretario Permanente del Procurador General, al Secretario Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Secretario Permanente del Ministerio de Administración Pública y al Secretario

55. Reglamento Financiero de la Ley de Tesorería y Auditorías, Capítulo 69:01,

rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/69.01.pdf.

56. Informe sobre las Cuentas Públicas de la República de Trinidad y Tobago 2011, pág. 169,

www.auditorgeneral.gov.tt/documentlibrary/downloads/9/Vol%20%204%20-%20AG%20REPORT%202011.pdf.

57. Organigrama de la Auditoría General, www.auditorgeneral.gov.tt/documentlibrary/downloads/6/OrgChart.pdf.

58. Informe de la Auditor General 2011, pág. 4, *supra* nota 56.

59. *Ibid.* Ver también la sección 24(1)(c) de la Ley de Tesorería y Auditorías, capítulo 69:01, *supra* nota 40.

60. *Ibid.* Ver también las secciones 24(2)(a) y (b) de la Ley de Tesorería y Auditorías, capítulo 69:01, *supra* nota 40.

Permanente de la Oficina del Primer Ministro, entre otros.⁶¹ Con respecto a los administradores de fondos, los siguientes, entre otros, no presentaron estados financieros completos: el Fondo de Desempleo, el Fondo de Petróleo para la CARICOM y el Fondo para el Desarrollo de Infraestructura.⁶²

[87] Al respecto, durante la visita *in situ*, los representantes de la Auditoría General afirmaron que es muy alto el nivel de cumplimiento de los Ministerios y Departamentos en la entrega de sus estados financieros. Sin embargo, en el caso de las instituciones estatutarias, hay el equivalente de más de 150 años de estados financieros pendientes, de alrededor de 60 entidades, que en algunos casos datan de 1999. En un caso, una institución estatutaria no presentó sus estados financieros de 1983 a 2005. Los representantes citaron la falta de recursos o de competencia en las instituciones estatutarias en sí como razones del incumplimiento. Los representantes también declararon que actualmente se emite un informe de incumplimiento de la presentación y que se cita al titular de aquellas dependencias que no presentan los estados al Parlamento para que se explique ante un comité permanente, pero que no hay otras consecuencias.

[88] El Comité observa que la sanción de ser citado ante el Parlamento no parece fomentar el cumplimiento de la presentación de estados financieros. El Estado analizado debería considerar sanciones más enérgicas que pueda imponer la Auditoría General a las personas u organismos responsables de presentar estos estados, a fin de fomentar el cumplimiento. Además, el Comité observa que los informes anuales elaborados por el Auditor General no contienen una lista de las instituciones estatutarias que no han presentado sus estados financieros, como ocurre actualmente en el caso de los Ministerios y Departamentos. El Comité considera que publicar una lista de las instituciones estatutarias que incumplen podría estimularlas a actuar. El Comité formulará recomendaciones al respecto (ver recomendaciones 2.4.6 y 2.4.7 en la sección 2.4 del capítulo II de este informe).

[89] Al respecto, la organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago observó durante su reunión con el equipo *in situ* que hay problemas con el trabajo del Auditor General, pues esta dependencia solamente puede ser tan eficaz como lo permita el Parlamento. Pueden elaborarse informes sobre la manera en que se gasta el dinero, pero cualquier acción depende del Parlamento para determinar las medidas que se adoptarán.

[90] En lo que respecta a la transparencia y la rendición de cuentas, el Comité observa que aunque la Auditoría General presenta un Informe Anual sobre las cuentas públicas del Estado analizado, no entrega un informe anual sobre las funciones de la Auditoría General misma. Por ejemplo, no hay detalles públicamente disponibles sobre la asignación del presupuesto y los gastos de la Auditoría General, ni sobre la capacitación que se imparte para sus actividades. El Estado analizado debería considerar que los informes anuales sobre las actividades de la Auditoría General son fácilmente disponibles en su sitio Web y que contengan información que suministre detalles significativos, de su asignación presupuestal y de sus gastos, por ejemplo, así como de las actividades de capacitación que lleva a cabo. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.8 en la sección 2.4 del capítulo II de este informe).

61. Ver la lista completa en el Apéndice 3 del Informe Anual de el Auditor General 2011, pág. 182, *supra* nota 56.

62. Ver la lista detallada en el Apéndice 4 del Informe Anual de el Auditor General 2011, pág. 186, *Ibid.*

2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[91] El Comité observa que el resultado de las auditorías de la Auditoría General sí aparece en sus informes anuales. También están disponibles las Cuentas de Asignaciones y los estados de ingresos, así como los estados de tesorería.⁶³ Estos documentos suministran información detallada sobre las cuentas públicas del Estado analizado.

[92] En los informes anuales, el Comité observa que el Auditor General suministra estadísticas informativas sobre pagos no autorizados de salarios, pensiones, subsidios, sueldos u otros montos. Al respecto, el Informe Anual 2011 expone que:

[93] *“Las Cuentas Certificadas de Asignaciones recibidas para el ejercicio financiero 2011 revelaron que se identificaron 5.280 casos de sobrepagos durante el ejercicio fiscal, 643 más que en el ejercicio anterior. El valor de estos casos totalizó \$20.370.970,62, un incremento de \$2.156.607,63 o un 11,84% más que los \$18.214.362,99 del ejercicio anterior (excluyendo un sobrepago de \$75.250.000,00 del Ministerio de Desarrollo de Tobago a la Asamblea de Tobago que se recuperó). Referencia en el apéndice 8/1 de este Informe. De la cantidad pagada en exceso, se recuperaron dentro del ejercicio montos por un total de \$8.492.896,04, o el 41,69%.”*⁶⁴

[94] En el Apéndice 8 del Informe Anual 2011 se desglosan estas estadísticas por Ministerio o Departamento, número de casos de sobrepago, monto del sobrepago y cantidad recuperada.

[95] Además, estos informes también registran estadísticas sobre casos denunciados de robos y pérdidas. Al respecto, el Informe Anual 2011 manifiesta:

[96] *“De conformidad con la Parte XIX del Reglamento Financiero, capítulo 69:01, los funcionarios contables tienen la obligación de investigar y notificar al Contralor Contable y al Auditor General sobre todas las pérdidas de bienes del Estado. De acuerdo con los informes recibidos en la Auditoría General, en el ejercicio financiero 2011 hubo 44 casos de robos y pérdidas de bienes del Estado, por un total de \$1.322.269,83. Esta cifra comprendió 20 casos con un valor inferior a \$5.000,00 cada uno, por un total de \$35.277,75, y 24 casos superiores cada uno a \$5.000,00, por un total de \$1.286.992,08.”*⁶⁵

[97] En el apéndice 9 del Informe Anual 2011 se desglosan estas estadísticas por Ministerio o Departamento, número de casos y monto.

[98] El Comité toma nota de la valiosa información que proporcionan estos informes anuales con respecto a los sobrepagos y a la notificación de robos y pérdidas. No obstante, el Comité observa que los informes anuales no incluyen estadísticas sobre las cantidades recuperadas de los responsables de los robos y pérdidas, a diferencia del caso de los sobrepagos, un hecho que confirmaron los representantes de la Auditoría General durante la visita *in situ*. El Estado analizado debería considerar mantener un registro estadístico de los montos que se ordena devolver al Estado en casos de robos o pérdidas y de los montos que se reciben en realidad, como se está haciendo en el caso de los sobrepagos. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.4.9 en la sección 2.4 del capítulo II de este informe).

63. Ver www.auditorgeneral.gov.tt/applicationloader.asp?app=documentlibrary&pid=0&category=8.

64. Informe Anual 2011, pág. 143, *supra* nota 56.

65. *Ibid.*

2.4. Conclusiones y recomendaciones

[99] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Auditoría General en los acápite anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[100] La República de Trinidad y Tobago ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer la Auditoría General, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.

[101] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 2.4.1 Adoptar las medidas apropiadas para agilizar la contratación del personal, por ejemplo, considerar delegar la función de la publicación, la selección preliminar y las entrevistas para los puestos en la Auditoría General a esa institución, con la participación de la Comisión del Servicio Público (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.2 Asegurar que el programa de capacitación para el personal de la Auditoría General se imparta de manera planeada y coordinada y que incluya capacitación introductoria para funcionarios nuevos (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.3 Establecer, cuando corresponda, un mecanismo de intercambio de información para la Auditoría General, para que reciba comunicaciones formales de seguimiento de los resultados de las irregularidades registradas y de la recuperación de recargos del Procurador General, las Comisiones de Servicio y el Departamento de Policía. (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.4 Nombrar a un asesor jurídico dentro de la Auditoría General para que emprenda tareas legales rutinarias y ayude así a desempeñar las funciones de esta Auditoría (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.5 Establecer una unidad de auditoría interna dentro de la Auditoría General (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.6 Publicar la lista de las instituciones estatutarias que no presentan sus estados financieros para el ejercicio financiero (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.7 Otorgar competencia al Auditor General para imponer sanciones administrativas a las dependencias gubernamentales e instituciones estatutarias que no presenten sus estados financieros para el ejercicio financiero, así como a las personas responsables de prepararlos y entregarlos a nombre de esas dependencias e instituciones (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.8 Publicar un informe anual sobre las actividades de la Auditoría General que incluya información como su asignación presupuestal, gastos y capacitación impartida (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).

- 2.4.9 Mantener estadísticas de los montos que se ordena devolver al Estado en casos de robos o pérdidas y de los montos que se reciben en realidad, como se está haciendo en el caso de los sobrepagos, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).

3. COMISIONES DE SERVICIO

3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[102] Las Comisiones de Servicio cuentan con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[103] La Constitución de Trinidad y Tobago establece diversas Comisiones de Servicio facultadas para designar a las personas bajo su esfera de competencia para que ocupen permanente o temporalmente los puestos correspondientes, así como para ejercer control disciplinario sobre ellas. En particular, la Constitución establece la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos —responsable de designar y ejercer control disciplinario sobre los funcionarios judiciales y jurídicos, tales como los magistrados y abogados del Estado, conforme a la sección 111(4) de la Constitución— y la Comisión del Servicio Público, responsable de designar y ejercer control disciplinario sobre los funcionarios públicos, de acuerdo con la sección 121(7) de la Constitución.⁶⁶ Además, la Comisión del Servicio Público está facultada para exigir el cumplimiento de las normas de conducta de los funcionarios públicos bajo su esfera de competencia.⁶⁷

[104] Con respecto a la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, la sección 110 de la Constitución prevé que deberá estar integrada por el Presidente de la Corte, quien será el Presidente de la Comisión, el Presidente de la Comisión del Servicio Público y otros tres miembros, que designará el Presidente tras consultar con el Primer Ministro y el Líder de la Oposición.⁶⁸ La Constitución establece además que estos miembros solamente podrán ser destituidos de sus puestos por incapacidad para desempeñar sus funciones, ya sea por enfermedad física o mental o por cualquier otra causa, por mala conducta o cuando se desocupe el puesto.⁶⁹

[105] La Comisión del Servicio Público constará de un Presidente, un Vicepresidente y no menos de dos ni más de cuatro miembros adicionales. El Presidente nombra a los miembros de esta Comisión, tras consultar con el Primer Ministro y el Líder de la Oposición. Al igual que ocurre con la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, estos miembros solamente podrán ser destituidos de sus puestos por incapacidad de desempeñar sus funciones, ya sea por enfermedad física o mental o por cualquier otra causa, por mala conducta o cuando se desocupe el puesto.⁷⁰ Asimismo, no es elegible para ocupar un puesto en una Comisión de Servicio ningún miembro de la Cámara de Representantes o del Senado, ni ninguna persona que ocupe permanente o temporalmente cualquier cargo público o que

66. La excepción son los funcionarios públicos bajo la esfera de competencia de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, el Servicio de Policía o el Servicio Docente, a aquellos puestos cuya designación le corresponde al Presidente.

67. Constitución de la República de Trinidad y Tobago, sección 121(1), *supra* nota 4. Asimismo, la Comisión del Servicio Público tiene jurisdicción sobre los Servicios Civil, de Bomberos y Carcelario.

68. Uno de sus miembros se seleccionará de entre personas que ocupen o hayan ocupado cargos como jueces en algún tribunal con jurisdicción ilimitada en asuntos civiles y penales o en algún tribunal con jurisdicción de apelación de esos tribunales, y dos de ellos de entre personas con formación jurídica, una no dedicada a la práctica activa.

69. Artículos 126(3) y 136(7) de la Constitución, *supra* nota 2. Se desocupa un puesto al transcurrir cinco años a partir de la fecha del nombramiento, o en un lapso más corto no menor de tres años, o si el miembro es nominado para una elección en la Cámara de Representantes o nombrado Senador.

70. Sección 126(4) de la Constitución, *Ibid.*

haya ocupado cualquier cargo público dentro de los tres años anteriores al nombramiento. A la inversa, quien haya ocupado un puesto o actuado como miembro de una Comisión de Servicio no será elegible durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que haya ocupado permanente o temporalmente dicho puesto para ser nombrado para ningún puesto público.⁷¹

[106] Las decisiones de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos y de la Comisión del Servicio Público deberán ser adoptadas por un mínimo de 3 miembros, que constituyen un quórum, por mayoría de votos.⁷² En caso de empate, el Presidente tendrá un segundo voto decisivo. Las decisiones adoptadas por estas comisiones con respecto a procesos disciplinarios podrán ser apeladas ante la Junta de Apelaciones del Servicio Público. La Junta de Apelaciones podrá confirmar o anular la decisión apelada o podrá sustituir cualquier otra decisión que haya tomado la Comisión de Servicio o la persona en quien recae la apelación.⁷³ Las decisiones de la Junta de Apelaciones podrán ser revisadas judicialmente, de acuerdo con la Ley de Revisión Judicial. Esta ley dispone que la Corte Superior de la Corte Suprema de la Judicatura podrá, mediante una solicitud de revisión judicial, otorgar reparaciones a cualquier persona cuyos intereses se hubieran visto afectados negativamente por una decisión adoptada por una institución o autoridad pública o persona en ejercicio de un deber público, entre otros.⁷⁴ Las bases para la revisión reflejan los principios legislativos de revisión judicial e incluyen que la decisión haya sido contraria a derecho o no autorizada por la ley en cualquier sentido; por actuación fuera de jurisdicción; por ejercicio de una facultad de manera tan irracional que ninguna persona razonable habría ejercido de tal manera tal facultad; por privación de una expectativa legítima; y por violación de los principios de justicia natural.⁷⁵

[107] Las Comisiones de Servicio operan de manera autónoma e independiente de influencias políticas, lo cual se ha confirmado en la jurisprudencia. Por ejemplo, en el caso de *Thomas vs. el Procurador General de Trinidad y Tobago*, el Consejo Privado, invocando la Constitución de 1962, declaró lo siguiente con respecto al propósito constitucional de estas Comisiones:

[108] *“El único objeto del capítulo VIII de la Constitución, que lleva el título de ‘El Servicio Público’, es aislar a los miembros del Servicio Civil, el Servicio Docente y el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago de influencias políticas ejercidas sobre ellos directamente por el gobierno en curso. Los medios que se adoptaron para ello consistieron en otorgarles a las comisiones autónomas, excluyendo a cualquier otra persona o autoridad, la facultad de decidir los nombramientos para el servicio correspondiente y los ascensos y transferencias dentro del servicio, así como para destituir y ejercer control disciplinario sobre los miembros del servicio. A pesar que estas comisiones autónomas son autoridades públicas, la sección 105(4)(c) las exime de formar parte del servicio de la Corona.”*⁷⁶

71. Secciones 126(1) y 126(2), *Ibid.*

72. Reglamento de la Comisión del Servicio Público, Sección 5, scd.org.tt/attachments/article/118/Public%20Service%20Commission%20Regulations.pdf. Hasta en tanto se promulgue su reglamento, la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, con el consentimiento del Primer Ministro, ha adoptado, *mutatis mutandis*, el Reglamento de la Comisión del Servicio Público; ver Papel, Responsabilidades y Composición de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, scd.org.tt/index.php/en/the-service-commissions/104-judicial-a-legal-service-commission/89-jlsc-roles-responsibilities-a-composition.

73. Ver las secciones 130 y 132 de la Constitución, *supra* nota 4.

74. Ley de Revisión Judicial, sección 5, <http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws/Chs.%207-8/7.08/7.08%20aos.htm>.

75. *Ibid.* Sección 5(3). Adicionalmente, la Constitución prevé en su sección 4(d) que uno de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas es el derecho del individuo a la igualdad en el trato de cualquier autoridad pública en ejercicio de cualquier función.

76. *Thomas vs. el Procurador General de Trinidad y Tobago*, www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_tto_thomas_ag.pdf. La sección 3(4)(b)(iii) de la actual Constitución de la República de Trinidad y Tobago corresponde a la sección 105(4)(c) de la

[109] El Departamento de las Comisiones de Servicio sirve como secretaría para todas las Comisiones de Servicio, incluidas la Comisión del Servicio Público y a la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos. Este Departamento les suministra a las Comisiones los servicios administrativos y de asesoría que les permiten cumplir sus funciones constitucionales.⁷⁷ El Departamento comprende otras ocho secciones, responsables de diversos asuntos, como exámenes y evaluaciones, libertad de información, ascensos y nombramientos y la Unidad de Investigaciones del Servicio Público.⁷⁸ El cometido de la Unidad de Investigaciones del Servicio Público es facilitar la investigación oportuna de denuncias de mala conducta e indisciplina de los funcionarios públicos.⁷⁹

[110] Con respecto a las comisiones investigadoras disciplinarias de un árbitro único —lo que está permitido por el Reglamento del Servicio Público— la investigación o la toma de notas de una audiencia, los lineamientos están publicados en el sitio web del Departamento de las Comisiones de Servicio.⁸⁰ Además, la capacitación sobre el objeto y funciones de las distintas comisiones de servicio y la conducción de las comisiones investigadoras disciplinarias de un arbitrio único corre a cargo de la Unidad Jurídica del Departamento de las Comisiones de Servicio a solicitud de los ministerios y departamentos.⁸¹

[111] La Comisión del Servicio Público también ha establecido una Unidad de Seguimiento, Auditoría y Supervisión, responsable de cerciorarse que las funciones que se les delegan a los Secretarios Permanentes, a los Jefes de Departamento y a otros altos funcionarios públicos se ejerzan correctamente. Esta Unidad también suministra capacitación y servicios de consultoría a estas personas.⁸²

[112] En lo que respecta a la manera en que se le proporciona información al público en general sobre sus objetivos y funciones, la sección 66D de la Constitución de la República de Trinidad y Tobago prevé que las Comisiones de Servicio tienen la obligación, entre otras, de presentarle al Presidente antes del 1º de julio de cada año un informe sobre el ejercicio de sus funciones y

Constitución de 1962, que establece que: “4. Para los fines esta Constitución no se considerará que una persona está ocupando un puesto en el servicio público en razón solamente de que... b. ocupe el puesto de... iii. Defensor del Pueblo o miembro de la Comisión de Integridad o miembro de cualquier otra Comisión establecida por esta Constitución.” En la sentencia se dispuso también que: “Con respecto de cada una de estas comisiones autónomas, la Constitución contiene disposiciones para asegurar su independencia tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo. Ningún miembro del poder legislativo puede servir en la Comisión; todos los miembros deberán ser nombrados para un plazo fijo de no más de tres ni menos de cinco años, durante el cual sólo podrán ser destituidos por incapacidad para desempeñar sus funciones o por mala conducta. El período de cuarentena impuesto mediante el requisito de elegibilidad de que la persona no haya ocupado un puesto público en los últimos tres años, que además la hace inelegible para ser nombrada para cualquier otro puesto público durante los tres años posteriores a su salida como miembro de la Comisión claramente tiene la intención de evitar cualquier riesgo de que se ejerza influencia sobre ella en favor del poder ejecutivo por consideraciones relativas al avance de su propia trayectoria laboral.”

77. Ver Historia del Departamento de las Comisiones de Servicio y las Comisiones de Servicio, scd.org.tt/index.php/en/about-scd/88-history?layout=blog. Asimismo, el Informe Anual 2010 de la Comisión del Servicio Público prevé lo siguiente con respecto a la Secretaría: “La Secretaría suministra servicios de apoyo para permitir que la Comisión del Servicio Público cumpla sus responsabilidades constitucionales en relación con aquellos aspectos de la función de gestión de recursos humanos en el ámbito de su mandato con respecto a los funcionarios públicos,” pág. 8, *supra* nota 53.

78. Ver subcategorías, scd.org.tt/index.php/en/about-scd/92-role-of-sections?layout=blog.

79. Ver también Notificación Reglamentaria No. 41, Reglamento de la Comisión del Servicio Público (Enmendado), 2008, www.news.gov.tt/E-Gazette/Gazette%202008/Legal%20Notice%20No.%2041%20of%202008.pdf.

80. Ver Guías de Disciplina, scd.org.tt/index.php/en/reports-a-regulations/106-discipline-guide?layout=blog.

81. A este respecto el Estado analizado, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, señaló que en 2012 se llevaron a cabo siete sesiones de capacitación.

82. Informe Anual 2010 de la Comisión del Servicio Público, pág. 9, *supra* nota 53.

atribuciones durante el año anterior, el cual se posteriormente presenta ante cada una de las Cámaras del Parlamento dentro de los siguientes sesenta días. Además de la entrega del informe anual al Presidente, cada una de las Comisiones de Servicio asiste a una audiencia ante un Comité Selecto Conjunto del Parlamento y se le cuestiona sobre el ejercicio de sus atribuciones y funciones (sección 66A de la Constitución).

[113] Por último, el Comité observa que la importante institución del Defensor del Pueblo recibe quejas y presta asistencia a quienes consideran que han sufrido injusticias administrativas por parte de funcionarios públicos empleados por dependencias y departamentos gubernamentales— como las Comisiones de Servicio— y formula recomendaciones para abordar estas injusticias.⁸³

3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[114] Las Comisiones de Servicio, en especial la Comisión del Servicio Público y la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, cuentan con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 3.1. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas.

[115] Durante la visita *in situ*, diversos órganos de control superior expresaron su preocupación sobre los prolongados retrasos en el proceso de nombramiento que se encarga la Comisión del Servicio Público. Por ejemplo, como resultado de estos retrasos, los representantes de la Auditoría General comentaron sobre la incapacidad de este importante órgano de control superior para cumplir con su labor, pues carece de los recursos humanos adecuados para ello. Los representantes señalaron que puesto que el proceso de reclutamiento a través de la Comisión del Servicio Público toma demasiado tiempo, para cuando un puesto está listo para ser ocupado, la persona ya encontró otro empleo. Los representantes de la Auditoría General también indicaron que el proceso de reclutamiento puede tomar de 2 a 4 años y que hay 180 personas trabajando, aunque hay 299 puestos. Como resultado, su personal es insuficiente. Esto también afecta la realización de las auditorías que tiene que llevar a cabo la Auditoría General, pues transfiere a funcionarios encargados de las auditorías de desempeño para que realicen las auditorías contables, lo que también incide en el trabajo de la Auditoría General.

[116] El Comité observa también que en 2010 la Comisión de Integridad en lugar de utilizar el proceso de reclutamiento de la Comisión del Servicio Público, acudió al Gabinete para que se aprobaran 33 puestos para empleo por contrato. El objetivo era cubrir plenamente la dotación de personal de la Comisión. Los puestos se publicaron en octubre y noviembre de 2010 y las entrevistas se iniciaron en diciembre de 2010 y continuaron en 2011; con ello se cubrieron la mayoría de los puestos. El Comité observa que con este proceso se evitó recurrir a la Comisión del Servicio Público y no se tomó en cuenta la sección 9 de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, que señala que la Comisión de Integridad debe disponer del personal adecuado para el desempeño oportuno y eficiente de sus funciones, nombrado a través de la Comisión del Servicio Público.

[117] En vista que el proceso de nombramiento está afectando negativamente el trabajo de los órganos de control superior, ya que en un caso parece que se prefirió el empleo por contrato al reclutamiento a través de las Comisiones de Servicio, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar la modernización de sus prácticas de reclutamiento y selección de manera que pueda seguir suministrando al servicio público una fuerza de trabajo profesional y capaz, pero de manera más eficiente y ágil, algo que la Comisión del Servicio Público reconoce como necesario en

83. Defensoría del Pueblo, *supra* nota 14.

sus informes anuales.⁸⁴ Por ejemplo, el Estado analizado debería considerar con mayor detalle la propuesta de delegar la función de la publicación, la selección preliminar y las entrevistas para los puestos a oficinas específicas de un Ministerio o Departamento, siempre que tales funciones se lleven a cabo siguiendo lineamientos claros y que un representante de la Comisión o del Departamento de las Comisiones de Servicio forme parte del panel de entrevistas.⁸⁵ Esta propuesta se ha planteado ya con anterioridad y, ante la importancia de la Comisión de Integridad y de la Auditoría General para prevenir y combatir a la corrupción, el Estado analizado podría contemplar la delegación de estas funciones a estos órganos de control superior. El Comité formulará recomendaciones al respecto (ver recomendaciones 3.4.1 y 3.4.2 en la sección 3.4 del capítulo II de este informe).

[118] En este sentido, la Comisión del Servicio Público ha comentado en sus informes anuales que la *administración* de los recursos humanos en Trinidad y Tobago está fragmentada. El Informe Anual 2008 de la Comisión del Servicio Público establece las responsabilidades para las diversas dependencias gubernamentales como sigue:

[119] *“Las actividades de gestión de cargos y capacitación en todo el sistema son manejadas a nivel departamental por el Ministerio de Administración Pública; los términos y condiciones de servicio, el código de conducta para funcionarios públicos, la clasificación y la compensación, la descripción de puestos, las especificaciones de puestos y la evaluación de calificaciones corresponden al Departamento de Personal; la gestión del desempeño, la capacitación del personal y la planeación de sucesiones son manejados por los Secretarios Permanentes y los Jefes de Departamento; el Departamento de las Comisiones de Servicio, bajo la dirección del Departamento de Gestión de Personal, actúa como Secretaría de la Comisión del Servicio Público para el desempeño de sus funciones constitucionales relacionadas con nombramientos, ascensos, transferencias y confirmación de nombramientos y con el control disciplinario sobre las personas que ocupan permanente o temporalmente dichos cargos.”*⁸⁶

[120] Como resultado, de acuerdo con la Comisión del Servicio Público, puesto que esta responsabilidad compartida de las funciones de recursos humanos carece de sinergia, afecta negativamente la operación de la Comisión y contribuye a ineficiencias considerables en el cumplimiento de su mandato en áreas importantes como la selección de candidatos para nombramientos y las recomendaciones oportunas de los Secretarios Permanentes y Jefes de

84. Ver, por ejemplo, el Informe Anual 2007 de la Comisión del Servicio Público, pág. 3, www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_tto_psc_2007.pdf. Es indicativo que en sus informes anuales anteriores a 2009, la Comisión del Servicio Público establecía metas anuales para su trabajo, como la de efectuar como mínimo mil nombramientos permanentes, dos mil confirmaciones y mil quinientos ascensos. Sin embargo, parece que a partir del Informe Anual 2009 ya no se especifican estas metas, pues aparentemente la Comisión no ha podido cumplirlas. Ver pág. 33 del Informe Anual 2007 y pág. 26 del Informe Anual 2008, *supra* nota 53.

85. Informe Anual 2008 de la Comisión del Servicio Público, pág. 24, *supra* nota 53; Informe Anual 2009 de la Comisión del Servicio Público pág. 20, *supra* nota 53; e Informe Anual 2010 de la Comisión del Servicio Público, pág. 12, *supra* nota 53. La Comisión del Servicio Público y la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos pueden delegar sus atribuciones de nombramientos temporales subsecuentes e interinos a los Secretarios Permanentes y a los Jefes de Departamento. Esta delegación ha dado como resultado un número considerable de nombramientos, lo que puede constatar en la información suministrada en el Informe Anual 2010 de la Comisión del Servicio Público. Por ejemplo, en 2010, la Comisión hizo 1.257 nombramientos temporales, en comparación con 11.403 a través de delegación de Ministerios y departamentos, Informe Anual 2010, pág. 15. Ver la Orden de la Comisión del Servicio Público (Delegación de Atribuciones) (enmienda), 2006, webopac.ttlawcourts.org/LN/LN2006/LN105_06.pdf.

86. Informe Anual 2007 de la Comisión del Servicio Público, pág. 8, *supra* nota 84; Informe Anual 2008 de la Comisión del Servicio Público, pág. 4, *supra* nota 53; Informe Anual 2010 de la Comisión del Servicio Público, págs. 34-35, *supra* nota 53; e Informe Anual 2011 de la Comisión del Servicio Público, pág. 27, www.scd.org.tt/attachments/article/112/PSC%20Annual%20Report%202011.pdf. El Departamento de las Comisiones de Servicio también actúa como Secretaría para la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos.

Departamento para cubrir vacantes, lo que da como resultado retrasos en las decisiones sobre nombramientos y ascensos. La Comisión del Servicio Público también observa que las solicitudes de nombramientos en casos en que no se cumplen cabalmente los requisitos están afectando su credibilidad. En consecuencia, la Comisión del Servicio Público siente que está restringida en su capacidad para cumplir sus responsabilidades constitucionales y que existe la necesidad de una autoridad coordinadora eficaz para asegurar la rendición de cuentas de todos los organismos conexos que participan en el suministro de recursos humanos en Trinidad y Tobago.⁸⁷ El Comité estima que el Estado analizado debería considerar analizar la actual gestión de recursos humanos en el servicio público y cerciorarse que el trabajo de estas distintas agencias se esté llevando a cabo de manera ágil y eficiente, con lo que ayudará también a la importante labor de las Comisiones del Servicio Público y de Servicios Judiciales y Jurídicos. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.3 en la sección 3.4 del capítulo II de este informe).

[121] El Comité observa que en todos los informes anuales de la Comisión del Servicio Público se hace referencia a la necesidad de un sistema electrónico de gestión de documentos, un sistema generado por computadora que se utilice para rastrear y almacenar documentos electrónicos e imágenes de documentos impresos. El sistema existente se considera arcaico, pues el uso de sistemas manuales para el archivo y el manejo de documentos socava la productividad y la eficiencia de la Comisión. Como se dijo en el Informe Anual 2008, las ventajas de un sistema electrónico:

[122] *“[L]es proporcionarían a los usuarios un acceso más rápido y eficiente a los documentos sin tener que extraer y buscar expedientes impresos. Varios usuarios pueden tener acceso simultáneo a los documentos, lo que puede reducir significativamente los tiempos para la toma de decisiones y obtener así un proceso más eficiente y eficaz.”*⁸⁸

[123] Así pues, la Comisión considera que un sistema electrónico ayudaría a agilizar las operaciones y la consulta de información.⁸⁹ En vista de lo anterior, el Comité considera que el Estado analizado debería empezar a implementar este sistema electrónico de documentación, una necesidad que se ha identificado desde hace varios años y que podría ayudar a la labor del Departamento de las Comisiones de Servicio, y con ello a la Comisión del Servicio Público y a la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, en su importante trabajo. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.4 en la sección 3.4 del capítulo II de este informe).

[124] El Comité observa que en el Informe Anual 2011 de la Comisión del Servicio Público se han exhibido ciertos avances en la implementación propuesta de un sistema electrónico de manejo de datos. El Departamento de las Comisiones de Servicio ha obtenido fondos a través del Ministerio de Administración Pública, bajo el Banco Interamericano de Desarrollo, para implementar este sistema de documentación, con un marco temporal de cinco años.⁹⁰ El Comité espera recibir información actualizada sobre el progreso en la implementación de este sistema.

[125] Una de las importantes funciones a cargo tanto de la Comisión del Servicio Público como de la Comisión del Servicio Judicial es el ejercicio del control disciplinario sobre los servidores públicos bajo su esfera de competencia. Como introducción breve, el Reglamento del Servicio Público prevé dos vías para este proceso disciplinario. Para casos de faltas de conducta leves, las Comisiones han delegado a los Secretarios Permanentes y a los Jefes de Departamento la facultad de disciplinar a los

87. Informe Anual 2008, *Ibid.*

88. Informe Anual 2008 del Servicio Público, pág. 26, *supra* nota 53.

89. Informe Anual 2011 de la Comisión del Servicio Público, pág. 9, *supra* nota 86.

90. *Ibid.*, págs. 9-10.

funcionarios, mediante la cual designan a altos funcionarios como árbitros únicos para ver y decidir los casos. Sin embargo, si el asunto podría conducir al despido o descenso de puesto de un funcionario público, se nombra a un investigador, quien en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de su nombramiento debe remitir a la Comisión todos los documentos pertinentes, a partir de los cuales la Comisión decide si se debe acusar al funcionario de un delito. Una comisión investigadora disciplinaria permanente recibe el respaldo probatorio, averigua hechos y decide si se exonera o se declara culpable al funcionario.⁹¹

[126] Durante la visita *in situ*, el Departamento de las Comisiones de Servicio habló sobre el proceso disciplinario y reconoció que había un volumen considerable de casos atrasados y que era difícil llevar a cabo en 30 días una investigación para remitir un informe a una Comisión.⁹² El Comité observa que se creó dentro del Departamento de las Comisiones de Servicio una Unidad de Investigaciones del Servicio Público compuesta por profesionales con formación jurídica, para asegurar que las investigaciones sobre cualquier denuncia de mala conducta o indisciplina de funcionarios públicos se aborden dentro de los plazos establecidos en el Reglamento del Servicio Público y de manera profesional.⁹³ No obstante, durante la visita *in situ*, uno de los motivos que citaron los representantes del Departamento para el prolongado proceso de las investigaciones sobre asuntos disciplinarios es que carecen del personal suficiente y que los investigadores no están capacitados en temas jurídicos. Una propuesta para hacer frente a estos prolongados retrasos es introducir un sistema de gestión de casos para ayudar a agilizar el proceso y evitar demoras en las audiencias y en la conclusión de los casos. Otra propuesta que la Comisión del Servicio Público está trabajando es la posibilidad de introducir la solución de controversias alterna como parte de este proceso.⁹⁴ El Comité también observa con preocupación que aunque el propósito de introducir en 2006 la delegación de la facultad disciplinaria era agilizar el proceso y hacerlo menos formal, la Comisión estableció en 2009 que algunos altos funcionarios en los Ministerios y departamentos consideran que el proceso es demasiado largo y exige mucho tiempo y, como resultado, hay falta de interés y apoyo para la actuación de árbitros únicos. Asimismo, los Secretarios Permanentes y los Jefes de Departamento no están dispuestos a nombrar estos árbitros únicos.⁹⁵ Y una vez nombrados, la Comisión misma ha observado con preocupación que en varios casos las conclusiones de estos árbitros han sido anuladas por el Presidente de la Junta de Apelaciones del Servicio Público debido a que el Secretario Permanente o el Jefe de Departamento no cumplió la función eficazmente.⁹⁶

91. Reglamento de la Comisión del Servicio Público, Capítulo VIII, *supra* nota 72.

92. La organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago, en sus reuniones con el equipo de la visita *in situ*, afirmó que en algunos casos los procesos de investigación llegan a tomar aproximadamente 10 años.

93. Ver Departamento de las Comisiones de Servicio: Preguntas Frecuentes sobre Denuncias de Conducta Indebida, scd.org.tt/index.php/en/frequently-asked-questions/125-allegations-of-misconduct-faqs/106-allegations-of-misconduct-faqs. El Comité observa que hay implicaciones legales para las Comisiones de Servicio si las denuncias no se abordan de acuerdo con los plazos establecidos en el Reglamento del Servicio Público. Por ejemplo, en el caso de la Corte Superior de Justicia en 2005 de *Anthony Leach vs. la Comisión del Servicio Público*, la Corte determinó que había habido una demora irrazonable por parte la Comisión del Servicio Público para tomar la decisión de acusar o no al Sr. Leach de un delito de acuerdo con el Reglamento del Servicio Público y que sería un abuso de proceso y una injusticia acusarlo, dado que habían transcurrido cuatro años debido a la inacción de la Comisión del Servicio Público, webopac.ttlawcourts.org/LibraryJud/Judgments/HC/j_jones/2005/HCA_1002_2004.rtf.

94. A este respecto, el Estado analizado, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, señaló que la Comisión del Servicio Público contrató a un asesor jurídico para que emprendiera una revisión holística y la reformulación del reglamento de la Comisión del Servicio Público para incluir la gestión de casos en materia de disciplina y el uso de la solución alternativa de controversias como parte del proceso disciplinario.

95. Ver *The Public Service Commission Speaks Out*, volumen 2, pág. 4, scd.org.tt/attachments/article/95/PSCSpeaks%20Vol2Oct%202011.pdf.

96. Informe Anual 2009 de la Comisión del Servicio Público, pág. 15, *supra* nota 53.

[127] El Comité estima que el Estado analizado debería empezar a tomar medidas con respecto a los casos atrasados y las ineficiencias que parecen existir en el proceso disciplinario, así como la aparente falta de confianza en la operación de los árbitros únicos en el proceso disciplinario. También debería impartirse capacitación adicional al personal en funciones, en especial a quienes trabajan en la Unidad de Investigaciones del Servicio Público, además de capacitación adicional para los árbitros únicos, para que puedan desempeñar esta importante función de acuerdo con el Reglamento del Servicio Público. El Comité formulará recomendaciones al respecto (ver recomendaciones 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 y 3.4.8 en la sección en la sección 3.4 del capítulo II de este informe).

[128] Como ya se dijo previamente, el Comité observa que en varios casos, los Departamentos de las Comisiones de Servicio no han sido capaces de desempeñar sus funciones al servicio de las Comisiones de Servicios Judiciales y Jurídicos de manera eficiente y ágil debido a las limitaciones en sus recursos humanos. Por ejemplo, la insuficiente dotación de personal se ha citado con respecto a las prolongadas demoras para efectuar nombramientos y llevar a cabo procesos disciplinarios. Además, los Departamentos de las Comisiones de Servicio consideran que su pesada carga de trabajo está aumentando debido, entre otros, a los siguientes factores: un marcado aumento en el número de oficinas en el servicio civil; numerosas solicitudes de información a través de la Ley de Libertad de Información; el incremento de los asuntos disciplinarios; y el aumento de las quejas de funcionarios públicos contra las Comisiones ante la Corte Superior.⁹⁷ El Departamento de las Comisiones de Servicio considera que se requiere aumentar el personal jurídico, por ejemplo.⁹⁸ Además, en el Informe Anual 2010 de la Comisión del Servicio Público se hace referencia a las condiciones malsanas e insalubres del lugar de trabajo que aquejan al Departamento de las Comisiones de Servicio y que han tenido un efecto nocivo en el trabajo debido a los altos niveles de ausentismo y paros laborales. Esto se citó como una de las razones por las cuales se redujo el número de nombramientos permanentes en 2009 y 2010 en comparación con 2008, pues los problemas ambientales y de salud que sufrían los funcionarios dieron como resultado una baja en la productividad.⁹⁹ En vista de lo anterior, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar revisar el presupuesto asignado al Departamento de las Comisiones de Servicio y asegurarse que disponga de los recursos humanos y financieros necesarios para que se lleve a cabo el importante trabajo de las Comisiones de Servicio, así como cerciorarse que el entorno de trabajo sea conducente a un trabajo eficiente y ágil. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.9 en la sección 3.4 del capítulo II de este informe).

[129] Con respecto a la difusión pública y la rendición de cuentas, el Comité toma nota que el Departamento de las Comisiones de Servicio tiene un sitio web que contiene los programas que ha emprendido para respaldar las labores de las Comisiones de Servicio, así como publicaciones pertinentes, como los informes anuales de las Comisiones de Servicio y la producción del boletín *The Public Service Commission Speaks Out (La Comisión del Servicio Público se Expresa)*, que contiene información actualizada para el público sobre la labor de esta Comisión.¹⁰⁰ El Comité observa, sin embargo, que la Comisión del Servicio Público y la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos no publican todos sus informes anuales en el sitio web, ni pueden encontrarse en el sitio web del gobierno. Por ejemplo, en el caso de la Comisión del Servicio Público, solamente están disponibles

97. La República de Trinidad y Tobago: Las Comisiones de Servicio, pág. 6, www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_tto_serv_comm.pdf.

98. *Ibid.*, pág. 7.

99. Informe Anual 2010 de la Comisión del Servicio Público, pág. 15, *supra* nota 53. Ver también el Informe Anual 2009, que hace referencia a la continua frustración de la Comisión por tener que seguir recurriendo a una base de datos manual arcaica para su toma de decisiones, pág. 20, *supra* nota 53, así como el Informe Anual 2010, pág. 35, *supra* nota 53.

100. Departamento de las Comisiones de Servicio, scd.org.tt.

los informes de 2006, 2010 y 2011, mientras que de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos solamente están disponibles los informes de 2005 y 2006. Los representantes del Departamento de las Comisiones de Servicio confirmaron durante la visita que estos informes se le entregan al Parlamento cada año. El Comité tuvo acceso a los informes anuales de la Comisión del Servicio Público para los años 2007 a 2009; sin embargo, estos se le entregaron a la Secretaría Técnica del MESICIC a solicitud suya y no porque estén accesibles en línea. Asimismo, a diferencia de los informes anuales que produce la Comisión de Integridad, los informes anuales que elaboran la Comisión del Servicio Público y la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos no contienen detalles sobre la asignación presupuestal o sobre los gastos de los Departamentos de las Comisiones de Servicio ni sobre la capacitación que se imparte para sus actividades. En vista que estas Comisiones deben desempeñar sus funciones de manera independiente, justa, objetiva y transparente, el Estado analizado debería considerar hacer todos los informes anuales fácilmente accesibles en el sitio web del Departamento de las Comisiones de Servicio, junto con información que contenga detalles suficientes sobre la asignación presupuestal y los gastos de este Departamento, así como sobre cualquier capacitación que se imparta. El Comité formulará recomendaciones al respecto (ver recomendaciones 3.4.10 y 3.4.11 en la sección 3.4 del capítulo II de este informe).

[130] El Comité también estima que la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos debería considerar publicar un boletín informativo semejante al que publica la Comisión del Servicio Público sobre sus actividades. Considerando que el contenido del sitio web del Departamento de las Comisiones de Servicio suministra muy poca información sobre las actividades en curso de esta importante Comisión de Servicio, el Comité opina que este boletín podría ser una herramienta útil de información y difusión pública, lo cual resulta especialmente pertinente en vista que los informes anuales de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos disponibles públicamente en línea son particularmente obsoletos. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.4.12 en la sección 3.4 del capítulo II de este informe).

[131] Otro aspecto importante que observó el equipo durante la visita *in situ* es la falta de coordinación entre las dependencias gubernamentales y las Comisiones de Servicio. Por ejemplo, durante la visita a la Comisión de Integridad, los representantes de este órgano de control superior expresaron que nunca reciben comunicaciones de seguimiento cuando remiten alguna infracción al Código de Conducta contenido en la Ley sobre la Integridad en la Función Pública a la Comisión de Servicio. Dada la importancia de la coordinación entre estas instituciones para asegurar que se estén imponiendo sanciones a los funcionarios públicos por violaciones del Código de Conducta de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, el Estado analizado debería considerar establecer un mecanismo o arreglo formal que facilite el intercambio sistemático de información y las comunicaciones de seguimiento entre estas instituciones que participan en la lucha contra la corrupción. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.13 en la sección 3.4 del capítulo II de este informe).

3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[132] El Comité observa que los resultados de la labor de la Comisión del Servicio Público y de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos con respecto al ejercicio de procesos disciplinarios contra funcionarios públicos bajo su esfera de competencia se pueden encontrar en sus informes

anuales. Por ejemplo, en la página 18 del Informe Anual 2011 de la Comisión del Servicio Público, aparece la siguiente información:¹⁰¹

Cuadro 1:

	Servicio Civil	Servicio de Bomberos	Servicio Carcelario	Total
Número de funcionarios suspendidos	0	0	0	0
Número de funcionarios interdictos o reinterditos	5	3	8	16
Número de comisiones investigadoras disciplinarias designados para oír causas	10	1	4	15
Número de causas concluidas por comisiones investigadoras durante el año de revisión	6	1	2	9
Número de funcionarios bajo cargos disciplinarios	10	2	5	17
Número de funcionarios declarados culpables de cargos disciplinarios	5	2	0	7
Número de retiros de cargos disciplinarios	4	0	1	5
Número de personas condenadas por sentencia judicial	2	1	1	4
Número de funcionarios declarados inocentes por sentencia judicial debido a la no comparecencia de funcionarios de policía	1	2		3
Número de causas desestimadas	13	2	1	16
Número de árbitros únicos	30			30

Cuadro 2:

	Servicio Civil	Servicio de Bomberos	Servicio Carcelario	Total
Destitución	1	0	2	3
Reprimenda	2	1	1	4
Multa	0	1	0	1
Descenso de puesto	0	0	0	1

[133] El Comité observa que aunque estas cifras son de interés, son ambiguas con respecto al ejercicio del control disciplinario de la Comisión del Servicio Público. Por ejemplo, no queda claro el

101. Informe Anual 2011 de la Comisión del Servicio Público, pág. 18, *supra* nota 86.

número de procesos disciplinarios en curso, pendientes y trasladados de años anteriores. Esta información ayudaría a determinar el volumen de casos atrasados en el ejercicio de los procedimientos disciplinarios. También resultaría útil que se suministraran explicaciones adicionales con respecto a ciertas cifras, como las razones por las que se retiran los cargos disciplinarios: si se trata, por ejemplo, de violaciones de los plazos especificados en el Reglamento del Servicio Público. Asimismo, no se suministra información con respecto a los motivos por los que se instituyeron los procedimientos disciplinarios: por ejemplo, si se instituyeron por violaciones del Código de Conducta contenido en el Reglamento del Servicio Civil y, de ser así, qué disposición se infringió, etc. Tampoco queda claro por qué se hace referencia a casos de sentencia judicial, siendo que los asuntos disciplinarios que se encarga la Comisión del Servicio Público son de naturaleza administrativa.

[134] El Comité observa también que en el Informe Anual 2009, como ya se dijo en la sección 3.2, se hace referencia al hecho que en muchos casos las decisiones de los árbitros únicos tuvieron que ser anuladas por el Presidente de la Junta de Apelaciones del Servicio Público debido a que el Secretario Permanente o el Jefe de Departamento no había integrado correctamente la comisión. Aunque se menciona cuántas de estas comisiones se establecieron, no se suministran cifras sobre los resultados o cuántas de sus decisiones fueron anuladas.

[135] En cuanto a la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, el Comité observa que la información suministrada con respecto al proceso disciplinario para funcionarios jurídicos y judiciales es básica y, en el mejor de los casos, obsoleta. La información más reciente disponible proviene del Informe Anual 2006, según el cual de 12 quejas recibidas, 6 se rechazaron porque los asuntos o puntos planteados no correspondían a la jurisdicción de la Comisión, 4 se rechazaron por no ameritar acción, 1 se suspendió por cumplimiento subsiguiente y 1 justificó una investigación conforme a lo establecido en el Reglamento del Servicio Público.¹⁰² Preocupa al Comité, en primer lugar, la información básica y vaga suministrada por la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos y, en segundo lugar, la información obsoleta, pues cualquier resultado públicamente disponible data de hace más de 6 años. Además, un punto importante que ha sido tema de revisión desde la Primera Ronda de análisis y que se abordará en la sección de seguimiento de este informe es la ausencia de una norma de conducta, como un código de conducta aplicable a los funcionarios judiciales y jurídicos en la esfera de competencia de esta Comisión. El Comité observa que la falta de un código de conducta también podría explicar la información básica que se suministra en los informes anuales de esta Comisión.

[136] Tomando en consideración que el Comité no cuenta con más información que la expresada anteriormente que le permita efectuar una evaluación completa de los resultados en esta materia, el Comité le formulará una recomendación al Estado analizado para que contemple llevar registros estadísticos como se establece en el cuestionario de la Cuarta Ronda de Análisis. Este tipo de información le sería útil al Comité al permitirle evaluar exhaustivamente los resultados objetivos obtenidos en la aplicación del marco jurídico y otras medidas existentes para la Comisión del Servicio Público y la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, como corresponde a la implementación del párrafo 9 del Artículo III de la Convención. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.14 en la sección 3.4 del capítulo II de este informe).

102. Informe Anual 2006 de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, pág. 11, www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_tto_psc_2006.pdf.

[137] Por último, el Comité observa que muchos órganos gubernamentales, como la Comisión de Integridad y la Auditoría General, deben remitir los casos a las Comisiones de Servicio si se detecta una irregularidad por un funcionario público. Algunos casos fueron la notificación de infracciones del Código de Conducta contenido en la Ley sobre la Integridad en la Función Pública a la correspondiente Comisión de Servicio o la solicitud de aprobación de una Comisión de Servicio para hacer deducciones del salario de un funcionario público para la recuperación de pagos no cobrados o la deficiencia o pérdida de bienes destruidos identificada por la Auditoría General. El Comité observa que los informes anuales de las Comisiones de Servicio no llevan un registro de resultados sobre cuántas remisiones ha efectuado la Comisión de Integridad o su resultado, ni sobre el número de solicitudes que ha recibido de la Auditoría General para hacer deducciones del salario de un funcionario público para la recuperación de pagos, y cuando sea autorizado por el Ministro. El Comité estima que esta información debe ponerse a disposición del público en los informes anuales de las Comisiones de Servicio. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.15 en la sección 3.4 del capítulo II de este informe).

3.4. Conclusiones y recomendaciones

[138] Con base en el análisis integral realizado con respecto a las Comisiones de Servicio en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[139] La República de Trinidad y Tobago ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer las Comisiones de Servicio, como órganos de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.

[140] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 3.4.1 Implementar mecanismos para modernizar el proceso de selección y reclutamiento por las Comisiones de Servicio para que puedan operar de manera eficiente y ágil (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.2 Incluir las oficinas de la Comisión de Integridad y del Auditor General, y cualquier otro órgano de control superior, según corresponda, en la propuesta para delegar la función de publicación, selección preliminar y entrevistas para puestos (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.3 Implementar un mecanismo para que se pueda coordinar mejor a los diversos órganos gubernamentales que participan en la gestión de recursos humanos en Trinidad y Tobago, según sea pertinente (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.4 Implementar un sistema electrónico de gestión de documentos para el Departamento de las Comisiones de Servicio (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.5 Tomar medidas con respecto a los prolongados retrasos en el proceso disciplinario en las Comisiones de Servicio considerando mecanismos como un sistema de gestión de casos y soluciones alternas de controversias (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).

- 3.4.6 Revisar el sistema de comisiones investigadoras disciplinarias de un árbitro único para hacer frente a la falta de confianza en este proceso (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.7 Cerciorar que los funcionarios investigadores tengan la capacitación jurídica suficiente para llevar a cabo una investigación de manera expedita (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.8 Impartir capacitación a quienes se encargan del sistema de árbitros únicos para velar por que las funciones se realicen de conformidad con el Reglamento de la Comisión del Servicio Público (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.9 Suministrar al Departamento de las Comisiones de Servicio los recursos presupuestales y humanos que necesita para el desempeño adecuado de sus funciones, dentro de los recursos disponibles, y asegurar que su entorno de trabajo sea conducente a un trabajo eficiente y ágil (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.10 Asegurar que todos los informes anuales con respecto al trabajo de la Comisión del Servicio Público y de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos estén disponibles fácil y rápidamente para el público en su sitio web (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.11 Publicar un informe anual sobre las actividades del Departamento de las Comisiones de Servicio, en su calidad de Secretaría de estas Comisiones, que incluya información como su asignación presupuestal, gastos y capacitación impartida (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.12 Publicar un boletín informativo que se actualice periódicamente sobre las actividades en curso de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.13 Establecer, cuando corresponda, un mecanismo o acuerdo formal de intercambio de información y coordinación entre las Comisiones de Servicio y la Comisión de Integridad, así como otros órganos de control superior (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.14 Suministrar estadísticas que aclaren el origen y el resultado de todos los tipos de procesos disciplinarios realizados por las Comisiones de Servicio, como información sobre los motivos para instituir un proceso, sus resultados, la sanción impuesta y las razones para suspenderlo, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas (ver sección 3.3 del capítulo II de este informe).
- 3.4.15 Llevar un registro de resultados sobre el número de remisiones que han recibido las Comisiones de Servicio de otros órganos gubernamentales, como la Comisión de Integridad, la Auditoría General y el Defensor del Pueblo, con respecto a supuestas conductas irregulares de funcionarios públicos, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas (ver sección 1.3 del capítulo II de este informe).

4. MINISTERIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL

4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[141] El Ministerio de la Procuraduría General cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[142] El Ministerio de la Procuraduría General presta servicios legales al gobierno y a sus distintas agencias. La sección 76(2) de la Constitución prevé que el Procurador General es responsable de la administración de los asuntos legales en Trinidad y Tobago y que se deben entablar acciones legales a favor y en contra del Estado en caso de procedimientos penales, incluidos los relacionados con actos de corrupción, a nombre del Estado. Al respecto, el Director de la Fiscalía, que es el titular del Departamento de Derecho Penal del Procurador General, es el único responsable del procesamiento de actos delictivos, mientras que la Oficina de Investigaciones Anticorrupción del Ministerio es responsable de la investigación de actos de corrupción.¹⁰³

[143] Con respecto a los objetivos y funciones del Director de la Fiscalía, la sección 90(3) de la Constitución de la República establece que le corresponde instituir y emprender procesos penales contra cualquier persona ante cualquier tribunal con respecto a cualquier delito; atraer y proseguir cualquier procedimiento penal que haya instituido cualquier otra persona o autoridad; y suspender en cualquier etapa antes que se dicte la sentencia cualquier actuación penal instituida o emprendida por sí o por cualquier otra persona o autoridad. La sección 90(5) establece además que los procedimientos penales incluyen la apelación de la decisión de cualquier tribunal en un proceso penal o en un caso, mientras que la sección 90(6) especifica que la función del Director de la Fiscalía se puede ejercer a través de otras personas que actúen bajo sus instrucciones generales o específicas y de acuerdo con ellas. Así pues, la Dirección de la Fiscalía es plenamente responsable de todos los procesos penales en el país.¹⁰⁴

[144] De conformidad con la sección 90(4) de la Constitución, se dispone que el Director de la Fiscalía ejerce sus atribuciones excluyendo a la persona o autoridad que haya instituido o emprendido los procedimientos penales. El Estado analizado también señala en su respuesta al cuestionario que:

[145] *“Este puesto es establecido por la Constitución y casi está libre de control. El ejercicio de las atribuciones del Director de la Fiscalía se sujeta a la responsabilidad del Procurador General, que es un cargo político, para la ‘administración de asuntos legales’. Esto no se refiere a la realización de procesamientos, sino a asuntos administrativos, como la dotación de personal.”*¹⁰⁵

[146] Asimismo, en el sitio Web del Director de la Fiscalía se señala que el cargo se estableció debido a la necesidad de un puesto constitucional que fuera siempre independiente de influencias

103. Ver Asignación de Responsabilidades a los Ministros, Trinidad and Tobago Gazette, Vol. 50, No. 89, 13 de julio de 2011, www.news.gov.tt/E-Gazette/Gazette%202011/Gazette/Gazette%20No.%2089%20of%202011.pdf, y Papeles y Funciones de la Procuraduría General, <http://www.ag.gov.tt/AGCorner/RolesandFunctions/tabid/68/Default.aspx>

104. Ver pág. 3, Respuesta al cuestionario, *supra* nota 43.

105. *Ibid.*, pág. 4. Ver también la Presentación de la Dirección Fiscalía en la visita *in situ*, que señala que la administración del Procurador General incluiría: 1. Asuntos financieros, incluida la aprobación y presentación de presupuestos al Parlamento. 2. El suministro de locales e instalaciones adecuados y otros asuntos administrativos necesarios para la operación eficiente de la Dirección de la Fiscalía. 3. Rendición de cuentas ante el Parlamento sobre las actividades de la Dirección de la Fiscalía, para lo cual el Director de la Fiscalía tendría la responsabilidad de mantener informado al Procurador General sobre los hechos importantes de interés público o que afecten el interés público, [www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_tto DPP.pdf](http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_tto_DPP.pdf).

políticas para el procesamiento de asuntos penales y que la independencia del puesto está garantizada constitucionalmente, hecho que confirma la jurisprudencia de Trinidad y Tobago.¹⁰⁶ En el caso de *El Estado vs. Seeromanie Maraj-Naraynsingh et al.* (Crim. App. No. 5 de 2006), el tribunal confirmó que el Director de la Fiscalía no tiene obligación alguna de obedecer ninguna instrucción o indicación del Procurador General.¹⁰⁷

[147] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado señala que las decisiones de procesar se toman de acuerdo a derecho y considerando si es en interés público hacerlo. Los procedimientos de revisión judicial pueden ser iniciados por el agraviado que desea objetar decisiones del Director de la Fiscalía en ejercicio de sus atribuciones.¹⁰⁸

[148] En cuanto a la forma de seleccionarlo, la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos nombra al Director de la Fiscalía, en consulta con el Primer Ministro.¹⁰⁹ La Constitución dispone que el Director de la Fiscalía debe dejar su puesto al llegar a los sesenta y cinco años o si se le nombra senador o es electo para la Cámara de Representantes.¹¹⁰ Asimismo, la sección 11 de la Ley del Servicio Judicial y Jurídico, que establece la clasificación, remuneración y designaciones de los funcionarios del Servicio Judicial y Jurídico, prevé que los funcionarios jurídicos o judiciales, como el Director de la Fiscalía, también pueden ser destituidos por otras razones, por ejemplo, como consecuencia de un procedimiento disciplinario, por jubilación obligatoria, por jubilación voluntaria, por retiro por razones médicas y por renuncia.¹¹¹

[149] Con respecto al personal de la Dirección de la Fiscalía, según la sección 111 de la Constitución, la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos es responsable de los nombramientos, promociones, transferencias y confirmaciones de nombramientos, así como de las destituciones y del ejercicio de control disciplinario sobre los funcionarios judiciales y jurídicos.¹¹² El Estado analizado también señala lo siguiente en su respuesta al cuestionario:

[150] *“La Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos publica las vacantes; se convoca a presentar solicitudes; las personas presentan su solicitud y son seleccionadas con base en sus competencias, capacitación, experiencia e idoneidad general. El nombramiento se basa en méritos y la antigüedad se considera, aunque no es el factor decisivo. Algunos funcionarios jurídicos son nombrados con contratos a tres años, generalmente renovables. El Director de la Fiscalía participa hasta cierto punto, pues entrevista a los solicitantes preseleccionados y debe remitir sus observaciones sobre los funcionarios jurídicos que solicitan los puestos más altos. Los titulares de los puestos pueden ser destituidos por incumplimiento de sus funciones y por mala conducta en un cargo público, que incluye infracciones de la Ley de la Profesión Jurídica.”*¹¹³

106. Director de la Fiscalía, www.ag.gov.tt/AboutUs/Departments/DirectorofPublicProsecutions/tabid/100/Default.aspx.

107. Ver presentación del Director de la Fiscalía, *supra* nota 105.

108. Respuesta al cuestionario, pág. 4, *supra* nota 43. El Director de la Fiscalía también ha adoptado el Código para Fiscales, que establece, en su pág. 1, que una decisión de procesar solamente puede tomarse una vez que se han considerado plenamente el respaldo probatorio y las circunstancias concomitantes, www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_tto_code.pdf.

109. Sección 111 de la Constitución, *supra* nota 4.

110. Sección 136(14).

111. Ley del Servicio Judicial y Jurídico, rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/6.01.pdf.

112. La Ley del Servicio Judicial y Jurídico define a los funcionarios judiciales y jurídicos. Un funcionario judicial es el titular de un puesto judicial o la persona que se ha designado para dicho puesto. El Segundo Anexo de dicha Ley contiene una lista de puestos judiciales. Un funcionario jurídico es el titular de un puesto jurídico o la persona que se ha designado para dicho puesto. El Primer Anexo de dicha Ley contiene una lista de puestos jurídicos, *Ibid*.

113. Respuesta al cuestionario, pág. 5, *supra* nota 43. El personal profesional es reclutado a través de la Comisión del Servicio Público. El personal jurídico comprende aproximadamente 40 abogados. Para ingresar, el solicitante debe: (1)

[151] Al igual que el Director de la Fiscalía, la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos puede rescindir el nombramiento de un funcionario Jurídico o judicial como consecuencia de un procedimiento disciplinario, por jubilación obligatoria, por jubilación voluntaria, por retiro por razones médicas o por renuncia.¹¹⁴

[152] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado observa lo siguiente con respecto al Director de la Fiscalía y a la existencia de manuales que describen sus funciones y la capacitación impartida:

[153] *“El Código para Fiscales vigente en el Reino Unido es una guía importante. Se ha redactado un código especial para fiscales del Tribunal de Magistrados y está en uso. Se está produciendo un código local global para fiscales que será similar al código del Reino Unido. Todos los cargos tienen una descripción de puesto. La capacitación no es regular, pero se llevan a cabo talleres de capacitación internos y se nombra a los funcionarios jurídicos para asistir a conferencias y talleres en el extranjero.”*¹¹⁵

[154] El Estado analizado observa además que el sitio Web del Ministerio de la Procuraduría General (www.ag.gov.tt), donde se describe brevemente la función de la Dirección de la Fiscalía, es la forma en que el Director de la Fiscalía comunica a la ciudadanía sus objetivos y funciones.¹¹⁶

[155] En lo que toca a los mecanismos de control interno, el Ministerio de la Procuraduría General, responsable de los asuntos administrativos dentro de la Dirección de la Fiscalía y la Oficina de Investigaciones Anticorrupción, tiene un Departamento de Administración General. Dentro de este Departamento están la Unidad de Auditoría Interna y el auditor interno, que auxilian al Funcionario Contable para que se cumplan los objetivos del Ministerio evaluando la eficacia de los controles internos y sistemas contables con base en el Reglamento Financiero del Gobierno vigente.¹¹⁷ Como se señaló en la sección 1.2, el auditor interno se encarga de actividades de análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y observaciones pertinentes, como evaluar la robustez y la aplicación de los controles contables, financieros y operativos; cerciorarse de la confiabilidad de los datos contables y de otros tipos que se generan dentro de la organización; verificar el grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos establecidos; y evaluar la calidad del desempeño en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas.¹¹⁸ Además, los funcionarios jurídicos se agrupan bajo un fiscal superior que vigila sus avances y responde a puntos específicos y en última instancia informa al Director de la Fiscalía.¹¹⁹

[156] El Estado analizado observa que los recursos presupuestales de la Dirección de la Fiscalía están bajo el control del Ministerio de la Procuraduría General.¹²⁰

haber completado la licenciatura en derecho; (2) haber obtenido un certificado de educación jurídica; (3) haber sido admitido en el Colegio de Abogados para ejercer como Abogado; y (4) sujetarse a revisiones de antecedentes y seguridad, a cargo de la Oficina Especial de Servicios Policiales de Trinidad y Tobago. Ver presentación del Director de la Fiscalía, *supra* nota 105.

114. Ley del Servicio Judicial y Jurídico, sección 11, *supra* nota 111.

115. Respuesta al cuestionario, pág. 6, *supra* nota 43.

116. *Ibid.*, pág. 7.

117. Ver Departamento de Administración General, www.ag.gov.tt/AboutUs/Departments/GeneralAdministration/tabid/108/Default.aspx.

118. Ver el Manual de Auditoría Interna elaborado por la Unidad de Gestión Financiera, *supra* nota 23.

119. Respuesta al cuestionario, pág. 8, *supra* nota 43.

120. *Ibid.*

[157] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado observa que “*Se entregan informes anuales y el Presidente de la Corte en su discurso anual en la apertura del período judicial resume los logros y desafíos del sistema de justicia penal. Los informes anuales con mayores detalles se publican en forma electrónica (www.ttlawcourts.org) e incluyen datos como el número de acusaciones formuladas, enjuiciamientos y decisiones.*”¹²¹

[158] Con respecto al mandato de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción, que se estableció a través del Acta del Gabinete No. 20 del 11 de enero de 2002, debe investigar todos los informes y denuncias de corrupción contra funcionarios gubernamentales, funcionarios públicos, funcionarios de policía e instituciones públicas y estatutarias.¹²²

[159] Aunque están bajo la competencia del Procurador General, los miembros de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción provienen del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago. Según la sección 123A de la Constitución, enmendada por la (Enmienda a la) Constitución de 2006 y la (Enmienda a la) Constitución de 2007,¹²³ el Comisionado de Policía es responsable de los nombramientos, promociones y confirmaciones de nombramientos, así como de la destitución y el ejercicio del control disciplinario de los funcionarios policiales. Un funcionario policial puede ser destituido como consecuencia de un procedimiento disciplinario, por abandono de puesto, por ineficiencia, por jubilación obligatoria, por jubilación voluntaria, por retiro por razones médicas y por renuncia.¹²⁴ Los requisitos mínimos para ingresar al Servicio de Policía como aspirante figuran en el sitio web del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago e incluyen exámenes escritos y psicológicos, así como requisitos físicos mínimos.¹²⁵

[160] Por último, el Comité observa que el Estado analizado cuenta con la importante institución del Defensor del Pueblo, quien recibe quejas y presta asistencia a quienes consideran que han sufrido injusticias administrativas por parte de funcionarios públicos empleados por dependencias y departamentos gubernamentales y formula recomendaciones para abordar estas injusticias.¹²⁶ Además, el Estado analizado ha establecido la Autoridad de Denuncias Policiacas, a través de la cual esta institución recibe e investiga casos graves de mala conducta policiaca, corrupción policial y delitos penales por funcionarios de la policía. Es un ente institucional independiente que trabaja de manera independiente del departamento de policía.¹²⁷

4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[161] El Ministerio de la Procuraduría General cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 4.1. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas.

121. *Ibid.*, pág. 9.

122. *Ibid.*

123. (Enmienda a la) Constitución, 2006, www.ttparliament.org/legislations/a2006-06.pdf (Enmienda a la) Constitución, 2007, www.ttparliament.org/legislations/a2007-12.pdf.

124. Ver Reglamento del Servicio de Policía 28-34, rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/15.01.pdf.

125. Contratación y oportunidades de carrera, www.ttps.gov.tt/Recruitment/tabid/195/Default.aspx.

126. Defensoría del Pueblo, www.ombudsman.gov.tt/.

127. Ver la sección 21 de la Ley de la Autoridad de Denuncias Policiacas, http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/15.05.pdf, y el sitio web de la Autoridad de Denuncias Policiacas, www.moj.gov.tt/content/police-complaints-authority-2.

[162] El Comité observa que el Procurador General, según la Constitución, es un miembro del gobierno con dos funciones independientes en el Estado analizado. En primer lugar está la función gubernamental, dentro de la cual es miembro del Gabinete y responsable de la dirección y el control generales del gobierno, nombrado de la misma manera que otros ministros del gobierno.¹²⁸ Además, la persona designada para este cargo tiene que ser seleccionada de entre los miembros de la Cámara de Representantes o el Senado y el Procurador General también puede asistir a cualquier sesión de la Cámara de Representantes o del Senado, participar en los debates y otros procedimientos, expresarse sobre cualquier moción ante cualquiera de estas cámaras y proponer enmiendas a cualquier moción incluso en casos en que el asunto es parte de la cartera de otro ministro.¹²⁹ No obstante, el Procurador General es también un guardián del interés público, responsable de la administración de los asuntos legales en Trinidad y Tobago así como de los trámites judiciales en favor y en contra del Estado. En esta calidad, el Procurador General emprende procedimientos civiles a su propio nombre y procedimientos penales a nombre del Estado.

[163] Al respecto, como señala la sección 4.1, los procedimientos penales le corresponden al departamento de derecho penal del Ministerio de la Procuraduría General, encabezado por el Director de la Fiscalía. Este Director se encarga de las actuaciones penales de manera independiente, hecho que confirma la jurisprudencia, que señala que el Director de la Fiscalía no tiene obligación alguna de obedecer ninguna instrucción o indicación del Procurador General. No obstante, el Comité observa que el Procurador General sí puede ejercer cierto control sobre la Dirección de la Fiscalía. Por ejemplo, el Director de la Fiscalía depende del Procurador para asuntos administrativos importantes, como la aprobación y entrega de un presupuesto al Parlamento y el suministro de locales e instalaciones adecuados, que corresponde a la responsabilidad constitucional del Procurador General de administrar los asuntos jurídicos. Además, el Procurador General también es responsable de la rendición de cuentas ante el Parlamento sobre las actividades de la Dirección de la Fiscalía, para lo cual el Director de la Fiscalía tendría la responsabilidad de mantener informado al Procurador General sobre los hechos importantes de interés público o que afecten el interés público.¹³⁰ Como se anota en la respuesta al cuestionario, el Estado analizado señaló que:

[164] *“Este puesto es establecido por la Constitución y casi está libre de control. El ejercicio de las atribuciones del Director de la Fiscalía se sujeta a la responsabilidad del Procurador General, que es un cargo político, para la ‘administración de asuntos legales’. Esto no se refiere a la realización de procesamientos, sino a asuntos administrativos, como la dotación de personal.”*¹³¹

[165] A pesar que el Director de la Fiscalía actúa con independencia en relación con los procedimientos penales, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar establecer mecanismos que aseguren también la independencia de sus asuntos administrativos, sujetándose a su Constitución y a los principios fundamentales de su sistema jurídico. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.1 en la sección 4.4 del capítulo II de este informe).

[166] En el mismo orden de ideas, como se señaló en la sección 4.1, la Oficina de Investigaciones Anticorrupción se sujeta a la responsabilidad del Ministerio de la Procuraduría General. Sin embargo, a diferencia de la Dirección de la Fiscalía, no existe jurisprudencia ni disposiciones de rango

128. Sección 75 de la Constitución, *supra* nota 2. Ver también Cometidos y Funciones del Procurador General, *supra* nota 103.

129. Ver las secciones 62 y 76 de la Constitución, *supra* nota 4.

130. Presentación de la Dirección de la Fiscalía, *supra* nota 105.

131. Respuesta al cuestionario, pág. 4, *supra* nota 43.

constitucional que prevean su independencia de este. El Estado analizado debería considerar establecer mecanismos o medidas que garanticen la independencia de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción en el desempeño de su trabajo. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.2 en la sección 4.4 del capítulo II de este informe).

[167] El Comité observa que en la respuesta al cuestionario se hace referencia a la ausencia de tecnología y sistemas modernos que contribuyan al desempeño de las labores de la Dirección de la Fiscalía, y que se ha iniciado un proceso de reestructuración y reorganización. Adicionalmente, durante la visita *in situ*, los representantes de la Dirección de la Fiscalía dijeron que puesto que no disponen de presupuesto propio, no tienen programas de capacitación. El Estado analizado debería considerar asegurar que la Dirección de la Fiscalía cuente con tecnología y sistemas modernos para su trabajo, así como establecer capacitación regular para el personal, suministrando recursos presupuestales y tecnológicos suficientes con este fin. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.3 en la sección 4.4 del capítulo II de este informe).

[168] Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción presentaron información sobre la actual falta de recursos humanos y presupuestales. Por ejemplo, esta Oficina debe tener 25 agentes de policía, pero sólo tiene uno.¹³² Tampoco tiene superintendente ni superintendente adjunto, aunque también se le han asignado estos dos puestos. Los representantes de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción expresaron también su preocupación porque las instalaciones con que cuentan no son adecuadas para el trabajo que se tiene que desempeñar. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 4.4.4 en la sección 4.4 del capítulo II de este informe).

[169] El Comité observa que una de las funciones de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción es impartir capacitación a los funcionarios de policía con respecto a la corrupción y delitos conexos, así como identificar e implementar necesidades de capacitación en técnicas de investigación para todos los miembros de su personal. No obstante, los representantes señalaron que falta capacitación en técnicas de investigación para su personal, por ejemplo, en áreas como investigación forense, recopilación de inteligencia y análisis, tecnología de información, investigaciones de delitos financieros y delito cibernético. Otro ámbito en el que podría suministrarse capacitación y educación a la Oficina de Investigaciones Anticorrupción es sobre las herramientas legales para llevar a cabo investigaciones. Durante la reunión, los miembros de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción indicaron que las herramientas de que disponen son limitadas y dieron como ejemplo una Ley de Interceptación de Comunicaciones aprobada recientemente que prohíbe que la Oficina lleve a cabo escuchas telefónicas.¹³³ Sin embargo, en la reunión con la Dirección de la Fiscalía, los representantes afirmaron que esta Ley prevé excepciones a la prohibición del uso de la escucha telefónica para ciertos fines, y que puede emplearse como herramienta de investigación. El Estado analizado debería considerar establecer un programa de capacitación formal que asegure que el personal de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción reciba capacitación continua sobre técnicas de investigación y sobre las herramientas legales existentes para cumplir su labor. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.5 en la sección 4.4 del capítulo II de este informe).

[170] También se le informó al Comité durante la visita *in situ* sobre problemas que enfrenta la Oficina de Investigaciones Anticorrupción para obtener la cooperación de las dependencias

132. Presentación de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción, www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_tto_ACIB.ppt.

133. Ley de Interceptación de Comunicaciones, rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/15.08.pdf.

gubernamentales y empresas del Estado durante sus investigaciones. En particular se han presentado dificultades para obtener oportunamente información o documentos de estas instituciones. Los representantes de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción indicaron que la razón principal por la que enfrentan problemas para obtener la cooperación de estas instituciones es que las personas que trabajan en ellas son renuentes a actuar como testigos. Además, la Oficina de Investigaciones Anticorrupción señaló que las personas no están dispuestas a apoyar ulteriormente las investigaciones tras haber presentado una denuncia de corrupción, por temor a represalias. El Comité subraya que el tema de la protección de quienes denuncian actos de corrupción se consideró en la Segunda Ronda de Análisis y que el Estado analizado recibió recomendaciones pertinentes al respecto. No obstante, el Comité considera que el Estado analizado debería examinar el marco jurídico existente sobre la cooperación de las dependencias gubernamentales y empresas del Estado a fin de facilitar la cooperación oportuna de estas instituciones en las investigaciones de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.6 en la sección 4.4 del capítulo II de este informe).

[171] El Comité observa asimismo que durante la visita *in situ*, los representantes de la Dirección de la Fiscalía señalaron la falta de coordinación, cooperación e intercambio de información entre las agencias de investigación. La relación entre las agencias de investigación, como el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago, la División de Aduanas e Impuestos, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Directorio de Hacienda y el Departamento de Planificación Rural y Urbana a menudo se caracterizan por cierta competencia, desconfianza y antagonismo, y los representantes también indicaron que hay un grado de miopía por parte de cada organismo.¹³⁴ La Dirección de la Fiscalía señala que esto conduce a un enfoque fragmentado hacia las investigaciones y en la presentación de cargos, lo que afecta el procesamiento. Como expresó el Estado analizado en la discusión de buenas prácticas:

[172] *“Los departamentos individuales llevan a cabo sus propias investigaciones y formulan los cargos. Sin embargo, esto podría no tener la suficiente cobertura para capturar a todos los delincuentes, particularmente a los altos funcionarios. Los delitos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado, por ejemplo, son delitos menores, por lo que los cargos no reflejarían la seriedad de la situación cuando los hechos podrían indicar una operación de lavado de activos más extensa. Además, cuando se detiene a las “mulas” del narcotráfico —los encargados de transportar las drogas— en el aeropuerto, tanto Aduanas como la Policía pueden presentar cargos, pero con frecuencia están en desacuerdo sobre quién debe en realidad acusar o procesar a los delincuentes. Es posible que se pierda la perspectiva amplia, que puede incluir corrupción y personas de interés.”*¹³⁵

[173] Como resultado, la Dirección de la Fiscalía considera que las investigaciones no se están llevando a cabo de una forma integral que incluya a la policía, a las autoridades procesales y a otras partes interesadas y que *“la práctica de imputación debería efectuarse con miras a seleccionar el cargo que mejor refleje la gravedad del delito; que las prácticas óptimas arrojen perspectivas razonables de lograr una condena.”*¹³⁶

[174] El Comité estima que el Estado analizado debería establecer mecanismos formales de coordinación entre las agencias de investigación pertinentes, no solamente para el intercambio de información sobre investigaciones y para determinar los mejores cargos posibles, según corresponda,

134. Presentación de la Dirección de la Fiscalía, *supra* nota 105.

135. Respuesta al cuestionario, pág. 63, *supra* nota 43.

136. *Ibid.*

sino también para forjar confianza entre ellas, lo que podría hacer más eficiente su trabajo y conducir a procesamientos más eficaces. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.7 en la sección 4.4 del capítulo II de este informe).

[175] Los representantes de la Dirección de la Fiscalía subrayaron durante la visita *in situ* que no tienen atribuciones investigativas y que los fiscales no detectan delitos ni controlan a la policía.¹³⁷ Como resultado, dependen de las agencias de investigación para mantenerse informados sobre los asuntos y en ocasiones estas agencias de investigación no están recibiendo asesoría o ayuda oportunas en las primeras etapas de una investigación. Por ejemplo, podría suministrarse asesoría jurídica durante el curso de una investigación con respecto a la formulación de un cargo, la obtención de escuchas telefónicas u órdenes de cateo y otros puntos previos a la imputación. Los representantes manifestaron que actualmente no existen procedimientos o lineamientos establecidos para orientar a las agencias de investigación, aunque se están produciendo memorandos de entendimiento con este fin. El Estado analizado debería considerar la implementación de medidas, como estos memorandos, para establecer procedimientos o lineamientos para orientar las investigaciones, de manera que pueda haber colaboración en etapas más tempranas entre la Oficina y el Director de la Fiscalía y con las agencias de investigación. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.8 en la sección 4.4 del capítulo II de este informe).

[176] El Comité estima asimismo, en este sentido, que la Dirección de la Fiscalía también debería comunicarles a las agencias de investigación y a cualquier otra dependencia gubernamental que remita asuntos a la Oficina, sobre el resultado de sus investigaciones, por ejemplo, si condujeron a un procesamiento. En todo el marco legislativo que existe en el Estado analizado, hay muchos casos en que se le notifica al Director de la Fiscalía cuando se detecta un caso de mala conducta, en especial en el servicio público. Por ejemplo, la Ley sobre la Integridad en la Función Pública prevé que la Comisión de Integridad debe informar al Director de la Fiscalía cuando identifica una infracción de la ley. Sin embargo, como se dijo en la sección 1.2, la Comisión de Integridad no recibe comunicaciones de seguimiento del Director de la Fiscalía con respecto a los asuntos que remite a esta Oficina. El Estado analizado debería considerar establecer un mecanismo formal para la Dirección de la Fiscalía de manera que pueda coordinarse y enviar comunicaciones de seguimiento sobre los resultados de los reportes que le remitan las agencias de investigación, como la Oficina de Investigaciones Anticorrupción y otras dependencias gubernamentales, como la Comisión de Integridad. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.9 en la sección 4.4 del capítulo II de este informe).

[177] Otro punto identificado por el Comité es la ausencia de información públicamente disponible con respecto al trabajo de la Dirección de la Fiscalía y de la Oficina Anticorrupción. En cuanto a un sitio Web, la Dirección de la Fiscalía tiene uno que no es fácilmente accesible a través de la página virtual del Ministerio de la Procuraduría General. Solamente se encuentra si se busca Dirección de la Fiscalía. El Comité observa que en la introducción del Código para Fiscales se expone lo siguiente:

137. Citaron para el equipo de la visita una posición clásica sobre el papel de un fiscal: “No es posible enfatizar suficientemente que el propósito de un enjuiciamiento penal no es obtener una condena; es plantear ante un jurado lo que la Corona considera respaldo probatorio relevante para un delito alegado. Los abogados tienen el deber de asegurarse de que se presenten todas las pruebas legales disponibles de los hechos: Esto debe hacerse con firmeza y llevarse al máximo de su fuerza legítima, pero debe hacerse con justicia. En el papel del fiscal no cabe ninguna noción de ganar o perder; no puede haber otra función con mayor responsabilidad personal en la vida civil que la suya, que es asunto de deber público. Debe desempeñarse eficientemente con un sentido arraigado de la dignidad, la seriedad y la justicia de los procedimientos judiciales.” Ver *Boucher vs. R.* [1955] S.C.R. 16 en 23 (SCC) y la Presentación de la Dirección de la Fiscalía, *supra* nota 102.

[178] *“Existe la necesidad de mantener la confianza del público en la administración de justicia penal, y la comunidad tiene un interés legítimo en el trabajo de su fiscalía. El propósito del Código para Fiscales es, por consiguiente, no sólo suministrar un código de conducta para los fiscales, para promover la uniformidad en la toma de decisiones en todas las etapas de las actuaciones procesales, sino además sensibilizar a la comunidad sobre la manera en que opera el sistema de la fiscalía. En todo momento se deben aplicar criterios basados en principios, y es necesario que el pueblo de Trinidad y Tobago pueda ver por sí mismo cuáles son estos exactamente. La transparencia es esencial para el fiscal moderno, para un sistema de justicia penal justo y eficaz.”*¹³⁸

[179] El Comité está de acuerdo con esta declaración. La transparencia es esencial para un sistema de justicia limpio y eficaz y el público debe conocer la manera en que operan las actuaciones judiciales. El Comité estima que la Dirección de la Fiscalía debería poner a disposición del público los resultados de su trabajo, incluyendo detalles sobre la asignación presupuestal y los gastos de este Departamento y sobre la capacitación que se imparte para sus actividades. Un mecanismo de rendición de cuentas, como un informe anual que contuviera esta información, que incluyera estadísticas relevantes sobre el enjuiciamiento por el Director de la Fiscalía de actos de corrupción, sería una herramienta inestimable para mostrarle al público el trabajo que realiza el Director de la Fiscalía y cómo está usando sus recursos y su presupuesto. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.10 en la sección 4.4 del capítulo II de este informe).

[180] En el mismo orden de ideas, también debería prepararse anualmente un informe sobre las actividades de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción y hacerse fácilmente disponible al público. El Comité observa que durante la visita del equipo a la Oficina de Investigaciones Anticorrupción, y posteriormente, recibió estadísticas extensas sobre sus investigaciones, que aportan una valiosa fuente de información sobre su labor. No obstante, estas estadísticas no están a disposición del público, ni la Oficina de Investigaciones Anticorrupción tiene un sitio web para publicar este trabajo. Al igual que ocurre con el Director de la Fiscalía, un informe de este tipo, que contuviera sus recursos, presupuestos y estadísticas serviría como una herramienta excelente de rendición de cuentas. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.11 en la sección 4.4 del capítulo II de este informe).

4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[181] El Comité observa que el Estado analizado suministró resultados con respecto al trabajo de la Dirección de la Fiscalía sobre los casos de corrupción.¹³⁹ En 2010 se imputaron cargos a siete funcionarios públicos: 1) un policía, por pervertir el curso de la justicia pública y por dar dinero corruptamente a la policía por abstenerse de imputar cargos; 2) un policía fue acusado de solicitar corruptamente más de TT\$50.000; 3) tres policías por conducta indebida y robo; y 4) dos policías por robo. En 2011, se suministra la siguiente información: 1) pervertir el curso de la justicia, 2) recibir y solicitar corruptamente; 3) conducta inadecuada en un cargo público, por la cual se instruyeron cargos contra un policía; 4) ofrecer un soborno a dos policías; y 5) en Aduanas e Impuestos, por evasión fraudulenta de derechos aduaneros. En 2012 se registró lo siguiente: 1) confabulación para defraudar a una empresa por TT\$2,8 millones; 2) pagar corruptamente TT\$5000 a funcionarios de policía por asuntos de casos judiciales; 3) conducta inadecuada en un cargo público, de lo cual se instruyeron cargos a cuatro policías; 4) recibir bienes robados y aceptar corruptamente una consideración de aproximadamente TT\$10.000; y 5) confabulación para defraudar a una corporación

138. Código para Fiscales, *supra* nota 108.

139. Información suministrada por Trinidad y Tobago ante el pleno del Comité de Expertos durante el curso de este análisis.

de inversiones por TT\$1,5 millones. Por último, en 2013, se registraron: 1) malversación, falsificación de registros, por lo cual se instituyeron cargos a un funcionario de la policía; 2) conducta inadecuada en un cargo público y robo, por lo cual se instituyeron cargos a un policía; y 3) lavado de dinero.

[182] El Comité también observa que durante la visita *in situ*, la Dirección de la Fiscalía indicó que actualmente no tienen ningún caso de corrupción ante los tribunales y que el año pasado no hubo ninguna condena. Las estadísticas suministradas en los informes anuales que entrega el Poder Judicial apoyan esta afirmación, ya que indican que en 2008-2009, la Corte Superior despachó un proceso por corrupción, dos en 2009-2010 y ninguno en 2011.¹⁴⁰

[183] El Comité observa que aunque los resultados suministrados presentan un panorama general de la manera en que se están procesando los casos de corrupción, también debería proporcionarse información adicional y desglosada con el fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas: el número total de casos investigados que estaban listos para la adopción de una decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con ellos; el número de decisiones en que se establecieron responsabilidades o se impusieron sanciones; el número de decisiones en que no se determinaron responsabilidades o se fallaron sentencias absolutorias; y el número de decisiones que implicaron la extinción de la pena o de la responsabilidad por prescripción, sobre los tipos de delitos de corrupción. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la Recomendación 4.4.12 en la sección 4.4 del Capítulo II del presente informe).

[184] El Comité observa también que durante la visita *in situ* la Oficina de Investigaciones Anticorrupción entregó resultados de su trabajo.¹⁴¹

Estadísticas anticorrupción												
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total
No. de informes	43	35	48	47	95	77	94	66	53	49	21	628
No. de informes contra la policía	10	7	9	28	38	45	62	50	26	30	11	316
No. de informes contra funcionarios públicos/civiles	33	28	39	19	57	32	32	16	27	19	10	312
No. de informes detectados	17	8	9	4	11	9	5	2	2	1	0	68
No. de casos sin acción policial ulterior ¹⁴²	25	22	26	25	36	28	38	22	21	8	0	251
Casos no resueltos/abiertos	1	5	13	18	48	40	51	42	30	40	21	309
No. de delitos	51	8	21	25	29	13	24	10	2	4	2	189
No. de	29	17	40(16)*	12	16	6	9	7	2	2	3	143

140. Informe Anual del Poder Judicial 2008-2009, pág. 107, www.tlawcourts.org/images/annualreports/ar20082009.pdf; Informe Anual del Poder Judicial 2009-2010, pág. 89, www.tlawcourts.org/images/annualreports/ar20082009.pdf; e Informe Anual del Poder Judicial 2010-2011, pág. 84, www.tlawcourts.org/images/annualreports/ar20102011.pdf

141. Estadísticas de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción, www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_tto_stats.pdf.

142. Sin acción policial ulterior.

personas/empresas acusadas(*)	(26)*											(42)*
No. de personas declaradas culpables	0	3	2	0	1	1	1	1	0	1	1	11
No. de personas liberadas	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	6
No. de personas con casos desestimados	4	0	18	1	0	0	0	0	0	0	0	23
No. de personas con casos pendientes	23	13	20	10	13	5	8	6	2	1	2	103

[185] Como puede verse, la Oficina de Investigaciones Anticorrupción mantiene resultados detallados sobre su trabajo. Sin embargo, cabe destacar el elevado número de casos no resueltos o abiertos, el alto número de personas con casos pendientes y la baja tasa de condenas en comparación con el número de cargos imputados. En diez años se formularon 143 cargos contra personas o empresas, de los cuales solamente se han tenido 11 condenas.

[186] El Comité observa que el Estado analizado podría contemplar examinar las razones de las bajas tasas de condenas en comparación con el número de investigaciones que se llevan a cabo, por ejemplo, averiguando si es por motivos de recursos, restricciones legales, o porque no se les da prioridad a los casos de corrupción. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.13 en la sección 4.4 del capítulo II de este informe).

[187] Asimismo, el Comité reitera la observación expresada en la sección 4.2 en el sentido que estas estadísticas sobre el trabajo de la Dirección de la Fiscalía y de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción deben hacerse públicas. Las cifras de este informe se le entregaron a la Secretaría Técnica como parte del proceso de análisis. Sin embargo, no están disponibles públicamente.

4.4. Conclusiones y recomendaciones

[188] Con base en el análisis integral realizado con respecto al Ministerio de la Procuraduría General en los acápite anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[189] La República de Trinidad y Tobago ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al Ministerio de la Procuraduría General, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.

[190] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 4.4.1 Sujetándose a su Constitución y a los principios fundamentales de su sistema jurídico, establecer medidas o mecanismos que aseguren la independencia de la Dirección de la Fiscalía en sus asuntos administrativos (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).

- 4.4.2 Establecer mecanismos o medidas que garanticen la independencia de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción en el desempeño de su trabajo (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.3 Suministrar a la Dirección de la Fiscalía los recursos presupuestales y tecnológicos necesarios para la implementación de tecnología y sistemas modernos, así como para el establecimiento de capacitación regular para el personal, dentro de los recursos disponibles (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.4 Suministrar a la Oficina de Investigaciones Anticorrupción los recursos presupuestales y humanos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones, dentro de los recursos disponibles, incluido el suministro de instalaciones adecuadas (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.5 Establecer un programa de capacitación formal para la Oficina de Investigaciones Anticorrupción que asegure que el personal reciba capacitación continua sobre técnicas de investigación y las herramientas legales existentes (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.6 Examinar el marco jurídico existente para abordar las dificultades que enfrenta la Oficina de Investigaciones Anticorrupción para recibir cooperación de las dependencias gubernamentales y empresas del Estado con respecto a las investigaciones (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.7 Establecer, cuando corresponda, un mecanismo formal de intercambio de información y coordinación entre las agencias de investigación pertinentes (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.8 Implementar procedimientos o lineamientos para ayudar a la Dirección de la Fiscalía en la dirección de las investigaciones para las agencias de investigación (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.9 Implementar un mecanismo mediante el cual la Dirección de la Fiscalía suministre comunicaciones de seguimiento a los órganos gubernamentales con respecto al resultado de las irregularidades remitidas a esta Dirección (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.10 Publicar un informe anual sobre las actividades de la Dirección de la Fiscalía que incluya información como su asignación presupuestal, gastos y capacitación impartida, así como estadísticas sobre su trabajo, accesibles fácil y rápidamente para el público (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.11 Publicar un informe anual sobre las actividades de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción que incluya información como su asignación presupuestal, gastos y capacitación impartida, así como estadísticas sobre su trabajo, que sea accesible fácil y rápidamente para el público (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.12 Mantener resultados que indiquen el número total de casos investigados que estaban listos para la adopción de una decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con ellos; el número de

decisiones en que se establecieron responsabilidades o se impusieron sanciones; el número de decisiones en que no se determinaron responsabilidades o se fallaron sentencias absolutorias; y el número de decisiones que implicaron la extinción de la pena o de la responsabilidad por prescripción, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas para la Dirección de la Fiscalía (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).

- 4.4.13 Hacer frente a la baja tasa de condenas por delitos de corrupción en comparación con el número de investigaciones efectuadas, analizando puntos como recursos, impedimentos legales o asignación de prioridades, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).

5. DEFENSORÍA DEL PUEBLO

5.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[191] La Defensoría del Pueblo cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[192] La función principal del Defensor del Pueblo, según la sección 93 de la Constitución, es investigar cualquier decisión o recomendación, incluido cualquier consejo o recomendación efectuados a un ministro, o cualquier acto realizado u omitido por cualquier departamento del gobierno o cualquier otra autoridad, que sea una acción emprendida en ejercicio de las funciones administrativas del departamento o autoridad.¹⁴³ También puede investigar quejas en que se alegue una injusticia como resultado de una falta administrativa, cuando un miembro de la Cámara de Representantes solicita que el Defensor del Pueblo investigue un asunto o en cualquier circunstancia que el Defensor del Pueblo considere que se debe investigar con base en que alguna persona o agrupación ha sufrido o podría haber sufrido una injusticia. La sección 94 establece además que el Defensor del Pueblo está facultado para investigar quejas que planteen asuntos de integridad o corrupción del servicio público o de cualquier departamento u oficina del servicio público y que puede investigar las condiciones resultantes de actos de corrupción o que se planeen con miras a facilitar o fomentar actos de corrupción en el servicio público.¹⁴⁴

[193] Así pues, el Defensor del Pueblo puede investigar acciones administrativas que parezcan ser contrarias a las disposiciones legales o normativas; irrazonables, injustas, arbitrarias, ofensivas, discriminatorias; basadas en errores de hecho o en razones inadecuadas e irrelevantes; no

143. La sección 93(3) de la Constitución prevé que las autoridades, salvo los departamentos, del gobierno son: (a) las autoridades locales u otras agencias establecidas para fines de servicio público o de gobierno local; (b) las autoridades o agencias cuya mayoría de miembros son nombrados por el Presidente o por un ministro o cuyos ingresos consisten total o principalmente de dinero proveniente de fondos públicos; (c) cualquier autoridad facultada para determinar con quién se celebrará un contrato por el gobierno o a su nombre; (d) otras autoridades que se prescriban.

144. Como se describe brevemente en la página web de la Defensoría del Pueblo: *“La Defensoría del Pueblo se estableció exclusivamente con el fin de auxiliar a las personas que crean haber sufrido injusticias a manos de funcionarios públicos empleados por las dependencias y departamentos gubernamentales. En resumen, el Defensor del Pueblo se puede definir como una ‘persona a quién reclamar’ ante la cual los ciudadanos pueden presentar quejas para que se reparen errores, demoras, rigideces y faltas de atención de la burocracia gubernamental. El Defensor del Pueblo tiene una función tanto investigativa como de asesoría. Puede formular recomendaciones a los departamentos y autoridades gubernamentales como consecuencia de sus investigaciones. Si no se cumplen estas recomendaciones, puede remitir al asunto al Parlamento,”* Defensoría del Pueblo, *supra* nota 14.

acompañadas por una declaración de hechos adecuada cuando así lo requieren las leyes o normas; o ejecutadas de manera ineficiente o errónea.¹⁴⁵

[194] El Defensor del Pueblo, según la Ley de Libertad de Información, también puede recibir quejas por escrito de personas a quienes una autoridad pública les ha negado el acceso a un documento oficial. El Defensor del Pueblo examina el documento, si existe, y formula recomendaciones con respecto al acceso al documento según lo considere apropiado dentro de los siguientes treinta días o tan pronto como sea viable.¹⁴⁶

[195] Al investigar cualquier asunto relacionado con una decisión de un ministro, el Defensor del Pueblo no puede cuestionar ni hacer averiguaciones sobre la política del ministro en relación con la cual se tomó la decisión. Además, el Defensor del Pueblo no puede emprender investigaciones sobre cargos específicos de corrupción contra personas. Esta sección establece además que cuando el Defensor del Pueblo descubra pruebas de cualquier acto corrupto por un funcionario público o por cualquier persona en relación con el servicio público, debe notificar el asunto a la autoridad correspondiente con una recomendación con respecto a las investigaciones ulteriores que el Defensor del Pueblo pueda considerar apropiadas. Tampoco puede investigar acciones con respecto a las cuales el reclamante tenga: un recurso a través de un procedimiento o tribunal; derecho de apelación, remisión o revisión con o ante un árbitro independiente e imparcial distinto de un tribunal; o cualquier acción emprendida en respuesta a cualquier asunto contenido en el Tercer Anexo de la Constitución, por ejemplo, las acciones emprendidas con respecto a las relaciones entre el Gobierno de Trinidad y Tobago y cualquier otro gobierno u organismo internacional, bajo cualquier ley relacionada con extradición o con delincuentes fugitivos, con el fin de investigar un delito o proteger la seguridad del Estado o en relación con nombramientos o destituciones, pagos, disciplina, pensiones u otros asuntos personales relacionados con el servicio en cualquier cargo o empleo en el servicio público o bajo cualquier autoridad.

[196] En el desempeño de sus funciones, el Defensor del Pueblo está facultado por la Corte Superior para citar testigos y exigirles la presentación de pruebas bajo juramento y la presentación de documentos relevantes para el procedimiento. El Defensor del Pueblo también está autorizado para ingresar e inspeccionar las instalaciones de cualquier departamento de gobierno o de cualquier autoridad con el fin de pedir, examinar y, en caso necesario, conservar cualquier documento que se encuentre en dichas instalaciones.¹⁴⁷

[197] Al concluir una investigación, el Defensor del Pueblo le informa al departamento de gobierno o a la autoridad que se trate los resultados de la investigación, su opinión sobre si el reclamante sufrió una injusticia y las razones de esta opinión y formula recomendaciones. El Defensor del Pueblo puede especificar un plazo dentro del cual debe remediarse la injusticia. Si el asunto tiene la importancia pública suficiente y no se han adoptado medidas para remediar la injusticia, el Defensor del Pueblo puede presentar un informe especial sobre el caso ante el Parlamento.¹⁴⁸

[198] El Defensor del Pueblo está sujeto a revisión judicial de conformidad con la Ley de Revisión Judicial, lo que se confirmó durante la visita *in situ*. Esta ley dispone que la Corte Superior de la Corte Suprema de la Judicatura podrá, mediante una solicitud de revisión judicial, otorgar

145. Ver Presentación de la Defensoría del Pueblo, www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_tto_omb.pdf.

146. Sección 38(A) de la Ley sobre la Libertad de Información, rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/22.02.pdf.

147. Sección 97 de la Constitución de Trinidad y Tobago, *supra* nota 4.

148. Sección 96, *Ibid*.

reparaciones a cualquier persona cuyos intereses se hubieran visto afectados negativamente por una decisión adoptada por una institución o autoridad pública o persona en ejercicio de un deber público, entre otros.¹⁴⁹ Las bases para una revisión reflejan los principios legislativos de revisión judicial e incluyen que la decisión haya sido contraria a derecho o no autorizada por la ley en cualquier sentido; por actuación fuera de jurisdicción; por ejercicio de una facultad de manera tan irracional que ninguna persona razonable habría ejercido de tal manera tal facultad; por privación de una expectativa legítima; y por violación de los principios de justicia natural.

[199] El Presidente nombra al Defensor del Pueblo tras consultar con el Primer Ministro y el Líder de la Oposición. El Defensor del Pueblo es un funcionario del Parlamento, no puede ocupar ningún otro cargo ya sea en el servicio público o en un puesto remunerado ni dedicarse a ninguna otra ocupación a cambio de una retribución excepto las responsabilidades de su puesto y ocupa el cargo por un período de no más de cinco años con elegibilidad de renovación.

[200] El Defensor del Pueblo ocupa su cargo de acuerdo con la sección 136 de la Constitución, que determina que al llegar a los sesenta y cinco años, el Defensor del Pueblo debe dejar el puesto. Adicionalmente, la sección 136(7) de la Constitución establece además que el Defensor del Pueblo solamente puede ser destituido de su puesto por incapacidad de desempeñar las funciones del cargo, ya sea por enfermedad física o mental o por cualquier otra causa, o por mala conducta.

[201] El Defensor del Pueblo, de acuerdo con la sección 92 de la Constitución, debe ser dotado con un equipo de funcionarios públicos adecuado para el desempeño eficiente de sus funciones, que serán nombrados de conformidad con la sección 121(8), que señala que la Comisión del Servicio Público deberá consultar previamente con el Defensor del Pueblo antes de realizar un nombramiento o transferir a un miembro del personal del Defensor del Pueblo. Por tratarse de funcionarios públicos, la Comisión del Servicio Público es responsable de nombrar al personal.

[202] Con respecto a capacitación, se aprobó un plan de capacitación durante el período 2011-2014 conforme a la Política de Capacitación para el Servicio Público de Trinidad y Tobago y los Lineamientos de la Política de Capacitación.¹⁵⁰ según lo indicado en el 34 Informe Anual del Defensor del Pueblo, 2011:

[203] *“El plan está orientado a las necesidades de desarrollo de todos los empleados y se propone lograr mejoras continuas en todos los ámbitos de operación de la Oficina vinculando sus desempeños con el logro de los fines estratégicos de la Oficina.”*¹⁵¹

[204] Durante la visita *in situ*, la Defensoría del Pueblo informó que las operaciones de la Oficina están distribuidas en tres ubicaciones; Puerto España, San Fernando y Scarborough, Tobago. Las operaciones se dividen en tres áreas: manejo de quejas – investigaciones; auditoría de cumplimiento de la libertad de información; y servicios institucionales centrales, divididos en unidades, como Recursos Humanos; Tecnología de la Información, Servicios Contables y Gestión de Registros, entre otros. Todos los miembros clave del personal tienen descripciones de puesto y los procesos de trabajo del equipo de investigación se rigen por un manual y políticas aprobadas por el Defensor del Pueblo.

149. Ley de Revisión Judicial, *supra* nota 74.

150. 34 Informe Anual del Defensor del Pueblo, 2011, pág. 15,
<http://www.ombudsman.gov.tt/downloads/DownloadItem.aspx?id=39>.

151. *Ibid.*

Además, un sistema informático automatizado de base de datos apoya a los investigadores y al Defensor del Pueblo para la gestión eficaz de las quejas.¹⁵²

[205] El Defensor del Pueblo tiene un sitio web que provee información al público en general sobre sus objetivos y funciones.¹⁵³ Este sitio incluye páginas para presentar una queja en línea, una página sobre preguntas frecuentes que contiene información sobre las funciones del Defensor del Pueblo, los pasos para presentar una queja, la definición de la mala administración para orientar al reclamante, la manera en que se manejan y la jurisdicción del Defensor del Pueblo. El sitio web contiene documentos como el marco jurídico para el Defensor del Pueblo, sus informes anuales, un boletín y estudios de casos. El Defensor del Pueblo también programa visitas a comunidades para darles facilidades a las personas con quejas contra organismos del Estado y en su sitio web proporciona el lugar, la fecha y la hora en que estará en esas comunidades.

[206] Con respecto a la manera en que el público en general recibe información sobre sus objetivos y funciones, la sección 96(5) prevé que el Defensor del Pueblo elaborará un informe anual sobre el desempeño de sus funciones para el Parlamento, que incluirá estadísticas con los formatos y detalles que se prescriban sobre las quejas recibidas y los resultados de las investigaciones.

5.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[207] La Defensoría del Pueblo cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 5.1. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas.

[208] Durante la visita *in situ*, los representantes de la Defensoría del Pueblo expresaron preocupación sobre los recursos humanos de que disponen, así como sobre sus mecanismos. Indicaron que no tienen recursos humanos suficientes para llevar a cabo sus investigaciones de integridad o corrupción de cualquier departamento del servicio público. Además, dado el número de investigaciones que tienen que llevar a cabo, no cuentan con mecanismos adecuados para realizar una investigación a fondo. En vista de lo anterior y del requisito constitucional que se suministre al Defensor del Pueblo el personal adecuado para el desempeño eficiente de sus funciones, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar revisar el presupuesto asignado a la Defensoría del Pueblo para cerciorarse que disponga de los recursos humanos y financieros necesarios, así como de los mecanismos para llevar a cabo su importante labor. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 5.4.1 en la sección 5.4 del capítulo II de este informe).

[209] Al respecto, durante la visita *in situ*, los representantes de la Defensoría del Pueblo señalaron que no tienen independencia con respecto a su presupuesto, ya que es necesario presentar una solicitud anual al Ministro de Finanzas para su aprobación, que tiene que adecuarse a las prioridades presupuestales. Durante la visita *in situ* se le informó al equipo que en el último año la Defensoría no recibió la asignación presupuestal solicitada. El Comité observa que no encontró en la Constitución ni en la Ley del Defensor del Pueblo ninguna referencia a la manera en que se asigna el presupuesto para la Defensoría del Pueblo. El Comité estima que el Estado analizado podría contemplar implementar medidas o mecanismos para asegurar que la Defensoría tenga un presupuesto que asegure un cierto grado de autonomía financiera, sujetos a su Constitución y a los principios fundamentales de su sistema jurídico. Al depender del Ministerio de Finanzas para sus recursos

152. Presentación de la Defensoría del Pueblo, *supra* nota 145.

153. Defensoría del Pueblo, *supra* nota 14.

financieros podría dar la impresión que el Defensor del Pueblo podría ser controlado indirectamente, lo que podría minar la confianza en esta institución. Asimismo, podría surgir una situación en que el Defensor del Pueblo tuviera que investigar al Ministerio, del cual depende para sus recursos. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 5.4.2 en la sección 5.4 del capítulo II de este informe).

[210] También se le informó al Comité durante la visita *in situ* que aunque el Defensor del Pueblo está facultado para formular recomendaciones —que pueden variar desde rectificar los efectos de una decisión o acción incorrecta, mejorar o implementar nuevos procedimientos administrativos o prácticas o cambios legislativos—, el Defensor del Pueblo no tiene la autoridad para obligar a un departamento gubernamental o autoridad a cumplir con las recomendaciones. El hecho que los departamentos y autoridades no emprenden las acciones que se requieren para concluir las investigaciones es un motivo de preocupación identificado por el Defensor del Pueblo.¹⁵⁴ En vista que estas recomendaciones están orientadas a promover la buena gobernabilidad y una administración pública justa y capaz, receptiva y sensible hacia el público, el Estado analizado debería considerar implementar medidas o mecanismos para asegurar que las recomendaciones se estén tomando en cuenta. Tales medidas incluyen el establecimiento de plazos, con mecanismos de aplicación adecuados, para que los departamentos o autoridades gubernamentales le respondan al Defensor del Pueblo y le indiquen las medidas que se están adoptando para implementar la recomendación y que se actualice la información periódicamente hasta que se haya abordado la supuesta injusticia administrativa. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 5.4.3 en la sección 5.4 del capítulo II de este informe).

[211] Otro asunto que se le planteó al Comité durante la visita *in situ* fue la falta de plazos para que los departamentos o autoridades gubernamentales suministren información o documentos para una investigación. Como se señaló en la sección 5.1, el Defensor del Pueblo está autorizado a obligar a las personas o instituciones a entregar documentos para una investigación, tanto según la Constitución como la Ley del Defensor del Pueblo.¹⁵⁵ Sin embargo, durante la visita *in situ* se le informó al Comité que hay problemas para persuadir a los departamentos o autoridades que entreguen los documentos relevantes para el procedimiento ante el Defensor del Pueblo. Aunque la Defensoría está facultada para obligar al cumplimiento, el Defensor del Pueblo le informó al equipo durante la visita *in situ* que no le agrada aplicar esta atribución, pues la comunidad en Trinidad y Tobago es relativamente pequeña, y que prefiere usar persuasión moral y razonamiento para fomentar una mayor cooperación con los departamentos y las autoridades. De hecho, esto está bien reflejado en el 34 Informe Anual del Defensor del Pueblo, donde declara que:

[212] *“Reitero mi preocupación que, independientemente de los treinta y cuatro años que ha existido la Defensoría del Pueblo en Trinidad y Tobago, muchos funcionarios públicos y funcionarios gubernamentales locales parecen no conocer el papel y las funciones del Defensor del Pueblo y de la Defensoría. De hecho, en numerosas ocasiones mis solicitudes de información relevante para una investigación se han enfrentado a falta de cooperación y agilidad y me he visto obligada a utilizar mis atribuciones formales de coerción para asegurar que se actúe.*

[213] *Mi opinión es que las atribuciones formales de la Defensoría se deberían usar poco. Por ello me perturba que ahora con frecuencia tengo causas para invocar el uso de mi Facultad de Citación según la sección 97 de la Constitución para obtener documentos y otra información crítica*

154. Ver el 34 Informe Anual del Defensor del Pueblo, pág. 17, *supra* nota 150.

155. Ver la sección 4 de la Ley, rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/2.52.pdf.

*pertinente para una investigación. Para reducir la necesidad de utilizar estas atribuciones, estoy promoviendo activamente el papel de la Defensoría, en particular entre los principales altos mandos, para generar un nuevo clima de cooperación.*¹⁵⁶

[214] En vista de lo anterior, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar implementar plazos para que los departamentos o autoridades gubernamentales cumplan las solicitudes de información y documentos relevantes del Defensor del Pueblo. Esto le proporcionaría al Defensor del Pueblo una herramienta adicional para exigir el cumplimiento sin tener que recurrir a sus atribuciones formales de coerción, que podrían afectar el clima de cooperación esencial para el trabajo general de esta importante institución. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 5.4.4 en la sección 5.4 del capítulo II de este informe).

[215] Una importante función que lleva a cabo el Defensor del Pueblo es recibir quejas por escrito de personas a quienes se les denegó el acceso a un documento oficial por la autoridad pública. El Defensor del Pueblo examina el documento, si existe, y formula recomendaciones con respecto al acceso al documento según lo considere apropiado dentro de los siguientes treinta días o tan pronto como sea viable.¹⁵⁷ El Comité observa que la Ley de Libertad de Información señala que una persona agraviada por una denegación por parte de una autoridad pública de otorgar acceso a un documento oficial debe haber recibido una respuesta por escrito de dicha autoridad dentro de los 30 días siguientes a la solicitud.¹⁵⁸ Sin embargo, como lo señaló el Defensor del Pueblo en su Informe Anual 2011, de 24 solicitudes recibidas para revisión, un tercio se debían a la falta de respuesta de la autoridad pública correspondiente. Al respecto, el Defensor del Pueblo afirmó:

[216] *“Quiero reiterar que las autoridades públicas tienen la obligación legal de responder a estas solicitudes según la Ley de Libertad de Información dentro de un plazo de treinta días, y tienen la obligación de auxiliar a los ciudadanos cuando es necesario. Los funcionarios públicos deben reconocer y apreciar la importancia de su función según la Ley de Libertad de Información al considerar las solicitudes del público. La Ley de Libertad de Información fue promulgada para adjudicarles a los ciudadanos el derecho de acceso a la información. Cualquier cosa que le resta méritos a este derecho contraviene las disposiciones de la Ley de Libertad de Información y es una infracción.”*¹⁵⁹

[217] En este sentido, el Comité observa que aunque la Ley de Libertad de Información prevé que un solicitante también tiene derecho de solicitar ante la Corte Superior una revisión judicial si una autoridad pública no cumple el plazo de 30 días, esto puede representar un obstáculo financiero para que un solicitante acuda a los tribunales, además de requerir tiempo. En vista de lo anterior, el Estado analizado podría contemplar enmendar la Ley para otorgarle al solicitante el derecho de queja ante el Defensor del Pueblo en casos en que una autoridad pública no entrega una respuesta por escrito dentro del plazo de treinta días. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 5.4.5 en la sección 5.4 del capítulo II de este informe).

5.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[218] La Defensoría del Pueblo suministra resultados exhaustivos con respecto a su trabajo y funciones, como figura en sus informes anuales. Por ejemplo, su 34 Informe Anual contiene once

156. 34 Informe Anual del Defensor del Pueblo, págs. 5-6, *supra* nota 150.

157. Sección 38(A) de la Ley sobre la Libertad de Información, *supra* nota 146.

158. Ver las secciones 15 y 23 de la Ley de Libertad de Información, *Ibid.*

159. 34 Informe Anual del Defensor del Pueblo, pág. 14, *supra* nota 150.

cuadros sobre los siguientes puntos: quejas recibidas durante el período de enero a diciembre de 2011, quejas nuevas recibidas durante 2011 y las trasladadas de años anteriores, distribución de las quejas nuevas contra ministerios, departamentos y dependencias en 2011, quejas nuevas recibidas en la oficina de Puerto España durante el período de enero a diciembre de 2011, distribución de las quejas nuevas recibidas en la oficina de Puerto España en 2011, quejas nuevas recibidas en la oficina de San Fernando durante el período de enero a diciembre de 2011, quejas nuevas recibidas en la oficina de Tobago durante el período de enero a diciembre de 2011, quejas recibidas en la oficina de Tobago durante 2011 y las trasladadas de años anteriores, distribución de las quejas nuevas recibidas en la oficina de Tobago en 2011, y sinopsis del número de personas que visitaron la Oficina Regional en 2011.¹⁶⁰

[219] Los resultados están desglosados con gran detalle. Por ejemplo, durante 2011 la Defensoría recibió 1.775 quejas, de las cuales 425 fueron desestimadas por corresponder a un asunto privado y no a una decisión del gobierno, 24 eran solicitudes basadas en la Ley de Libertad de Información, 575 eran consultas o canalizaciones y, de estas, 751 se investigaron y 231 se concluyeron. En términos globales, incluyendo las quejas de años anteriores, hubo 3.378 quejas, 2.354 se investigaron, 1.127 se concluyeron y 1.227 están todavía en proceso de investigación.

[220] Las quejas también se desglosaron por ministerio, autoridad o dependencia involucrada, el número total de quejas en esas instituciones de gobierno, cuántas fueron notificadas o canalizadas, cuántas admitidas o rectificadas, cuántas estaban todavía en proceso de investigación y cuántas se retiraron o cancelaron. Por ejemplo, con respecto al Departamento de las Comisiones de Servicio se recibieron 6 quejas, 2 fueron notificadas o canalizadas y 4 estaban en proceso de investigación. Con respecto al Poder Judicial se recibieron 8 y las 8 fueron notificadas o canalizadas.

[221] Aunque el Comité observa que estas estadísticas son exhaustivas, considera que el Defensor del Pueblo también podría suministrar datos sobre los resultados de las evaluaciones de quejas. La Ley del Defensor del Pueblo prevé que durante o después de cualquier investigación en que el Defensor del Pueblo opina que existen pruebas de incumplimiento del deber, mala conducta o delito penal por parte de cualquier funcionario o empleado, puede remitir el caso a la autoridad correspondiente para que se inicie un proceso disciplinario o de otra índole.¹⁶¹ Al revisar las estadísticas suministradas en el informe anual, es difícil comprender lo que implica que una queja sea notificada o canalizada. Por ejemplo, según lo indicado en el párrafo anterior, las 8 quejas recibidas con respecto al Poder Judicial fueron notificadas o canalizadas. Si fueron canalizadas, no hay información sobre qué autoridad recibió la canalización y por qué motivo. Si se canalizaron por un asunto disciplinario, también debería especificarse este punto.¹⁶²

160. 34 Informe Anual del Defensor del Pueblo, pág. 35, *Ibid.*

161. Ley del Defensor del Pueblo, Sección 3(4), *supra* nota 155.

162. A este respecto, el Estado analizado, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, señaló que ciertos tipos de quejas originan cuestiones que deberían manejar aquellos organismos especialmente creados y equipados para abordarlas. Por ejemplo, la Comisión para las Industrias Reguladas se estableció para manejar quejas derivadas de la insatisfacción de los ciudadanos con los estándares de las empresas de servicios públicos. La Comisión emplea ingenieros y otro personal técnico que posee la capacidad y los conocimientos técnicos para investigar eficazmente asuntos relacionados con problemas en la prestación de servicios de electricidad y las fallas en la distribución de agua. Cuando se establecen instancias especializadas para el desempeño de ciertas funciones, las quejas que caen en el ámbito de estas instancias son remitidos por Defensor del Pueblo para que se resuelvan y se tomen las medidas necesarias. Se les informa por escrito a los reclamantes sobre esta remisión y se les recomienda que se comuniquen con la instancia en cuestión para la eventual solución de sus quejas. Al cierre de las investigaciones, los resultados de la evaluación de las quejas se clasifican como sigue: 1) Rectificado – se refiere a asuntos resueltos; 2) Remitido – se refiere a asuntos que se le han enviado a la autoridad correspondiente para su resolución; 3) No admitido – se refiere a asuntos en los cuales se determina que los reclamantes no

[222] Además, el Defensor del Pueblo también podría considerar suministrar información sobre el resultado de sus investigaciones, específicamente, sobre si las instituciones gubernamentales están cumpliendo con sus recomendaciones. Si se hacen públicas las instituciones que no han rectificado una injusticia administrativa por recomendación del Defensor del Pueblo, esto podría servir como incentivo para que estas instituciones tomen medidas pertinentes y no aparezcan en una lista de incumplimiento.

[223] Por último, el Comité observa que los informes anuales suministran información sobre el número de solicitudes recibidas con base en la Ley sobre la Libertad de Información en un año para revisión, las cuales totalizaron 24 en 2011. De estas, una tercera parte fueron solicitudes de intervención con fundamento en esta Ley como resultado de falta de respuesta a una solicitud de la autoridad pública correspondiente. Sin embargo, no se suministra información adicional sobre el resultado de estas solicitudes, y el Defensor del Pueblo podría contemplar suministrar información sobre el resultado de estas quejas, desglosada de la misma manera que las quejas recibidas con base en su competencia constitucional. El Comité formulará recomendaciones al respecto (ver recomendaciones 5.4.6, 5.4.7 y 5.4.8 en la sección 5.4 del capítulo II de este informe).

5.4. Conclusiones y recomendaciones

[224] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la Defensoría del Pueblo en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[225] La República de Trinidad y Tobago ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer la Defensoría del Pueblo, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.

[226] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 5.4.1 Suministrar a la Defensoría del Pueblo los recursos presupuestales y humanos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones, dentro de los recursos disponibles, incluido el suministro de instalaciones adecuadas (ver sección 5.2 del capítulo II de este informe).
- 5.4.2 Sujetándose a su Constitución y a los principios fundamentales de su sistema jurídico, implementar medidas o mecanismos para establecer un presupuesto para la Defensoría del Pueblo que asegure un cierto grado de autonomía financiera (ver sección 5.2 del capítulo II de este informe).
- 5.4.3 Establecer plazos, con mecanismos de aplicación adecuados, para que los departamentos o autoridades gubernamentales le respondan al Defensor del Pueblo y le indiquen las medidas adoptadas para implementar una recomendación, incluyendo actualizaciones periódicas hasta que se haya abordado la supuesta injusticia administrativa (ver sección 5.2 del capítulo II de este informe).

han sufrido una injusticia como consecuencia de una falta administrativa; 4) Admitido – se refiere a asuntos en los cuales se determina que el reclamante ha sufrido una injusticia debido a una falta administrativa; 5) Asesorado – se refiere a asuntos en los cuales se suministran asesoría y explicaciones exhaustivas con respecto a la legalidad e idoneidad de la aplicación de ciertas políticas, disposiciones reglamentarias y leyes con respecto a las operaciones de los departamentos gubernamentales.

- 5.4.4 Establecer plazos para que los departamentos o autoridades gubernamentales cumplan las solicitudes de información y documentos relevantes del Defensor del Pueblo con respecto a una investigación (ver sección 5.2 del capítulo II de este informe).
- 5.4.5 Considerar enmendar la Ley de Libertad de Información para otorgarles a los solicitantes el derecho de queja ante el Defensor del Pueblo en casos en que una autoridad pública no cumpla con el plazo legislativo para suministrar una respuesta por escrito a una solicitud con base en la Ley de Libertad de Información (ver sección 5.2 del capítulo II de este informe).
- 5.4.6 Mantener resultados exhaustivos sobre las canalizaciones a otras autoridades de procedimientos disciplinarios, como la identidad de la autoridad y los motivos de la canalización, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas (ver sección 5.2 del capítulo II de este informe).
- 5.4.7 Publicar una lista de las instituciones gubernamentales que no han cumplido con las recomendaciones del Defensor del Pueblo para corregir una injusticia administrativa (ver sección 5.2 del capítulo II de este informe).
- 5.4.8 Mantener información sobre los resultados de las solicitudes basadas en la Ley de Libertad de Información, desglosada de la misma manera que las quejas recibidas con base en su competencia constitucional, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas (ver sección 5.2 del capítulo II de este informe).

III. BUENAS PRÁCTICAS

[227] De conformidad con lo previsto en el apartado IV de la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda* y en la *Estructura* adoptada por el Comité para los informes de dicha Ronda, se alude a una buena práctica que planea ejecutar el Estado analizado, en relación con la coordinación entre las agencias de investigación sobre asuntos relacionados con el lavado de activos. También se prevé lograr con ello una cantidad mayor de enjuiciamientos por este delito.¹⁶³

IV. SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS¹⁶⁴

[228] El Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos nuevos dados por la República de Trinidad y Tobago en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por el Comité para su implementación en los informes de la Primera Ronda, sobre las que estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas¹⁶⁵, y procederá, según corresponda, a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesitan atención adicional por el Estado analizado, y si es el caso, se referirá a la

163. Respuesta al cuestionario, págs. 63-65, *supra* nota 43.

164. El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido reformuladas se encuentra incluido en el Anexo I de este Informe.

165. Disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/tto.htm

vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.

[229] El Comité también tomará nota en este apartado del informe de las dificultades que para la implementación de las aludidas recomendaciones y medidas haya puesto de presente el Estado analizado, y de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal fin.

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación:

Considerar fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los conflictos de intereses.

Medidas a(i), (ii), y (iii) sugeridas por el Comité, que requieren atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Fortalecer las medidas en materia de conflictos de intereses con respecto a los miembros del Poder Judicial, así como de aquellas personas con funciones judiciales, con sujeción a la Constitución del país y los principios fundamentales de su sistema jurídico, tomando en cuenta lo siguiente:

- i. La conveniencia de definir, en un código de conducta para funcionarios judiciales, qué acciones constituirían 'conducta indebida'. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)*
- ii. Revisar las disposiciones pertinentes para eliminar conflictos de constitucionalidad que hagan que las disposiciones de la Ley de Integridad en la Función Pública no se apliquen a los jueces. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)*
- iii. Crear códigos de conducta específicos para los funcionarios judiciales, que promuevan medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas, así como los mecanismos encaminados a hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)*

[230] En su respuesta, el Estado analizado observó que la Comisión de Integridad está revisando actualmente estas tres medidas.¹⁶⁶ Al respecto, el Comité observa que existen códigos de conducta para el servicio público, como los del servicio civil, policial, carcelario, de bomberos y docente, que figuran en el reglamento de la legislación que sirve como marco jurídico para cada uno de estos servicios. No obstante, la Ley del Servicio Judicial y Jurídico, en la que se establecen los cargos en el servicio judicial y jurídico, no tiene un reglamento que contenga un código de conducta para estos funcionarios, que están bajo esfera de competencia de la Comisión de Servicios Judiciales y

166. Respuesta al cuestionario, pág. 15, *supra* nota 43.

Jurídicos. Hasta donde llega la información de que dispone el Comité, estos son los únicos funcionarios públicos en el servicio público de Trinidad y Tobago que no disponen de un código de conducta. Parece que nada impide la promulgación de este código, pues la Ley prevé en su sección 16 que se pueden promulgar reglamentos para regir las responsabilidades y la conducta de estos funcionarios.

[231] Los Anexos Primero y Segundo de la Ley del Servicio Judicial y Jurídico incluyen una lista de los numerosos puestos judiciales y jurídicos sujetos a esta Ley, entre ellos los de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos. Se incluyen puestos jurídicos como los fiscales y consejeros parlamentarios, así como puestos judiciales como los magistrados, funcionarios forenses y administradores ejecutivos y secretarios de los tribunales. Otros puestos jurídicos y judiciales en la esfera de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos incluyen al Presidente y al Vicepresidente de la Junta de Apelaciones en Materia Fiscal y a los Jueces Adjuntos (Masters) de la Corte Superior.¹⁶⁷ El número total de puestos jurídicos y judiciales bajo la esfera de la Comisión es de aproximadamente 300.¹⁶⁸ El Comité observa que existe un Código de Ética aplicable a los funcionarios jurídicos dentro de la Ley de la Profesión Jurídica, cuyo incumplimiento es abordado por un comité disciplinario.¹⁶⁹ El Comité observa también que se están adoptando códigos de conducta específicos, como el Código para Fiscales que trabajan en la Dirección de la Fiscalía.¹⁷⁰

[232] Asimismo, el Comité observa que el Estado analizado, en el Informe de Avances presentado en la XV Reunión del Comité de Expertos¹⁷¹ declaró que:

[233] *“Mediante Acción de la Corte Superior 1735 de 2005, la Comisión de Integridad solicitó un fallo a la Corte respecto a la aplicabilidad de los requisitos de rendición de informes de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública de 2000 para jueces y magistrados. El 15 de octubre de 2007 la Corte determinó que exigir que los jueces rindieran cuentas a la Comisión de Integridad constituiría una violación de sus términos y condiciones, por lo que no se les debe exigir tal rendición de cuentas. La Corte determinó también que los jueces y magistrados en Trinidad y Tobago no están sujetos a la Ley sobre la Integridad en la Función Pública de 2000.”*¹⁷²

[234] Aunque la Corte determinó que la Ley sobre la Integridad en la Función Pública era inconstitucional en su aplicación a jueces y magistrados, el Comité observa que no parece haber impedimento constitucional para que el Poder Judicial establezca su propio código de conducta para los jueces. Otros códigos semejantes que podrían servir como orientación son los Principios Éticos para los Jueces del Consejo Judicial Canadiense,¹⁷³ la Guía de Conducta Judicial del Consejo de

167. Ver la sección 4(2) de la Ley de la Junta de Apelaciones en Materia Fiscal, rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/4.50.pdf y la sección 65A de la Ley de la Suprema Corte de Judicatura, rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/4.01.pdf.

168. Ver Cometido, Responsabilidades y Composición de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, sdc.org.tt/index.php/en/the-service-commissions/104-judicial-a-legal-service-commission/89-jlsc-roles-responsibilities-a-composition.

169. Véase los Anexos Tres y Cuatro de la Ley de la Profesión Jurídica, rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/90.03.pdf.

170. Véase el Código de Fiscales, supra nota 104.

171. Informe de Avances presentado en la XV Reunión del Comité de Expertos, págs. 1-2, www.oas.org/juridico/english/mec_avance_ttoXV.pdf.

172. Acción de la Corte Superior 1735 de 2005, webopac.ttlawcourts.org/LibraryJud/Judgments/HC/jones/2007/HCA_1735_05DD15Oct07.rtf.

173. Principios Éticos para los Jueces del Consejo Judicial Canadiense, www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_judicialconduct_Principles_en.pdf

Jueces de Inglaterra y Gales¹⁷⁴ y la Guía de Conducta Judicial del Consejo de Presidentes de las Cortes de Australia,¹⁷⁵ y los Principios de Conducta Judicial de Bangalore.¹⁷⁶ Este código podría abordar principios como independencia judicial, integridad, diligencia, igualdad e imparcialidad, y se podrían plantear ejemplos sobre lo que constituye ‘mala conducta’, como lo establece la sección 137(1) de la Constitución para los jueces, que indica el procedimiento para la destitución de los jueces. Además, podría considerarse también una declaración de intereses para el Poder Judicial.¹⁷⁷ Para ello, el Instituto para la Educación Judicial, cuya misión es “*promover la excelencia en la administración de justicia en La República de Trinidad y Tobago a través de capacitación y desarrollo continuo de los jueces, otros funcionarios judiciales y personal no judicial adscrito al Poder Judicial,*” podría desempeñar un papel importante.¹⁷⁸

[235] En vista de lo anterior, el Comité considera la reformulación de las medidas (a)(i), (ii) y (iii) de la recomendación de la sección 1.1 de capítulo IV de este informe, como sigue:

[236] Establecer un código de conducta para los funcionarios judiciales que promueva medidas para crear, mantener y fortalecer normas para el cumplimiento correcto, honorable y apropiado de las funciones públicas (ver medida (a)(i) en la sección 1.1 del Anexo 1 de este informe).

[237] Establecer un código de conducta para los jueces que promueva medidas para crear, mantener y fortalecer normas para el cumplimiento correcto, honorable y apropiado de las funciones públicas, que incluya considerar la presentación de una declaración de intereses (ver medida (a)(ii) en la sección 1.1 del Anexo 1 de este informe).

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Crear un mecanismo que permita a las Comisiones de Servicios celebrar audiencias administrativas y destituir a funcionarios públicos sobre la base de la conclusión de que han participado en actividades que impliquen corrupción, independientemente que se inicien procedimientos contra ellos ante un tribunal de justicia. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[238] En su respuesta, el Estado analizado señala que el Código de Conducta (el Reglamento del Servicio Civil) y el Reglamento de la Comisión del Servicio Público prevén las medidas disciplinarias que se adoptarán contra los servidores públicos, entre las cuales la Regla 110 del Reglamento del Servicio Público se refiere a la destitución.¹⁷⁹ El Comité observa que el tema identificado en la Primera Ronda, que condujo a la medida (b) era la prohibición según la Regla 111(1) del Reglamento del Servicio Público de entablar procedimientos administrativos en contra de

174. Guía de Conducta Judicial del Consejo de Jueces de Inglaterra y Gales

www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Guidance/guide-judicial-conduct-aug2011.pdf.

175. Guía de Conducta Judicial, Consejo de Presidentes de las Cortes de Australia,

www.aija.org.au/online/GuidetoJudicialConduct.pdf.

176. Principios de Conducta Judicial de Bangalore,

www.aija.org.au/online/GuidetoJudicialConduct.pdfwww.unodc.org/pdf/corruption/corruption_judicial_res_e.pdf.

177. Por ejemplo, Canadá, que comparte la misma tradición legal que Trinidad y Tobago, requiere que sus jueces, como los Jueces de su Corte Suprema, presenten una declaración confidencial de sus activos y pasivos. Ver la sección 22 de La Ley sobre Conflictos de Intereses, laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-36.65.pdf.

178. Instituto para la Educación Judicial,

www.ttlawcourts.org/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=114.

179. Respuesta al cuestionario, págs. 16-17, *supra* nota 43.

un funcionario cuando se ha instituido un procedimiento penal en su contra.¹⁸⁰ Sin embargo, la Regla 111 fue revocada en 1991 y, por consiguiente, los motivos para la recomendación de la medida ya no son válidos, pues no existe ya esta prohibición.

[239] En vista de lo anterior, el Comité considera pertinente eliminar la medida (b) de la recomendación aludida de la sección 1.1 del capítulo IV del presente informe.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Analizar e introducir en los reglamentos de las Comisiones de Servicio las modificaciones que convengan para asegurar que los procesos de averiguación y disciplina no acarreen largos retrasos. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[240] Con respecto a la medida aludida, en su respuesta, el Estado analizado presenta información.¹⁸¹ Al respecto, el Estado analizado observa que la Regla 90(5) del Reglamento del Servicio Público prevé que los funcionarios investigadores produzcan un informe a más tardar a los 30 días de la fecha de la designación. Además, este Reglamento está actualmente en proceso de enmienda para permitir que la gestión de casos se introduzca a las comisiones investigadoras disciplinarias para prevenir demoras en la consideración y conclusión de los casos, además que se está preparando un proyecto de enmienda para permitir que los tribunales hagan modificaciones menores a los cargos disciplinarios. Con ello se reducirán las demoras porque los casos no tendrán que remitirse nuevamente a la Comisión del Servicio Público para su enmienda.

[241] El Comité observa que durante la visita *in situ*, la organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago expresó su preocupación por las prolongadas demoras en los procedimientos que provocan que en ocasiones las personas ya no sean servidores públicos para cuando se concluyen los procesos. Además, los representantes declararon que las investigaciones no son ágiles y que la imposición de una sanción disciplinaria puede tomar 10 años.

[242] Durante la visita, el equipo planteó este punto con respecto al Departamento de la Comisión de Servicios y, como se dijo en la sección 3.2 de este informe, reconoció que había un volumen considerable de casos atrasados y que era difícil llevar a cabo en 30 días una investigación para remitir un informe a una Comisión. Se expresaron como motivos que el Departamento no dispone de personal suficiente y que los investigadores no están capacitados en temas jurídicos. El Comité observó también que muchas de las decisiones de los árbitros únicos han tenido que ser anuladas debido a que el Secretario Permanente o el Jefe de Departamento no había integrado correctamente la comisión.

[243] En vista que en la sección 3.2 de este informe se analizan más detalladamente los problemas de las demoras prolongadas en las investigaciones y los procesos disciplinarios, el Comité considera pertinente eliminar la medida (c) de la recomendación aludida de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe y hacer referencia a las recomendaciones 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 y 3.4.8 en la sección 3.4 del capítulo II de este informe.

180. Informe sobre la implementación en Trinidad y Tobago de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda, pág. 12, www.oas.org/juridico/english/mec_rep_tto.pdf.

181. Respuesta al cuestionario, págs. 17-18, *supra* nota 43.

Medida d)(i) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Fortalecer las disposiciones contenidas en la Ley sobre la Integridad en la Función Pública tomando en cuenta lo siguiente:

- i. *Establecer un sistema para asegurar que la Comisión de Integridad cuente con los recursos suficientes para cumplir sus funciones.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[244] Con respecto a la medida aludida, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos acontecimientos.¹⁸² Al respecto, el Comité observa que aunque dispone de recursos financieros adecuados, sufre restricciones en cuanto a recursos humanos e instalaciones. Para abordar este punto, la Comisión de Integridad se propone contratar a un consultor de recursos humanos que aconseje una estructura adecuada para la Comisión.

[245] El Comité observa que durante la visita *in situ*, la organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago expresó su preocupación sobre los recursos disponibles para la Comisión de Integridad y señaló que no dispone de recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo.

[246] En vista que en la sección 1.2 de este informe se analizan más detalladamente los problemas de los recursos de la Comisión de Integridad, el Comité considera pertinente eliminar la medida (d)(i) de la recomendación aludida de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe y hacer referencia a la recomendación 1.4.7 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe.

Medida d)(ii) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Fortalecer las disposiciones contenidas en la Ley sobre la Integridad en la Función Pública tomando en cuenta lo siguiente:

- ii. *Llevar a cabo un análisis de los reglamentos existentes y modificarlos cuando así convenga para asegurar que la Comisión de Integridad cuente con un sistema para capacitar, informar y responder a solicitudes de asesoría y consulta de los servidores públicos, en cumplimiento de su mandato.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[247] Con respecto a la medida aludida, el Estado analizado presenta información y nuevos acontecimientos en su respuesta al cuestionario.¹⁸³ Recientemente se han impartido varios seminarios para las personas del servicio público y se planea instrumentar un programa de educación pública en el futuro dirigido a los servidores públicos o personas que ejercen funciones públicas en relación con el código de conducta. Asimismo, en abril de 2012 se instituyó un sistema de auditorías de los órganos públicos, según lo dicta la Ley sobre la Integridad en la Función Pública.

[248] En vista que en la sección 1.2 de este informe se analizan más detalladamente los problemas de la capacitación, el Comité considera pertinente eliminar la medida (d)(ii) de la recomendación

182. Respuesta al cuestionario, pág. 19, *supra* nota 43.

183. *Ibid.*

aludida de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe y hacer referencia a la recomendación 1.4.11 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe.

Medida d)(iii) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Fortalecer las disposiciones contenidas en la Ley sobre la Integridad en la Función Pública tomando en cuenta lo siguiente:

- iii. *Asegurar que los Órganos de Control Superior competentes tengan un sistema para que los servidores públicos cumplan las disposiciones del Código de Conducta de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, incluyendo la firma de un compromiso escrito al respecto.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[249] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida d)(iii) de la anterior recomendación. En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver medida (b)(i) en la sección 1.1 del Anexo 1 de este informe).

Medida d)(iv) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Fortalecer las disposiciones contenidas en la Ley sobre la Integridad en la Función Pública tomando en cuenta lo siguiente:

- iv. *Aprobar medidas específicas cuando sea apropiado para cubrir conflictos de intereses que pudieran surgir en todas las ramas del gobierno.* (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[250] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida d)(iv) de la anterior recomendación. El Comité observa que la razón para esta medida era asegurar que las disposiciones de la Ley cubrieran conflictos de intereses en todos los ámbitos del gobierno, como aduanas, recaudación tributaria, contabilidad pública, adquisiciones y contratación. La definición de ‘las personas que ejercen funciones públicas’ incluye a todas las personas que ocupan cargos del Servicio Público, el Servicio Judicial y Jurídico, el Servicio de Policía, el Servicio de Docencia y la Comisión de Servicio de las Autoridades Estatutarias, además de los miembros del Servicio Diplomático y los asesores del gobierno. Parecería que la legislación existente cubre todos los ámbitos del gobierno con respecto a conflictos de intereses, excluyendo los asuntos constitucionales que han surgido con respecto a los jueces, que se examinaron arriba.

[251] Sin embargo, el Comité desea subrayar que en la totalidad del servicio público en Trinidad y Tobago se está reclutando cada vez más a empleados por contrato para trabajar en el servicio público, pero que no son considerados parte del servicio público.¹⁸⁴ A manera de ejemplo, en la información adicional suministrada en la respuesta al cuestionario, el Estado analizado observó que la Comisión

184. Ver, por ejemplo, el cuadro que aparece en la página 7 de la respuesta Trinidad y Tobago al cuestionario de la Segunda Ronda de Análisis, que muestra un incremento considerable en el uso de estos tipos de contratos. Por ejemplo, en 2001, se registraron 809 individuos empleados por contrato, mientras que para 2006 la cifra había aumentado a 5.289, www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_tto_resp_en.doc.

de Integridad está integrada tanto de empleados contratados como de empleados del servicio público, y que son 21 y 10 respectivamente.¹⁸⁵ Así pues, hay más empleados por contrato que empleados del servicio público trabajando en la Comisión, lo que significa que la mayoría de las personas empleadas por la Comisión no están bajo la esfera de competencia de la Ley y, por ende, no están tampoco obligadas a obedecer el Código de Conducta. Una de las recomendaciones que está considerando la Comisión de Integridad, como lo expresó durante la visita *in situ*, es enmendar la Ley para que el Código sea aplicable a todas las personas que manejan fondos públicos y no solamente a quienes ejercen funciones públicas. Para ello, el Estado analizado también debería considerar incluir a los empleados por contrato, en vista de las importantes responsabilidades que están desempeñando estas personas en el servicio público, a la vez que no forman parte del mismo. El Comité formulará una recomendación al respecto

[252] En vista de lo anterior, el Comité considera la reformulación de la medida (d)(iv) de la recomendación de la sección 1.1 de capítulo IV de este informe, como sigue:

[253] Requerir que los empleados por contrato se sujeten al Código de Conducta de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, así como todas personas que manejan fondos públicos (ver medida (b)(ii) en la sección 1.1 del Anexo 1 de este informe).

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Incluir en el Reglamento del Servicio Civil y en el Reglamento (de Enmienda) del Servicio Civil, en la medida que corresponda, disposiciones que se refieran específicamente a la detección y prevención de conflictos de intereses. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[254] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (e) de la anterior recomendación. En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver medida (c) en la sección 1.1 del Anexo 1 de este informe).

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Analizar y cuando convenga modificar los reglamentos existentes para asegurar que el proceso disciplinario de la Comisión del Servicio de Policía sea eficiente y eficaz y asegurar que la Comisión cuente con los recursos necesarios para funcionar a cabalidad. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[255] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (f) de la anterior recomendación. En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver medida (d) en la sección 1.1 del Anexo 1 de este informe).¹⁸⁶

185. Información adicional al cuestionario, págs. 5-6, *supra* nota 9.

186. El país analizado observa que con la promulgación de la Ley (de Enmienda) Constitucional de 2006, la Comisión del Servicio de Policía está facultada para destituir de su puesto y ejercer control disciplinario exclusivamente sobre el Comisionado de Policía y los tres Subcomisionados de Policía, *supra* nota 123.

Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Alentar la actualización de una versión más general del propuesto Código de Ética para Parlamentarios incluyendo a los Ministros, que la actualmente en vigor, incluyendo en ella disposiciones similares a las contenidas en el Código de Conducta de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública y las disposiciones sobre su aplicación. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[256] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (g) de la anterior recomendación. En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver medida (e) en la sección 1.1 del Anexo 1 de este informe).

[257] El Comité observa que durante la visita *in situ*, la organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago declaró que con respecto al Código de Ética para Parlamentarios, incluyendo a los Ministros, no ha habido cambios.

Medida h) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Establecer al Comité Permanente de Ética del Parlamento como un comité obligatorio del mismo, y asegurar que forme parte del Reglamento de la Cámara de Representantes y del Senado. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[258] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (h) de la anterior recomendación. En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver medida (f) en la sección 1.1 del Anexo 1 de este informe).

[259] El Comité observa que durante la visita *in situ*, la organización de la sociedad civil Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago señaló que nunca se ha convocado el Comité de Ética Permanente.

Medida j) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Guardando el equilibrio con el derecho constitucional de la libertad del trabajo de los individuos, incluir en el sistema legal restricciones pertinentes y adecuadas para quienes cesan en la función pública, dentro de un período razonable posterior al cese, con respecto a actividades que puedan conducir a que aprovechen indebidamente su calidad de ex funcionarios públicos. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.1.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[260] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (j) de la anterior recomendación. En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver medida (g) en la sección 1.1 del Anexo 1 de este informe).

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

Recomendación:

Considerar el fortalecimiento de la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respeto al control de los recursos de la administración pública.

Medida sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Llevar a cabo un análisis del uso y la eficacia de las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos y de los mecanismos que existen en la República de Trinidad y Tobago para asegurar el cumplimiento de estas normas, como instrumentos para prevenir la corrupción. Como resultado de este análisis, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar, consolidar o asegurar la eficacia de estos instrumentos para tal fin. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.2.3 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[261] En su respuesta, el Estado analizado observó que la Comisión de Integridad no ha tomado ninguna medida al respecto.¹⁸⁷ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de esta medida (ver la medida única en la sección 1.2 del Anexo 1 de este informe).

1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

Recomendación 1.3:

Considerar crear los mecanismos con los que cuenta el Estado analizado para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Incorporar a la legislación existente la obligación de que todos los servidores públicos informen sobre los actos de corrupción de los que tengan conocimiento durante el ejercicio de sus funciones públicas, y encomendar la capacitación al respecto a la Comisión correspondiente. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[262] En su respuesta, el Estado analizado señaló que la Comisión de Integridad está prestando atención actualmente a este punto.¹⁸⁸ Asimismo, la Comisión del Servicio Público apuntó que la capacitación debe ser impartida por el Departamento de Personal, pues la capacitación sobre la

187. Respuesta al cuestionario, pág. 25, *supra* nota 43.

188. *Ibid.*, pág. 27.

denuncia de actos de corrupción no se relaciona con las funciones constitucionales de la Comisión del Servicio Público.

[263] El Comité observa que en la Primera Ronda, el Estado analizado declaró que no existe ninguna norma de conducta que exija a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre actos de corrupción en la función pública. Además, la Ley sobre la Integridad en la Función Pública establece como voluntario y no como obligatorio que cualquier miembro del público informe sobre actos de corrupción.¹⁸⁹ La recomendación se formuló con el fin de hacer frente al hecho que los servidores públicos no están obligados a denunciar actos de corrupción, y se hizo referencia a la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, con respecto a que la Comisión correspondiente, que es la Comisión de Integridad, debía impartir capacitación. El Comité observa, sin embargo, que esta Ley no se aplica a los jueces o magistrados, debido a una decisión de la Corte Superior, con lo que un número importante número de funcionarios públicos quedarían excluidos de recibir capacitación si el Estado analizado cumpliera con esta recomendación dirigiéndola exclusivamente al papel de la Comisión de Integridad. Se podría considerar la capacitación impartida por el Departamento de Personal, pero el Comité observa que la responsabilidad de este Departamento es determinar y asesorar sobre salarios y otros términos y condiciones de servicio y no necesariamente determinar normas de conducta para los funcionarios públicos e impartir capacitación.

[264] En vista de lo anterior, el Comité considera la reformulación de la medida (a) de la recomendación de la sección 1.3 de capítulo IV de este informe, como sigue:

[265] Incorporar a la legislación existente el requisito que todos los servidores públicos informen sobre los actos de corrupción de los que tengan conocimiento durante el ejercicio de sus funciones públicas, y que la capacitación al respecto sea impartida por las autoridades correspondientes (ver medida (a) en la sección 1.3 del Anexo 1 de este informe).

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Analizar los resultados de las investigaciones que llevan a cabo las Comisiones de Investigación para evaluar la eficacia de la legislación existente. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 1.3.3 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[266] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (e) de la anterior recomendación.¹⁹⁰ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver medida (b) en la sección 1.3 del Anexo 1 de este informe).

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

Considere fortalecer los sistemas de declaración de ingresos, activos y pasivos.

189. Informe de la Primera Ronda, pág. 18, *supra* nota 180.

190. Respuesta al cuestionario, pág. 28, *supra* nota 43.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Modificar la Ley sobre la Integridad en la Función Pública en su Sección 41(2) para que la aprobación de los formatos de la declaración y sus reglamentos se sujete solamente a resolución negativa del Parlamento, o no se sujete a ningún tipo de resolución. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[267] En su respuesta, el Estado analizado señaló que la Comisión de Integridad está prestando atención actualmente a este punto.¹⁹¹

[268] El Comité observa que en el Informe de la Primera Ronda, el Comité determinó que el requisito de obtener resolución afirmativa del Parlamento para enmiendas futuras en su formato de declaración y en los reglamentos obstaculizaba el trabajo de la Comisión de Integridad, observación que comparte la misma Comisión de Integridad.¹⁹² Durante la visita *in situ*, los representantes hicieron referencia a varias enmiendas propuestas a la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, que incluían enmiendas a los formatos de declaración que los haría más eficaces para detectar actos de corrupción y conflictos de intereses y que también se están proponiendo en su Plan Estratégico para 2012-2015.¹⁹³ La información adicional que deberá incluirse en los nuevos formatos para declaración incluye las contribuciones financieras o de otras índoles a partidos políticos; beneficios financieros o de otros tipos otorgados a funcionarios públicos; beneficios financieros o de otros tipos recibidos por funcionarios públicos; todos los negocios asociados; todos los casos de suministro de bienes y servicios al Estado; todos los casos de acuerdos de tenencia entre el Estado y el declarante; así como mayor información sobre conflictos en lo relacionado con empresas privadas; y otras relaciones comerciales.¹⁹⁴ Asimismo, como se discutió en la sección 1.2, hay propuestas de la Comisión de Integridad para promulgar el reglamento de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública.¹⁹⁵

[269] Estas importantes iniciativas demuestran la voluntad continua de la Comisión de Integridad de enfrentar mejor la corrupción en el servicio público, y el Comité reitera su observación de la Primera Ronda de Análisis en el sentido que el requisito de obtener resolución afirmativa para enmiendas futuras en el formato de declaración o para promulgar reglamentos podría obstaculizar el trabajo de la Comisión.

[270] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de esta medida (ver medida (a) en la sección 2 del Anexo 1 de este informe).

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Otorgar mayores facultades a la Comisión de Integridad para que pueda imponer sanciones directamente a las personas en la función pública que infrinjan las Secciones 11, 13 o 14 de la Ley

191. *Ibid.*, pág. 29.

192. Informe de la Primera Ronda, pág. 22, *supra* nota 180.

193. Ver el 24 Informe Anual de la Comisión de Integridad, 2011, pág. 36, *supra* nota 12.

194. Solicitud de Revisión del Cometido de la Comisión de Integridad, *supra* nota 16.

195. Ver recomendación 1.4.5 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe.

sobre Integridad en la Función Pública. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[271] En su respuesta, el Estado analizado señaló que la Comisión de Integridad está prestando atención actualmente a este punto.¹⁹⁶

[272] El Comité observa que el tema del cumplimiento se analizó a profundidad en la sección 1.2 del capítulo II de este informe. No solamente existen problemas de cumplimiento con respecto a la declaración de ingresos, activos y pasivos, como se señaló en las secciones 11, 13 y 14 de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, sino también con respecto al Código de Conducta que contiene dicha Ley.

[273] En vista que en la sección 1.2 de este informe se analizan más detalladamente los problemas relacionados con el cumplimiento en relación con la función de la Comisión de Integridad como órgano de control superior, el Comité considera pertinente eliminar la medida (b) de la recomendación aludida de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe y hacer referencia a la recomendación 1.4.1 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Analizar la posibilidad de que los procesos adelantados por un tribunal con base en la Sección 16(2) de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública sean públicos. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[274] En su respuesta, el Estado analizado señaló que la Comisión de Integridad está prestando atención actualmente a este punto.¹⁹⁷ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de esta medida (ver medida (b) en la sección 2 del Anexo 1 de este informe).

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Asegurar que las Comisiones de Servicio establezcan disposiciones para recibir las declaraciones de intereses de sus miembros. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[275] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (d) de la anterior recomendación.¹⁹⁸ La Comisión del Servicio Público observa, empero, que la recomendación es errónea, ya que debe ser la Comisión de Integridad la que reciba las declaraciones de interés de los miembros de la Comisión del Servicio Público, y la Comisión del Servicio Público no debe recibir declaraciones de sus propios miembros.¹⁹⁹

[276] El Comité observa que la sección 30 de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, que sirvió como fundamento para la recomendación, prevé que “quienes ocupan cargos en las distintas Comisiones de Servicio en Trinidad y Tobago tienen la obligación, a su nombramiento y

196. Respuesta al cuestionario, pág. 30, *supra* nota 43.

197. *Ibid.*, pág. 31.

198. *Ibid.*, pág. 32.

199. *Ibid.*

ocasionalmente según se requiera, de declarar a la Comisión correspondiente todos los intereses y actividades comerciales, empresariales y financieros en que participa y todos los bienes, activos y pasivos personales con respecto de la persona, su cónyuge y sus hijos dependientes. El término ‘Comisión correspondiente’ parece indicar que estas declaraciones se le deben presentar a la Comisión de Servicio a la que se designó a persona. La nota al margen parece apoyar esta interpretación, pues dice ‘Declaración a la Comisión de Servicio.’ Por consiguiente, las Comisiones de Servicio tienen el deber de recibir las declaraciones de las personas que designan para un cargo público. Adicionalmente, el Comité observa que el Anexo de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, que identifica a las personas del servicio público obligadas a presentar una declaración a la Comisión de Integridad, no incluye a los miembros integrantes mismos de la Comisión de Servicio. El Comité observa que si el Parlamento tuviera la intención de requerir que los miembros de las Comisiones de Servicio presentaran sus declaraciones a la Comisión de Integridad, los habría incluido en el Anexo de la Ley. El Comité observa asimismo que una de las propuestas de la Comisión de Integridad para la actualización de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública es incluir al Presidente y a los miembros de todas las Comisiones de Servicio, así como a los de la misma Comisión de Integridad, entre otros, en el Anexo de la Ley.²⁰⁰

[277] En vista de lo anterior, el Comité considera la reformulación de la medida (d) de la recomendación de la sección 2 de capítulo IV de este informe, como sigue:

[278] Asegurar que las Comisiones de Servicio hayan establecido medidas para recibir declaraciones de intereses de las personas designadas por ellas y de los miembros de las Comisiones mismas (ver medida (c) en la sección 2 del Anexo 1 de este informe).²⁰¹

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Analizar las disposiciones sobre las declaraciones de intereses para asegurar que todos los empleados públicos en posiciones apropiadas tengan que presentar estas declaraciones, incluyendo a los miembros del Servicio Diplomático y asesores del gobierno. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[279] Con respecto a la medida aludida, en su respuesta, el Estado analizado señaló que la Comisión de Integridad está prestando atención actualmente a este punto.²⁰²

[280] Según lo indicado en el análisis de la medida (d) de esta sección, la Comisión de Integridad está proponiendo ampliar la lista de funcionarios obligados a presentar una declaración de intereses que figura en el Anexo de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública. Además del Presidente y de los Miembros de la Comisión de Integridad y de las Comisiones de Servicio, se propone incluir importantes cargos en el servicio público, como el Comisionado de Transporte, el Comisionado de Policía, el Director de Inmigración, el Presidente de la Autoridad de Hacienda, el Contralor de Aduanas y los asesores especiales y técnicos de los ministros.²⁰³ La lista podría incluir también a los

200. Solicitud de Revisión del Cometido de la Comisión de Integridad, *supra* nota 16.

201. A este respecto, el Estado analizado, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, señaló que la Comisión propone hacer obligatoria la presentación de declaraciones de ingresos, activos y pasivos por los miembros de las diversas comisiones, incluida la Comisión de Integridad. La propuesta es que las declaraciones de los miembros de las otras comisiones se le entreguen a la Comisión de Servicio y los de los miembros de la Comisión de Integridad posiblemente el Presidente.

202. Respuesta al cuestionario, pág. 33, *supra* nota 43.

203. Solicitud de Revisión del Cometido de la Comisión de Integridad, *supra* nota 16.

miembros del servicio diplomático. Considerando el alto nivel de responsabilidades y el impacto que podrían tener estos altos puestos en la implementación de la política pública, el Comité considera que el Estado analizado debería considerar ampliar el Anexo de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública.

[281] En vista de lo anterior, el Comité considera la reformulación de la medida (e) de la recomendación de la sección 2 de capítulo IV de este informe, como sigue:

[282] Ampliar el Anexo de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública para incluir otros cargos públicos con responsabilidades de alto nivel en la implementación de la política pública (ver medida (d) en la sección 2 del Anexo 1 de este informe).

Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Reglamentar las condiciones, procedimientos y otros aspectos relacionados con la publicación de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, y de intereses registrables en la medida que corresponda. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[283] Con respecto a la anterior medida, en su respuesta, el Estado analizado señaló que la Comisión de Integridad está prestando atención actualmente a este punto.²⁰⁴

[284] El Comité observa que de acuerdo con la sección 20 de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, todas las declaraciones de ingresos, activos y pasivos son secretas y confidenciales y no se publican excepto cuando se solicita la entrega de una declaración o registro concreto para los fines o en relación con cualquier trámite en un tribunal o alguna averiguación con respecto a un declarante con base en la IPLA y otras leyes. Además, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, la Comisión de Integridad señaló que no propone que se enmiende esta sección.

[285] En vista de lo anterior, el Comité considera que la medida (f) de la recomendación de la sección 2 de capítulo IV de este informe ha dejado de tener vigencia.

Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Utilizar las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, y de intereses registrables para detectar y/o prevenir conflictos de intereses y situaciones de enriquecimiento ilícito.

[286] Con respecto a la anterior medida, en su respuesta, el Estado analizado observó que la declaración de ingresos, activos y pasivos es sometida a escrutinio y análisis en los que se compara el aumento del patrimonio con los ingresos anuales declarables, a fin de detectar casos de enriquecimiento ilícito.²⁰⁵

[287] El Comité observa que la Ley sobre la Integridad en la Función Pública no prevé la revisión por la Comisión de Integridad de las declaraciones de intereses de las personas del servicio público que presentan declaraciones de ingresos, activos y pasivos. Cierta información importante contenida

204. Respuesta al cuestionario, pág. 34, *supra* nota 43.

205. Respuesta al cuestionario, pág. 35, *supra* nota 43.

en la declaración, como los detalles de una dirección, los contratos celebrados con el Estado, las inversiones en sociedades o empresas, entre otros, así como cualquier interés que pudiera parecer que genera un conflicto sustancial entre los intereses privados de una persona y sus deberes públicos no se está utilizando para detectar o prevenir conflictos de intereses. Además, a diferencia del requisito de presentar una declaración de activos, ingresos y pasivos, no existe el requisito que el cónyuge o los hijos dependientes presenten este tipo de declaración.

[288] Asimismo, el Comité observa que incluso si la Comisión de Integridad detecta un caso de enriquecimiento ilícito, el delito de enriquecimiento ilícito no se ha tipificado en el Estado analizado, lo cual se analizó en el Informe sobre la implementación en Trinidad y Tobago de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Tercera Ronda y en dicho informe se formularon recomendaciones al respecto.²⁰⁶

[289] En vista de lo anterior, el Comité considera la reformulación de la medida (g) de la recomendación de la sección 2 de capítulo IV de este informe, como sigue:

[290] Utilizar la declaración de intereses registrables que presentan las personas del servicio público a fin de detectar y prevenir conflictos de intereses (ver medida (e) en la sección 2 del Anexo 1 de este informe).

[291] Considerar enmendar la Ley sobre la Integridad en la Función Pública para exigir que los intereses de cónyuges e hijos dependientes se incluyan en la declaración de intereses registrables de las personas del servicio público (ver medida (f) en la sección 2 del Anexo 1 de este informe).

Medida h) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Establecer mecanismos o implementar los existentes —como las campañas en los medios de comunicación y la información en instituciones académicas y públicas— dirigidos a los ciudadanos en general o a aquellos que podrían estar interesados en ejercer funciones públicas, que garanticen un conocimiento profundo del propósito y el alcance de los preceptos relativos a las declaraciones de ingresos, activos y pasivos y el registro público de intereses. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[292] Con respecto a la anterior medida, en su respuesta, el Estado analizado observó que la Comisión ha emprendido acciones para ampliar la cobertura de sus actividades por los medios de comunicación y que las mejorará.²⁰⁷ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de esta medida (ver medida (e) en la sección 2 del Anexo 1 de este informe).

[293] En vista que en la sección 1.2 de este informe se analizan más detalladamente los problemas de la difusión pública de la función de la Comisión de Integridad como órgano de control superior, el Comité considera pertinente eliminar la medida (g)(i) de la recomendación aludida de la sección 2 del capítulo IV de este informe y hacer referencia a la recomendación 1.4.10 en la sección 1.4 del capítulo II de este informe.

206. Informe sobre la implementación en Trinidad y Tobago de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Tercera Ronda, pág. 14, www.oas.org/juridico/english/mesicic_III_inf_tto.pdf.

207. Respuesta al cuestionario, pág. 36, *supra* nota 43.

Medida i) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Asegurar que se establezca el registro público de intereses de conformidad con la Sección 14 de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[294] Con respecto a la medida aludida, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos acontecimientos.²⁰⁸ En tal sentido, el Comité observa el siguiente como un paso que lo conduce a concluir que dicha medida ha sido considerada satisfactoriamente:

[295] – “*Actualmente está disponibles un Registro de Intereses manual. La Comisión está en proceso de establecer un registro computarizado.*”

[296] Este Comité observa que este registro se creó en 2004 y que se preparó y aprobó un procedimiento para que los ciudadanos lo inspeccionen.²⁰⁹

[297] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la medida de la anterior recomendación.

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolas con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político y social; y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las mismas.

Medida i) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Aclarar el papel del Secretario Permanente o Jefe de Departamento según el Reglamento de Servicio Civil (Reformado). (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[298] Con respecto a la medida aludida, en su respuesta, el Estado analizado observa que guarda relación con el Reglamento del Servicio Civil, por lo que le corresponde al Departamento de Personal.²¹⁰

[299] El Comité observa que esta recomendación se formuló por la conclusión que el Secretario Permanente o el Jefe de Departamento, según el Código de Conducta contenido en el Reglamento de Servicio Civil (Reformado), parece tener mayor libertad para decidir las medidas que deben adoptarse contra un empleado que según el Comité ha cometido un acto de mala conducta, en

208. *Ibid.*, pág. 37.

209. 17 Informe Anual al Parlamento, 2004, pág. 11, www.integritycommission.org.tt/reports.html.

210. Respuesta al cuestionario, pág. 38, *supra* nota 43.

comparación con el proceso disciplinario que sigue la Comisión del Servicio Público. El Comité observa, sin embargo, tras una lectura ulterior del Código de Conducta, que el Secretario Permanente o el Jefe de Departamento tiene libertad para determinar cómo resolver los intereses externos de un funcionario público que podrían comprometer o que razonablemente puede decir que comprometen el desempeño del trabajo o el cargo de dicho funcionario. El Secretario Permanente o el Jefe de Departamento determina la naturaleza y grado del compromiso y decide el curso apropiado para resolverlo, que podría implicar asignarle otras tareas al funcionario y hacérselo saber. Sin embargo, esto no abarca la mala conducta.

[300] En vista de lo anterior, el Comité considera pertinente eliminar la medida (i) de la recomendación aludida de la sección 3 del capítulo IV del presente informe.

Medida ii) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Modificar el Reglamento de la Comisión del Servicio Público para especificar que los Secretarios Permanentes o Jefes de Departamento deben notificar los actos de conducta indebida no menores a la Comisión del Servicio Público. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[301] Con respecto a la medida aludida, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos acontecimientos.²¹¹ En tal sentido, el Comité observa el siguiente como un paso que lo conduce a concluir que dicha medida ha sido considerada satisfactoriamente:

[302] – “*El Reglamento de la Comisión del Servicio Público dispone ya en su Regla 90 que los Secretarios Permanentes o Jefes de Departamento deben notificar los actos de mala conducta no menores a la Comisión del Servicio Público.*”

[303] *La Regla 90(1) establece que:*

[304] *90 (1) Cuando se recibe un informe o denuncia de indisciplina o mala conducta, salvo que se trate de un informe o denuncia de indisciplina o mala conducta al cual se aplique la Regla 85, el Secretario Permanente o el Jefe de Departamento debe notificar del caso al Director para información de la Comisión y simultáneamente advertir por escrito al funcionario sobre la denuncia de indisciplina o mala conducta, además de remitir de inmediato el caso a un funcionario investigador nombrado que él mismo designará. (La Regla 85 se refiere a acciones menores).”*

[305] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la medida de la anterior recomendación.

Medida iii) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Hacer que todos los Órganos de Control Superior mantengan y sistematicen información estadística que permita evaluar objetivamente los resultados del marco jurídico y de otras medidas. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 3.3 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

211. *Ibid.*, págs. 39-40.

[306] Con respecto a la anterior medida, en su respuesta, el Estado analizado observa que la Auditoría General no mantiene un registro de información estadística orientado a llevar a cabo una evaluación objetiva de los resultados del marco jurídico y otras medidas. Además, la Comisión de Integridad observa que mantiene datos estadísticos sobre los declarantes y las investigaciones.²¹²

[307] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de esta medida (ver la medida única en la sección 3 del Anexo 1 de este informe).

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)

4.1. Mecanismos de participación en general

Recomendación sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Continuar trabajando en la implementación de mecanismos formales o estatutarios dirigidos específicamente a estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. (La fundamentación de esta recomendación se encuentra en la sección 4.1.3 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[308] El Comité observa que no dispone de información con respecto a la recomendación aludida. En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de esta recomendación (ver recomendación 4.1 en la sección 3 del Anexo 1 de este informe).

4.2. Mecanismos para el acceso a la información

Recomendación:

Fortalecer los mecanismos para asegurar el acceso a la información.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Incluir dentro de la cobertura de la Ley sobre la Libertad de Información informes de las Comisiones de Investigación designadas por el Presidente una vez que hayan completado sus averiguaciones, así como a las autoridades públicas o funciones de las autoridades públicas designadas por el Presidente, tras haber sido examinadas por la Cámara de Representantes. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[309] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (a) de la anterior recomendación.²¹³

212. *Ibid.*, pág. 40.

213. *Ibid.*, pág. 42.

[310] El Comité observa que la Ley sobre la Libertad de Información dispone en su sección 5 que la Ley no es aplicable al Presidente, a una comisión de consultas designada por el Presidente, o a cualquier autoridad pública o función de una autoridad pública que determine el Presidente, mediante Orden sujeta a resolución negativa del Parlamento.²¹⁴

[311] Con respecto a las comisiones de consultas, el Comité observa que la Ley de Libertad de Información no se aplica al trabajo de una de estas comisiones, pero no necesariamente a los informes de estas comisiones.

[312] En vista de lo anterior, el Comité considera la reformulación de la medida (a) de la recomendación de la sección 4.2 de capítulo IV de este informe, como sigue:

[313] Incluir en la esfera de la Ley sobre la Libertad de Información a las autoridades públicas o funciones de las autoridades públicas exentas designadas por el Presidente, después de una revisión por la Cámara de Representantes (ver medida (a) en la sección 4.2 del Anexo 1 de este informe).

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Establecer criterios objetivos que pueda tomar en cuenta el Presidente para eximir de la cobertura de la Ley sobre la Libertad de Información ciertos documentos de autoridades y Comisiones de Investigación. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[314] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (a) de la anterior recomendación.²¹⁵

[315] Con respecto a la inaplicabilidad de la Ley a autoridades públicas o sus funciones, diez de ellas han recibido órdenes de exención: First Citizens Bank Group; the Trinidad and Tobago Unit Trust Corporation; el Banco de Exportación e Importación; El Banco de Desarrollo Agrícola; the Trinidad and Tobago Mortgage Finance Company Limited; the Taurus Services Limited; the Business Development Company Limited; the National Entrepreneurship Development Company Limited; the National Enterprises Limited; el Banco Central de Trinidad y Tobago; y la Comisión de Integridad de Trinidad y Tobago.²¹⁶

[316] En el análisis de la Primera Ronda, el Comité observó que resultaría útil establecer los criterios que toma en cuenta el Presidente para exentar de la Ley a las autoridades públicas, que según observa el Comité, ahora incluyen a importantes instituciones gubernamentales, como el Banco Central de Trinidad y Tobago y la Comisión de Integridad, que no estaban incluidas cuando se promulgó inicialmente la Ley.

[317] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de esta medida (ver medida (b) en la sección 4.2 del Anexo 1 de este informe).

214. Ley sobre la Libertad de Información, *supra* nota 146.

215. Respuesta al cuestionario, pág. 42, *supra* nota 43.

216. Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, Unidad de Libertad de Información, Exenciones, www.foia.gov.tt/node/37

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Considerar la posibilidad de revisar el alcance de la exención de los documentos del Gabinete. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.2.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[318] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (a) de la anterior recomendación.²¹⁷

[319] El Comité observa que los documentos del Gabinete en general incluyen temas delicados de importancia trascendental. No obstante, algunos documentos podrían no considerarse exentos, aunque los prepare el Gabinete, como los de naturaleza puramente factual anexos a un documento del Gabinete, por ejemplo, informes, estudios, pruebas o encuestas de carácter científico o técnico.²¹⁸

[320] El Comité observa adicionalmente que una revisión del alcance de la exención debe ser más amplia y no limitarse a los documentos del Gabinete. Al respecto, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar revisar el alcance de todos los documentos exentos, no solamente los del Gabinete, a fin de asegurar que no se obstruya el goce del derecho a la información como mecanismo eficaz en los esfuerzos de combate de la corrupción.

[321] En vista de lo anterior, el Comité considera la reformulación de la medida (c) de la recomendación de la sección 4.2 de capítulo IV de este informe, como sigue:

[322] Considerar revisar el alcance de todos los documentos exentos en la Ley de Libertad de Información, a fin de asegurar que no se obstruya el goce del derecho a la información como mecanismo eficaz en los esfuerzos de combate de la corrupción (ver medida (c) en la sección 4.2 del Anexo 1 de este informe).

[323] Además, el Comité observa que en la discusión sobre la Defensoría del Pueblo en la sección 5.2 del capítulo II de este informe, se hace referencia a la observación del Defensor del Pueblo que en las quejas recibidas con respecto a solicitudes con base en la Ley sobre la Libertad de Información, aproximadamente una tercera parte de las 24 que se recibieron en 2011 se refirieron al incumplimiento del plazo establecido de 30 días que dispone la Ley. Al respecto, el Defensor del Pueblo afirmó:

[324] *“Quiero reiterar que las autoridades públicas tienen la obligación legal de responder a estas solicitudes según la Ley de Libertad de Información dentro del plazo de treinta días, y tienen la obligación de auxiliar a los ciudadanos cuando es necesario. Los funcionarios públicos deben reconocer y apreciar la importancia de su función según la Ley de Libertad de Información al considerar las solicitudes del público. La Ley de Libertad de Información fue promulgada para adjudicarles a los ciudadanos el derecho de acceso a la información. Cualquier cosa que le resta méritos a este derecho contraviene las disposiciones de la Ley de Libertad de Información y es una infracción.”*²¹⁹

217. Respuesta al cuestionario, pág. 44, *supra* nota 43.

218. Ver, por ejemplo la sección 15(2) de la Ley de Acceso a la Información de Jamaica, www.jis.gov.jm/special_sections/ATI/ATI/ACT.pdf

219. 34 Informe Anual del Defensor del Pueblo, pág. 14, *supra* nota 150.

[325] Puesto que parece que las autoridades públicas no están cumpliendo su trabajo establecido en la Ley de responder por escrito dentro de los 30 días siguientes a la solicitud, el Comité considera que sería pertinente formular la siguiente medida para asegurar que el Estado analizado cumpla con la recomendación de fortalecer los mecanismos para asegurar el acceso público a la información.

[326] Asegurar que las autoridades públicas cumplan con su deber estatutario de responder por escrito dentro de los 30 días siguientes a una solicitud con base en la Ley de Libertad de Información y considerar establecer mecanismos para hacer cumplir esta norma (ver medida (d) en la sección 4.2 del Anexo 1 de este informe).

4.3. Mecanismos de consulta

Recomendación:

Fortalecer los mecanismos de consulta para asegurar que existan oportunidades de participación e intercambios de puntos de vista entre los miembros interesados del público y el Parlamento.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Considerar la posibilidad de instar a la Cámara de Representantes a incluir en su Reglamento la legislación pendiente como una de las cuestiones respecto a las cuales el Comité Selecto Conjunto puede solicitar aportes de organizaciones de la sociedad civil. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[327] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (a) de la anterior recomendación.²²⁰ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver medida (a) en la sección 4.3 del Anexo 1 de este informe).

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Adoptar normas que consideren la posibilidad de que miembros de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales formen parte de los consejos asesores o comités encargados de asesorar sobre el uso de los recursos públicos. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.3.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[328] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (b) de la anterior recomendación.²²¹ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver medida (b) en la sección 4.3 del Anexo 1 de este informe).

220. Respuesta al cuestionario, pág. 45, *supra* nota 43.

221. *Ibid.*, pág. 46.

4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que estimulen la participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en la gestión pública.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Continuar suministrando los comentarios de los medios de comunicación a todos los ámbitos del gobierno que puedan aprovecharlos. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.4.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[329] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (a) de la anterior recomendación.²²²

[330] El Comité observa que durante el análisis de la Primera Ronda, el Estado analizado declaró que usaba la opinión pública en la formulación de políticas a través de los medios de comunicación.²²³ En ese momento se formuló una recomendación para fomentar que todos los ámbitos de gobierno además del Parlamento utilizaran los comentarios de los medios de comunicación. Sin embargo, en vista que los medios de comunicación no son mecanismo del gobierno, el Comité observa que esta recomendación debería eliminarse.

[331] En vista de lo anterior, el Comité considera pertinente eliminar la medida (a) de la recomendación aludida de la sección 4.4 del capítulo IV del presente informe.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Desarrollar y promover los mecanismos y leyes para estimular la participación en la gestión pública, y considerar la conveniencia de crear nuevos mecanismos que hagan posible la vigilancia de la gestión pública de acuerdo con los objetivos de la Convención. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.4.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[332] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (b) de la anterior recomendación.²²⁴ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver medida (a) en la sección 4.4 del Anexo 1 de este informe).

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Poner a disposición del público las respuestas del Grupo de Líderes de Opinión. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.4.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

222. *Ibid.*, pág. 47.

223. Ver pág. 32 de la respuesta actualizada al cuestionario de la Primera Ronda de Análisis, www.oas.org/juridico/spanish/tto_res1.pdf.

224. Respuesta al cuestionario, pág. 48, *supra* nota 43.

[333] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (c) de la anterior recomendación.²²⁵

[334] El Comité observa, sin embargo, que los informes del Grupo de Líderes de Opinión están disponibles públicamente en el sitio web del Ministerio de Administración Pública: www.mpa.gov.tt/home/component/content/article/116.html.

[335] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la medida de la anterior recomendación.

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Analizar la conveniencia de incluir un aumento de la cantidad de reuniones públicas convocándolas en fechas regulares programadas y permitir que la sociedad civil pueda convocarlas. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.4.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[336] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (d) de la anterior recomendación.²²⁶ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver medida (b) en la sección 4.4 del Anexo 1 de este informe).

Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Modificar las leyes sobre difamación existentes para asegurar que no puedan utilizarse para reprimir potenciales denunciantes sobre casos de corrupción. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.4.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[337] Con respecto a la anterior medida, en su respuesta, el Estado analizado observa que el Instituto Internacional de la Prensa, con sede en Viena, se comunicó con el Departamento del Director de la Fiscalía para una reunión en junio de 2012 para discutir la reforma de las leyes sobre difamación y la libertad de los medios de comunicación. Además, el Departamento informa que en 2001 se redactó un Proyecto de Ley de Difamación, pero que se canceló a causa de posibles dificultades para generar suficiente apoyo público y político para la reforma.²²⁷

[338] Asimismo, el Comité observa que durante la visita *in situ*, los representantes de la Dirección de la Fiscalía declararon que la ley de difamación es una reliquia del pasado y que nunca se ha usado para un enjuiciamiento.²²⁸ No obstante, el Comité mantiene la observación que formuló en la Primera Ronda de Análisis que la Ley de Calumnias y Difamación permite a cualquier persona mencionada por la prensa en un asunto relacionado con corrupción o integridad solicitar una orden judicial y con ello prohibir cualquier publicación ulterior en los medios de comunicación.

225. *Ibid.*, pág. 49.

226. *Ibid.*

227. *Ibid.*, pág. 50.

228. La Ley de Calumnias y Difamación data de 1846 y su última enmienda, de 1950, rdg.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Alphabetical_List/lawspdfs/11.16.pdf.

[339] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de esta medida (ver medida (c) en la sección 4.4 del Anexo 1 de este informe).

4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y seguir implementando mecanismos que estimulen la participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en el seguimiento de la gestión pública.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Adoptar las medidas necesarias para asegurar que las nuevas reglas y normas para la participación en el seguimiento de la gestión pública se puedan supervisar y, de ser conveniente, hacer cumplir mediante la aplicación de sanciones. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.5.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[340] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (a) de la anterior recomendación.²²⁹ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver medida (a) en la sección 4.5 del Anexo 1 de este informe).

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Diseñar e implementar programas de difusión de los mecanismos de participación para el seguimiento de la gestión pública y, cuando corresponda, que ofrezcan capacitación y proporcionen las herramientas necesarias a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales para hacer uso de estos mecanismos. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.5.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[341] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (b) de la anterior recomendación.²³⁰ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver medida (b) en la sección 4.5 del Anexo 1 de este informe).

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Adoptar métodos que permitan que la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales ayuden a la creación de nuevos mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.5.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

229. Respuesta al cuestionario, pág. 52, *supra* nota 43.

230. *Ibid.*

[342] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la medida (c) de la anterior recomendación.²³¹ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver medida (c) en la sección 4.5 del Anexo 1 de este informe).

Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Revisar si la multa por la presentación maliciosa de quejas falsas ante la Comisión de Integridad es un impedimento a la participación de la sociedad civil. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 4.5.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[343] Con respecto a la anterior medida, en su respuesta, el Estado analizado observa que la Comisión de Integridad no ha revisado este asunto, pero podría hacerlo en el futuro.²³²

[344] El Comité observa que la recomendación estaba orientada a asegurar que la multa existente por presentar con conocimiento y malicia un informe falso ante la Comisión de Integridad o por engañarla proporcionando información falsa o presentando declaraciones o acusaciones falsas no tenga un efecto disuasivo para que las personas presenten quejas razonables que podrían ser improbables y difíciles de probar. En este caso, la preocupación consiste en que podría acusarse a esa persona de violar a la Ley sobre la Integridad en la Función Pública.

[345] En vista de lo anterior, el Comité considera la reformulación de la medida (d) de la recomendación de la sección 4.5 de capítulo IV de este informe, como sigue:

[346] Analizar si la multa por presentar con conocimiento y malicia una queja falsa ante la Comisión de Integridad tiene un efecto disuasivo para que alguien presente una queja de buena fe (ver medida (d) en la sección 4.5 del Anexo 1 de este informe).

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 5(a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República de Trinidad y Tobago considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.

[347] Con respecto a la anterior medida, en su respuesta, el Estado analizado observa que la Dirección de la Fiscalía ha impartido talleres de capacitación con la OEA sobre el uso eficaz de la Ley de Productos del Delito, enfocados específicamente a las personas de interés y a los altos funcionarios en diversos ámbitos de la vida.²³³ Además, esta Dirección planeó dos semanas de capacitación en agosto de 2012 y señaló que la experiencia de Estados Unidos es mucho más avanzada que la experiencia local para determinar y asignar prioridades a las distintas áreas que requieren cooperación técnica. Como resultado, la Dirección señala que el Estado analizado no tiene la capacidad para implementar ideas y técnicas.

231. *Ibid.*, pág. 53.

232. *Ibid.*, pág. 54.

233. *Ibid.*, pág. 55.

[348] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de esta medida (ver recomendación (a) en la sección 5 del Anexo 1 de este informe).

Recomendación 5(b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.

[349] Con respecto a la anterior medida, en su respuesta, el Estado analizado señala que las observaciones de la Dirección de la Fiscalía con respecto a la recomendación 5(a) también son aplicables a esta recomendación.²³⁴ Además, la Dirección indica que es frustrante implementar ideas de Estados Unidos y usar su experiencia como modelo por las diferencias en los niveles de preparación.

[350] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de esta medida (ver recomendación (b) en la sección 5 del Anexo 1 de este informe).

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Informar a la Secretaría General de la OEA sobre la designación de la autoridad o autoridades centrales para fines de la asistencia y cooperación internacionales previstas en la Convención. (La fundamentación de esta medida se encuentra en la sección 6.2 del capítulo II del informe de la Primera Ronda)

[351] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la anterior recomendación.²³⁵ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver la recomendación única en la sección 6 del Anexo 1 de este informe).

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendación 7.1 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.

[352] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la anterior recomendación.²³⁶ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el

234. *Ibid.*, pág. 56..

235. *Ibid.*, pág. 57.

236. *Ibid.*, pág. 58.

Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver recomendación 7.1 en la sección 7 del Anexo 1 de este informe).

Recomendación 7.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada, por parte del Estado analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.

[353] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la anterior recomendación.²³⁷ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver recomendación 7.2 en la sección 7 del Anexo 1 de este informe).

Recomendación 7.3 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

[354] En su respuesta, el Estado analizado no informó sobre nuevos acontecimientos con respecto a la anterior recomendación.²³⁸ En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de la misma (ver recomendación 7.3 en la sección 7 del Anexo 1 de este informe).

Recomendación 7.4 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Sistematizar los registros estadísticos generados por los Órganos de Control competentes que permitan el análisis objetivo de los resultados del marco jurídico y de otras medidas adoptadas.

[355] Con respecto a la medida aludida, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos acontecimientos.²³⁹ Al respecto, el Comité observa que la Dirección de la Fiscalía está en proceso de reestructuración y que se contratará a personas cuya única responsabilidad será recopilar y analizar datos y se mejorará la tecnología de información. En este sentido se ha elaborado una Nota para el Gabinete y la Dirección ha presentado sus propuestas y recomendaciones. Sin embargo, la Dirección de la Fiscalía señala que el éxito dependerá en gran medida que se disponga de los recursos necesarios, pues en una economía lenta se compite por recursos limitados.

237. *Ibid.*, pág. 59.

238. *Ibid.*, pág. 60.

239. *Ibid.*, pág. 61.

[356] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la necesidad que el Estado analizado preste atención adicional a la implementación de esta medida (ver recomendación 7.4 en la sección 7 del Anexo 1 de este informe).

ANEXO I

RECOMENDACIONES VIGENTES Y REFORMULADAS SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación:

Considerar el fortalecimiento de la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los conflictos de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.

Medidas sugeridas:

- a) Fortalecer las medidas en materia de conflictos de intereses con respecto a los miembros del Poder Judicial, así como de aquellas personas con funciones judiciales, con sujeción a la Constitución del país y los principios fundamentales de su sistema jurídico, tomando en cuenta lo siguiente:
 - i) Establecer un código de conducta para los funcionarios judiciales que promueva medidas para crear, mantener y fortalecer normas para el cumplimiento correcto, honorable y apropiado de las funciones públicas.
 - ii) Establecer un código de conducta para los jueces que promueva medidas para crear, mantener y fortalecer normas para el cumplimiento correcto, honorable y apropiado de las funciones públicas, que incluya considerar la presentación de una declaración de intereses.
- b) Fortalecer las disposiciones contenidas en la Ley sobre la Integridad en la Función Pública tomando en cuenta lo siguiente:
 - i) Asegurar que los Órganos de Control Superior competentes tengan un sistema para que los servidores públicos cumplan las disposiciones del Código de Conducta de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, incluyendo la firma de un compromiso escrito al respecto.
 - ii) Requerir que los empleados por contrato se sujeten al Código de Conducta de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública, así como todas personas que manejan fondos públicos.
- c) Incluir en el Reglamento del Servicio Civil y en el Reglamento (de Enmienda) del Servicio Civil, en la medida que corresponda, disposiciones que se refieran específicamente a la detección y prevención de conflictos de intereses.

- d) Analizar y cuando convenga modificar los reglamentos existentes para asegurar que el proceso disciplinario de la Comisión del Servicio de Policía sea eficiente y eficaz y asegurar que la Comisión cuente con los recursos necesarios para funcionar a cabalidad.
- e) Alentar la actualización de una versión más general del propuesto Código de Ética para Parlamentarios incluyendo a los Ministros, que la actualmente en vigor, incluyendo en ella disposiciones similares a las contenidas en—el Código de Conducta de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública y las disposiciones sobre su aplicación.
- f) Establecer al Comité Permanente de Ética del Parlamento como un comité obligatorio del mismo, y asegurar que forme parte del Reglamento de la Cámara de Representantes y del Senado.
- g) Guardando el equilibrio con el derecho constitucional de la libertad del trabajo de los individuos, incluir en el sistema legal restricciones pertinentes y adecuadas para quienes cesan en la función pública, dentro de un período razonable posterior al cese, con respecto a actividades que puedan conducir a que aprovechen indebidamente su calidad de ex funcionarios públicos.

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

Recomendación:

Considerar el fortalecimiento de la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respeto al control de los recursos de la administración pública.

Medida sugerida:

- Llevar a cabo un análisis del uso y la eficacia de las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos y de los mecanismos que existen en la República de Trinidad y Tobago para asegurar el cumplimiento de estas normas, como instrumentos para prevenir la corrupción. Como resultado de este análisis, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar, consolidar o asegurar la eficacia de estos instrumentos para tal fin.

1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

Recomendación:

Considerar crear los mecanismos con los que cuenta el Estado analizado para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medidas sugeridas:

- a) Incorporar a la legislación existente el requisito que todos los servidores públicos informen sobre los actos de corrupción de los que tengan conocimiento durante el ejercicio de sus funciones públicas, y que la capacitación al respecto sea impartida por las autoridades correspondientes.
- b) Analizar los resultados de las investigaciones que llevan a cabo las Comisiones de Investigación para evaluar la eficacia de la legislación existente.

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCION)

Recomendación:

Considere fortalecer los sistemas de declaración de ingresos, activos y pasivos.

Medidas sugeridas:

- a) Modificar la Ley sobre la Integridad en la Función Pública en su Sección 41(2) para que la aprobación de los formatos de la declaración y sus reglamentos se sujete solamente a resolución negativa del Parlamento, o no se sujete a ningún tipo de resolución.
- b) Analizar la posibilidad que los procesos adelantados por un tribunal con base en la Sección 16(2) de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública sean públicos.
- c) Asegurar que las Comisiones de Servicio hayan establecido medidas para recibir declaraciones de intereses de las personas designadas por ellas y de los miembros de las Comisiones mismas.
- d) Ampliar el Anexo de la Ley sobre la Integridad en la Función Pública para incluir otros cargos públicos con responsabilidades de alto nivel en la implementación de la política pública.
- e) Utilizar la declaración de intereses registrables que presentan las personas del servicio público a fin de detectar y prevenir conflictos de intereses.
- f) Considerar enmendar la Ley sobre la Integridad en la Función Pública para exigir que los intereses de cónyuges e hijos dependientes se incluyan en la declaración de intereses registrables de las personas del servicio público.

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCION)

Recomendación:

Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolas con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con

un mayor apoyo político y social; y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las mismas.

Medida sugerida:

- Hacer que todos los Órganos de Control Superior mantengan y sistematicen información estadística que permita evaluar objetivamente los resultados del marco jurídico y de otras medidas.

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)

4.1. Mecanismos de participación en general

Recomendación:

Continuar trabajando en la implementación de mecanismos formales o estatutarios dirigidos específicamente a estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

4.2 Mecanismos para el acceso a la información

Recomendación:

Fortalecer los mecanismos para asegurar el acceso a la información.

Medidas sugeridas:

- a) Incluir en la esfera de la Ley sobre la Libertad de Información a las autoridades públicas o funciones de las autoridades públicas exentas designadas por el Presidente, después de una revisión por la Cámara de Representantes.
- b) Establecer criterios objetivos que pueda tomar en cuenta el Presidente para eximir de la cobertura de la Ley sobre la Libertad de Información ciertos documentos de autoridades y Comisiones de Investigación.
- c) Considerar revisar el alcance de todos los documentos exentos en la Ley de Libertad de Información, a fin de asegurar que no se obstruya el goce del derecho a la información como mecanismo eficaz en los esfuerzos de combate de la corrupción.
- d) Asegurar que las autoridades públicas cumplan con su deber estatutario de responder por escrito dentro de los 30 días siguientes a una solicitud con base en la Ley de Libertad de Información y considerar establecer mecanismos para hacer cumplir esta norma.

4.3. Mecanismos de consulta

Recomendación:

Fortalecer los mecanismos de consulta para asegurar que existan oportunidades de participación e intercambios de puntos de vista entre los miembros interesados del público y el Parlamento.

Medidas sugeridas:

- a) Considerar la posibilidad de instar a la Cámara de Representantes a incluir en su Reglamento la legislación pendiente como una de las cuestiones respecto a las cuales el Comité Selecto Conjunto puede solicitar aportes de organizaciones de la sociedad civil.
- b) Adoptar normas que consideren la posibilidad que miembros de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales formen parte de los consejos asesores o comités encargados de asesorar sobre el uso de los recursos públicos.

4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que estimulen la participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en la gestión pública.

Medidas sugeridas:

- a) Desarrollar y promover los mecanismos y leyes para estimular la participación en la gestión pública, y considerar la conveniencia de crear nuevos mecanismos que hagan posible la vigilancia de la gestión pública de acuerdo con los objetivos de la Convención.
- b) Analizar la conveniencia de incluir un aumento de la cantidad de reuniones públicas convocándolas en fechas regulares programadas y permitir que la sociedad civil pueda convocarlas.
- c) Modificar las leyes sobre difamación existentes para asegurar que no puedan utilizarse para reprimir potenciales denunciantes sobre casos de corrupción.

4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y seguir implementando mecanismos que estimulen la participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en el seguimiento de la gestión pública.

Medidas sugeridas:

- a) Adoptar las medidas necesarias para asegurar que las nuevas reglas y normas para la participación en el seguimiento de la gestión pública se puedan supervisar y, de ser conveniente, hacer cumplir mediante la aplicación de sanciones.

- b) Diseñar e implementar programas de difusión de los mecanismos de participación para el seguimiento de la gestión pública y, cuando corresponda, que ofrezcan capacitación y proporcionen las herramientas necesarias a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales para hacer uso de estos mecanismos.
- c) Adoptar métodos que permitan que la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales ayuden a la creación de nuevos mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública.
- d) Analizar si la multa por presentar con conocimiento y malicia una queja falsa ante la Comisión de Integridad tiene un efecto disuasivo para que alguien presente una queja de buena fe.

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

Recomendaciones:

- a) Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República de Trinidad y Tobago considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.
- b) Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

Informar a la Secretaría General de la OEA sobre la designación de la autoridad o autoridades centrales para fines de la asistencia y cooperación internacionales previstas en la Convención.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendaciones:

- 7.1 Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.
- 7.2 Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada, por parte del Estado analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.

- 7.3 Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.
- 7.4 Sistematizar los registros estadísticos generados por los Órganos de Control competentes que permitan el análisis objetivo de los resultados del marco jurídico y de otras medidas adoptadas.

ANEXO II

**AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* A LA
REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO**

<u>Lunes 1 de octubre de 2012</u>	
16:00 hrs. – 17:00 hrs. <i>Por determinarse</i>	Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del subgrupo y la Secretaría Técnica
17:00 hrs. – 18:00 hrs. <i>Procuraduría General</i>	Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del subgrupo y la Secretaría Técnica <u>Participante:</u> Sra. Joan Furlonge, Asesora Jurídica del Procurador General
<u>Martes 2 de octubre de 2012</u>	
10:00 hrs. – 12:30 hrs. <i>Courtyard by Marriott Hotel en Puerto España</i>	Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores
	Temas: <ul style="list-style-type: none">• Perspectivas de la sociedad civil sobre los órganos de control superior del gobierno para prevenir, detectar, sancionar y erradicar actos de corrupción• Actividades para abordar el seguimiento de las Recomendaciones
	<u>Participantes:</u> <i>Instituto de Transparencia de Trinidad y Tobago</i> Sr. Deryck Murray, Presidente Sr. Josh Drayton, Director Sra. Lorraine Rostant, Directora Sra. Susan Gordon, Directora
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 18:30 hrs.	Comisión de Integridad

14:00 hrs. – 15:00 hrs.	<p>Panel 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre los objetivos, funciones y estructura de la institución (10 minutos) • Discusión del Plan Estratégico 2012-2015 <p><u>Participantes:</u> Sra. Lisa Ann Phillips, Subsecretaria Sra. Leigh Ann Campbell, Directora de Cumplimiento Sr. Richard Frederick, Director de Investigaciones Sr. Mervyn Crichlow, Funcionario de Comunicaciones Sra. Fayola Denoon, Funcionaria de Comunicaciones</p>
15:00 hrs. – 16:00 hrs.	<p>Panel 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recursos presupuestales y humanos • Coordinación con otros órganos gubernamentales <p><u>Participantes:</u> Sra. Lisa Ann Phillips, Subsecretaria Sra. Leigh Ann Campbell, Directora de Cumplimiento Sr. Richard Frederick, Director de Investigaciones Sr. Mervyn Crichlow, Funcionario de Comunicaciones Sra. Fayola Denoon, Funcionaria de Comunicaciones</p>
16:00 hrs. – 17:30 hrs.	<p>Panel 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda <ul style="list-style-type: none"> - Conflictos de intereses - Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos <p><u>Participantes:</u> Sra. Lisa Ann Phillips, Subsecretaria Sra. Leigh Ann Campbell, Directora de Cumplimiento Sr. Richard Frederick, Director de Investigaciones Sr. Mervyn Crichlow, Funcionario de Comunicaciones Sra. Fayola Denoon, Funcionaria de Comunicaciones</p>

17:30 hrs. – 18:30 hrs.	<p>Panel 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legislación inadecuada • Resultados de investigaciones <p><u>Participantes:</u> Sra. Lisa Ann Phillips, Subsecretaria Sra. Leigh Ann Campbell, Directora de Cumplimiento Sr. Richard Frederick, Director de Investigaciones Sr. Mervyn Crichlow, Funcionario de Comunicaciones Sra. Fayola Denoon, Funcionaria de Comunicaciones</p>
18:30 hrs.	Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del subgrupo y la Secretaría Técnica
<u>Miércoles 3 de octubre de 2012</u>	
08:30 hrs. – 12:30 hrs.	Auditoría General
08:30 hrs. – 10:00 hrs.	<p>Panel 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre los objetivos, funciones y estructura de la institución (10 minutos) • Coordinación con otros órganos gubernamentales • Recuperación de bienes públicos <p><u>Participantes:</u> Sr. Ali Majeeda, Auditor General Suplente Sra. Lorelly Pujadas, Auditora General Adjunta Sra. Gaitrie Maharaj, Auditora General Adjunta Sra. Jaiwantie Ramdass, Auditora General Adjunta Sra. Elizabeth Mofford-Benjamin, Auditora General Adjunta</p>
10:00 hrs. – 11:00 hrs.	<p>Panel 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuales y otros documentos • Capacitación

	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Sr. Ali Majeeda, Auditor General Suplente</p> <p>Sra. Lorelly Pujadas, Auditora General Adjunta</p> <p>Sra. Gaitrie Maharaj, Auditora General Adjunta</p> <p>Sra. Jaiwantie Ramdass, Auditora General Adjunta</p> <p>Sra. Elizabeth Mofford-Benjamin, Auditora General Adjunta.</p>
11:00 hrs. – 12:30 hrs.	<p>Panel 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de rendición de cuentas en el manejo de quejas ciudadanas
	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Sr. Ali Majeeda, Auditor General Suplente</p> <p>Sra. Lorelly Pujadas, Auditora General Adjunta</p> <p>Sra. Gaitrie Maharaj, Auditora General Adjunta</p> <p>Sra. Jaiwantie Ramdass, Auditora General Adjunta</p> <p>Sra. Elizabeth Mofford-Benjamin, Auditora General Adjunta</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 15:00 hrs.	Oficina de Investigaciones Anticorrupción
	<p>Panel 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre los objetivos, funciones y estructura de la institución (10 minutos) • Resultados
	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Sr. Solomon Koon Koon, Comisionado Adjunto</p> <p>Sr. Peter Dominique, Inspector</p> <p>Sr. Augustus Cato, Inspector</p> <p>Sr. Kenneth Morgan, Sargento</p> <p>Sr. Ravie K. Nanan, Sargento</p>
15:00 hrs. – 19:00 hrs.	Dirección de la Fiscalía

15:00 hrs. – 16:00 hrs.	<p>Panel 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre los objetivos, funciones y estructura de la institución (10 minutos) • Coordinación con otros órganos gubernamentales de conformidad con sus mandatos <p><u>Participantes:</u> Sra. Kathy Latchoo, Fiscal Adjunta Sr. Randall Hector, Procuradora</p>
16:00 hrs. – 17:00 hrs.	<p>Panel 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de rendición de cuentas <p><u>Participantes:</u> Sra. Kathy Latchoo, Fiscal Adjunta Sr. Randall Hector, Procuradora</p>
17:00 hrs. – 18:00 hrs.	<p>Panel 11:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda <ul style="list-style-type: none"> - Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública - Asistencia y cooperación <p><u>Participantes:</u> Sra. Kathy Latchoo, Fiscal Adjunta Sr. Randall Hector, Procuradora</p>
18:00 hrs. – 19:00 hrs.	<p>Panel 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultados y sistematización de los datos <p><u>Participantes:</u> Sra. Kathy Latchoo, Fiscal Adjunta Sr. Randall Hector, Procuradora</p>
19:00 hrs.	<p>Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del subgrupo y la Secretaría Técnica</p>
<u>Jueves 4 de octubre de 2012</u>	
08:30 hrs. – 11:00 hrs.	Departamento de las Comisiones de Servicio

08:30 hrs. – 09:30 hrs.	Panel 13: <ul style="list-style-type: none">• Breve presentación sobre los objetivos, funciones y estructura de la institución (10 minutos)• Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda<ul style="list-style-type: none">- Conflictos de intereses- Sistemas que requieren que los funcionarios públicos notifiquen los actos de corrupción- Órganos de control superior <u>Participantes:</u> Sra. Gloria Edwards-Joseph, Directora de Administración de Personal Sra. Natasha Seecharan, Asesora Jurídica Sra. Allison Douglas, Procuradora Senior
09:30 hrs. – 10:30 hrs.	Panel 14: <ul style="list-style-type: none">• Coordinación con otros órganos gubernamentales• Procedimientos disciplinarios <u>Participantes:</u> Sra. Gloria Edwards-Joseph, Directora de Administración de Personal Sra. Natasha Seecharan, Asesora Jurídica Sra. Allison Douglas, Procuradora Senior
10:30 hrs. – 11:00 hrs.	Panel 15: <ul style="list-style-type: none">• Rendición de cuentas <u>Participantes:</u> Sra. Gloria Edwards-Joseph, Directora de Administración de Personal Sra. Natasha Seecharan, Asesora Jurídica Sra. Allison Douglas, Procuradora Senior
11:00 hrs. – 12:30 hrs.	Defensoría del Pueblo
.	Panel 16: <ul style="list-style-type: none">• Breve presentación sobre los objetivos, funciones y estructura de la institución (10 minutos)• Recepción de quejas ciudadanas• Resultados.

	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Sra. Lynette Stephenson, Defensora del Pueblo</p> <p>Sra. Jeanine Boodhai, Directora Jurídica</p> <p>Sra. Yvette Hall, Funcionaria Ejecutiva</p> <p>Sra. Claire Davidson-Williams, Investigadora Senior</p> <p>Sra. Sita Deochand, Administradora de Redes</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del subgrupo y la Secretaría Técnica
14:00 hrs.	Reunión final entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del subgrupo y la Secretaría Técnica.

**AUTORIDAD DE CONTACTO DEL ESTADO ANALIZADO PARA LA COORDINACIÓN
DE LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL
SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC**

ESTADO ANALIZADO:

REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO

Joan Furlonge

Experta Titular ante del Comité de Expertos del MESICIC
Asesora Jurídica del Procurador General
Procuraduría General

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR:

Antigua y Barbuda

Kenroy Simmons

Oficial de Investigación Jurídica, Derecho Internacional
Procuraduría General

Brasil

Vania Vieira

Experta Titular ante el Comité de Expertos y Director de Prevención de la Corrupción en la
Contraloría General de Brasil

Marcello Miller

Fiscal
Ministerio Público Federal de Brasil

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC

Rodrigo Silva

Oficial Jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA